



REPÚBLICA ARGENTINA
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Salón “De las Provincias” — H. Senado de la Nación

28 de septiembre de 2010

Presidencia del señor senador Torres

— *En el Salón de las Provincias del Honorable Senado de la Nación, a las 10 y 29 del martes 28 de septiembre de 2010:*

Sr. Presidente (Torres). — Vamos a continuar con el debate sobre la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, debate que hemos empezado el martes 21. Esta es una continuación de esa reunión.

Tenemos una lista de invitados. Se encuentra presente la señora gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. Deseo señalar que la nota que ella había enviado la hemos leído oportunamente. Voy a proceder a leer las notas que hemos recibido, enviadas por gobernadores y algunas entidades que hemos invitado, que han fijado posición o que no concurren por diversos motivos.

Sra. Morandini. — Señor presidente: antes de comenzar, deseo solicitar lo siguiente: si este debate es continuación del anterior, me gustaría que pueda incluirse en esta lista al señor Machado Aráoz, que figuraba entre las personas invitadas la semana pasada y que, como venía de Catamarca, no pudo llegar.

Sr. Presidente. — Realizaremos la lectura de las notas y, luego, hablaremos sobre ese tema.

— *Se lee la nota enviada por el gobernador de la provincia de Neuquén, señor Jorge Sapag.*

Sr. Presidente. — Nos hemos comunicado con las oficinas del gobernador Sapag para preguntarle si era una postura personal o si se trataba de una postura de todos los gobernadores cordilleranos para llevar adelante la reunión que él proponía. Quedó en contestarnos, pero lamentablemente no fue así. Por lo tanto, quedó sin efecto la mencionada reunión.

— *Se lee la nota enviada por la Cámara de la Industria del Petróleo.*

— *A continuación, se lee la nota enviada por el señor gobernador de la provincia de Mendoza, señor Celso Alejandro Jaque.*

— *Por último, se lee la nota enviada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.*

Sr. Presidente. — La semana pasada hemos terminado, a sugerencia de los señores senadores, de escuchar a todas las organizaciones presentes que habían sido invitadas. Habían quedado la Secretaría de Ambiente de la Nación, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina, la Asociación Obrera Minera Argentina, la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, el Instituto Geológico de la Universidad Nacional de San Juan, que fue propuesto por la señora senadora Riofrío en la reunión de la semana pasada, y, por sugerencia del señor senador Alfredo Martínez, se ha reiterado la invitación —no había concurrido a la reunión del 21 porque se encontraba en las Naciones Unidas— al señor secretario de Medio Ambiente de la Nación, licenciado Homero Bibiloni, quien se encuentra presente. Reitero, también está presente la señora gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos.

La señora senadora Morandini propone que una de las personas que no pudo asistir a la reunión de la semana pasada pueda hacer uso de la palabra; esta persona pertenece a la Universidad de Catamarca.

Yo había transmitido que no iba a incluir absolutamente a nadie si no contaba con la aprobación de los miembros de la Comisión porque era lo que correspondía.

Sra. Morandini. — Tiene que quedar en claro que no es una persona que está entrando por la

ventana, sino que es una persona que figuraba en la lista de la semana pasada y no pudo llegar. Por eso, considero que si esta reunión es continuación de la anterior es una cuestión de justicia que esta persona pueda participar.

Sr. Presidente. — Quiero aclarar que todas las invitaciones y decisiones las tomamos en reunión de Comisión. Hacemos una lista, se contempla y después se cierra. Lo que les quiero explicar a todos los presentes es que para incorporar a algún invitado necesito el visto bueno de todos los integrantes de la Comisión.

Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Ayer me comunicaron que el señor Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, quería venir a dar su opinión sobre este tema. Si bien no estaba en la lista original, considerando que es un premio Nobel y una figura tan relevante de la vida pública argentina, creo que debería hacerse una excepción. Tal vez, los señores senadores podamos votar que venga.

Sr. Presidente. — Queda en consideración de los señores senadores integrantes de la Comisión.

Sra. Estenssoro. — Es una persona que se ocupa de temas sociales y ambientales.

Sr. Presidente. — Les solicito que no debatamos. Hay una propuesta concreta. Todos reconocemos los méritos y el valor personal de Adolfo Pérez Esquivel. Yo no tengo problema en escucharlo. Tenemos que ver si los demás señores senadores acompañan la propuesta. Ahora bien, diría que cerremos la lista porque hoy tenemos que sacar dictamen. Quiero aclarar que no se trata de una cuestión de mezquindad. Si hubiésemos tenido una semana más, tendríamos mucho más tiempo para escuchar a todas las personas que deseen hacer uso de la palabra. Si hubiésemos tenido dos semanas más, hubiésemos podido escuchar a muchas más personas. Sin embargo, por imperio del pleno del Senado, tenemos que tratar este proyecto el jueves 30 con o sin dictamen de Comisión. Por lo tanto, se va a requerir un tiempo prudencial para que los señores senadores nos aboquemos a elaborar los dictámenes y a debatir entre nosotros. Si cerramos la lista con el premio Nobel de la Paz, el señor Adolfo Pérez Esquivel, diría que demos comienzo a la sesión para hacerla efectiva. Invitaría a la gobernadora Fabiana Ríos para que se acerque y haga uso de la palabra.

Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.

Sra. Riofrío. — En realidad, considero que el planteo realizado por la señora senadora Morandini es razonable y es de justicia. Si había quedado inconclusa la reunión y por algún motivo particular, la persona no pudo estar presente, me parece que sí debemos considerarlo.

Ahora bien, no me parece bien plantear esto el último día, cuando tenemos una cantidad muy importante de expositores involucrados y con conocimiento técnico, profesional y económico sobre el tema; por más méritos, trayectoria y premios obtenidos por el señor Pérez Esquivel, no creo que sea determinante. Aparte, todos conocemos —por su trayectoria justamente— su opinión sobre el tema.

Es verdad, hubiera sido bueno tener más tiempo y haber estudiado y escuchado más, pero nos hemos puesto este término y me parece que mucha gente que ha sido invitada, se ha preparado, ha viajado y se merece el tiempo que le quitaríamos incorporando a otra persona; honestamente creo que no corresponde a esta altura del desarrollo de las reuniones.

Sr. Presidente. — Está en consideración de los integrantes de la Comisión. Sigo insistiendo en que tenemos un plazo. Si pudiésemos tomar la decisión de pasarlo para dentro de siete días, podríamos dedicarnos todo el día de hoy a seguir debatiendo este tema, escuchar opiniones, etcétera. No sé si, por la categoría del señor Pérez Esquivel, no sería bueno

escucharlo.

Tiene la palabra la señora gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego.

Sra. Ríos. — Francamente, no vengo aquí a traer ningún conocimiento técnico ni profesional ni de glaciología en relación con la ley de glaciares. Por lo tanto, si hay una cuestión de tiempo y estamos hablando del premio Nobel de la paz, no tengo ningún problema en darle el de la provincia de Tierra del Fuego al premio Nobel Pérez Esquivel, ya que la posición de la provincia ha sido expresada por escrito la semana pasada. Estaba aquí sólo a los fines de aclarar cualquier duda respecto de nuestra postura. Pero esto queda en manos de los senadores.

Sr. Presidente. — Yo diría que haga uso de la palabra la gobernadora de Tierra del Fuego y seguimos con las sesiones.

— *La señora senadora Estenssoro habla fuera del alcance del micrófono.*

Sra. Ríos. — En principio, agradezco a la Comisión del Senado por esta posibilidad de expresar la opinión del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego.

Como decía recién, no vengo aquí para hacer aportes de carácter técnico ni científico ni profesional. No vengo aquí a hablar ni de inversiones ni de emprendimientos. En realidad, me trae al Senado la posibilidad de dar una opinión política en relación con lo que son los presupuestos mínimos ambientales que tienen que ver con los reservorios de agua, como son los glaciares.

Con relación a esto, como ya fue expresado en la nota presentada la semana pasada, desde el gobierno de la provincia acompañamos la sanción que tuvo modificaciones en Diputados meses pasados, entendiendo que en esas modificaciones planteadas y acordadas entre los dictámenes de Diputados y Senadores se establece con mucha claridad el bien jurídico tutelado; se utilizan principios precautorios ante la ausencia de inventarios de glaciares y en la terminología utilizada no entendemos que se esté poniendo en juego ningún tipo de inversión en relación con nuestras provincias.

Se ha manifestado —esto sí ha sido consultado con profesionales de la Tierra del Fuego relacionados con desarrollo sustentable y ambiente— la cuestión vinculada con la definición de zonas periglaciales. En relación con ello, todos los glaciólogos y la documentación que ha sido consultada establecen que, en lo que tiene que ver con el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, sólo pueden ser definidas como tal aquellas zonas que estén por encima de los 900 metros. Quienes conocen la provincia de Tierra del Fuego saben que la zona más alta, por ejemplo, es el paso Garibaldi, que está a 450 metros de altura. Razón por la cual no hay ningún riesgo en relación con la posibilidad de explotaciones hidrocarbúrficas.

En lo que tiene que ver —reitero— con los presupuestos mínimos ambientales, no nos parece que sea un tema de discusión que pueda ser planteado en términos de falso federalismo. Nos compromete aquí un tema que tiene que ver nada más y nada menos que con un recurso vital como es el agua.

A veces, como en todas las cosas obvias, es muy difícil dar explicaciones. Me resulta muy difícil poder plantear que no hay explotación posible sin personas. No hay ninguna posibilidad de desarrollo económico sin seres humanos. Y creo que sobre lo que no hay ninguna dificultad en determinar como derecho humano básico el acceso al agua, una cuestión es la perspectiva humana y otra cuestión es la perspectiva política. La naturaleza y los ríos tienen la mala costumbre de no respetar las jurisdicciones provinciales; tienen la mala

costumbre de circular por cuencas no hemos definido las personas. Pero sí en la organización de los estados tenemos la responsabilidad, en lo que hace al orden jurídico, de hacer con la mayor responsabilidad esa administración de cuencas que justifique y garantice sobre todas las cosas un desarrollo humano de calidad y un desarrollo humano posible.

Es a partir de esto que nos negamos, como provincia, a discutir explotaciones económicas si no discutimos primero calidad de vida, acceso al agua y posibilidad de desarrollo sustentable, palabras muy poco utilizadas en los debates a los que pude acceder. Se habla de recursos naturales y no se habla de desarrollo sustentable. Creo que quienes hoy tenemos la responsabilidad política de definir estas pautas mínimas ambientales a través de las cuales vamos a preservar nuestros glaciares estamos necesitando poder pensar en las generaciones futuras, en el desarrollo no para nosotros sino para dejar un algo a las generaciones que siguen.

En lo que tiene que ver con nuestra provincia, sólo quiero comentarles que estamos trabajando en el inventario de glaciares y que, por una decisión política y como definición de política de estado, se ha presentado la prohibición de minería a cielo abierto. Está en tratamiento en la Cámara Legislativa.

Dicho esto, no es mi intención hacer abuso del tiempo brindado para dar ningún tipo de definición de tipo técnico, ya que me parecería una falta de respeto, en tenor de la calidad de los profesionales que han pasado por esta mesa. Sólo como representante del gobierno de la provincia vengo a decir que este acompañamiento tiene que ver con una profunda apuesta al desarrollo de las próximas generaciones de argentinos.

Sr. Presidente. — No sé si hay alguna pregunta para la gobernadora.

— *No se registran pedidos de palabra.*

Sr. Presidente. — Entonces, despedimos a la gobernadora, agradeciéndole por su exposición.

Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al señor secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, doctor Homero Bibiloni.

Sr. Bibiloni. — Agradezco la posibilidad de intervenir. Me excuso por la inasistencia de la semana anterior, pero ya había comunicado la presencia en la paralela de biodiversidad. Es el año de la diversidad biológica y Argentina tenía una posición a sostener en dicho ámbito y continuar negociaciones sobre cambio climático.

Cinco caracterizaciones previas a manifestar la posición de la Secretaría en materia de los proyectos que están en tratamiento en este Senado.

Lo primero que consideramos, para contextualizar nuestra posición, es nuestra absoluta convicción de la transversalidad de la cuestión ambiental, lo cual desarrollamos con todos los ministerios del Gabinete Nacional. No voy a citarlas, pero absolutamente con todos ellos tenemos acciones conjuntas. Asimismo, hay una interacción con consejos federales o estructuras participativas: con el Consejo Hídrico Federal, el Consejo Federal Agropecuario y con el CIN; además, desarrollando una política de cuencas.

En materia ambiental —esto tiene que ver con nuestra posición final—, se ha dicho mucho. Necesitamos acciones y no más discursos. Un ejemplo concreto de esto es la vinculación entre normativa y políticas activas con la legislación de presupuestos mínimos de bosques, donde se reglamentó, se hicieron los aplicativos y hoy estamos transfiriendo dinero a las provincias, por primera vez en la historia, para preservar bosques nativos, más allá de todo discurso y honrando la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal del General Perón.

Por otro lado, el paradigma en el cual nosotros creemos —la gobernadora aludía a esta cuestión— es que hay un equilibrio, en el Bicentenario, por lo menos como propuesta, entre

producción, ambiente, empleo e inclusión social: si sólo pensamos en producción, nos quedaremos sin ambiente; si sólo pensamos en el ambiente, no tendremos producción; si no hay producción, no hay empleo; el empleo tiene que ser de calidad e incluir a los más vulnerables. Esto tiene que verse en las políticas que por lo menos nosotros estamos llevando a cabo en las tres líneas de acción de la Secretaría.

Cuando hay un tema ambiental, si no pensamos en la totalidad de los actores no hay solución posible. Esto tiene que ver con un alineamiento del sector público: la Nación, la provincia y los municipios; del sector de los trabajadores, que siempre estuvo ausente en el discurso ambiental; del tema de los sectores productivos; de la sociedad civil, que no solamente está representada por quienes militan en el aspecto ambiental; del sistema científico y de nosotros como individuos.

Hay algunos mitos que me parece se vinculan con esto y por eso los enuncio: resolver un tema ambiental a veces aparece en los discursos como fácil, simple, gratuito, unidireccional, “monocompetencial” y que lo hace un actor aislado. Esto no es así; es complejo. Lleva tiempo, requiere inversión público-privada, una fuerte participación, varias áreas. Además, creo sí que es muy importante recalcar la importancia de verificar cómo funcionan los ecosistemas y los servicios ambientales, de manera tal de internalizar costos ambientales y no socializar los pasivos, lo cual forma parte muchas veces de la historia. Creo que puntualmente un ejemplo de inflexión histórica en la gestión pública en materia transversal ambiental es la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Finalmente, las normas tienen que tener aplicación; tiene que haber una capacidad de verificación y control, para lo cual hay que fortalecer las áreas provinciales que tienen esto a su cargo; y, a su vez, tiene que haber, a partir de este fortalecimiento de las áreas, una capacidad de corrección para dar respuestas públicas y privadas a estas cuestiones.

Nuestra posición es la misma que tuvimos a partir de enero de 2009. Cuando comenzamos a trabajar luego del veto al primer proyecto, se hizo un proceso realmente amplio y participativo en el cual la Secretaría estuvo permanentemente vinculada a través de una reunión federal con las provincias vinculadas, con dos sesiones en el ámbito del Senado y con una amplia convocatoria en el ámbito de la Secretaría con diputados y senadores para este tema.

Por lo tanto, no hemos variado nuestra línea más allá de que puedan existir suposiciones, puedan existir declaraciones, pueda haber interpretaciones o pueda haber opiniones. Nosotros estuvimos, estamos y estaremos en la misma posición que en enero de 2009 cuando empezamos a trabajar esto, por supuesto, alineados con el proceso que se vivía en el Senado de la Nación.

Desde ya, compartimos el proyecto del Senado porque creemos que tiene algunos argumentos de peso. Primero, hay un buen ajuste al término, a las implicancias del Artículo 41, de lo que tiene que ver con normativas, presupuestos mínimos y complementariedad de la legislación provincial y a lo que marca el Artículo 124 que tiene que ver con el federalismo y con los recursos.

Por otro lado, vemos que esto en realidad va a permitir esta armonía y complementariedad. Como abogados, sabemos que las cuestiones controversiales lo único que generan son conflictos y lo cierto es que cuando hay un conflicto, el único que pierde por la demora en adoptar medidas es el ambiente. Por lo tanto, creemos que el proyecto del Senado es adecuado porque está en un proceso —insisto— sereno, medurado y estudiado. Por otra parte, también recepta las competencias múltiples que deben tener intervención,

especialmente en lo que tenía que ver —que realmente fue una de las observaciones del veto original— con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros ministerios. Hay que remarcar también que la aprobación de las evaluaciones de impacto es de naturaleza eminentemente local.

De cara a lo que es central en lo que es el debate, que es la protección, el inventario y el seguimiento de la situación de los glaciares, nosotros desde la Secretaría estamos trabando interdisciplinariamente y de manera interna nos propusimos a decir: “Bueno, cuáles son los elementos objetivamente inventariables y cuáles tienen un grado de extinción que impedirán controversias a futuro.

Por lo tanto, entendíamos que el texto del Senado daba definiciones precisas que evitaban esta cuestión. Remarco que lo voy a leer textualmente para ser preciso. De todas maneras, voy a dejar quince carpetas para los miembros del Senado de lo que yo estoy diciendo en este momento para que quede documentada esta intervención de manera objetiva.

Respecto de la preservación del ambiente glaciar y periglacial, el proyecto del Senado habla de reservas estratégicas de recursos hídricos. Aquí, entonces el agua, en forma de hielo glaciar disponible, puede ser pasible de licuación en períodos cálidos y secos en los que el agua a nivel pluvial no cubre las necesidades ecosistémicas y productivas. Cuando en cambio hablamos de regulación del recurso hídrico y no lo asociamos con reserva estratégica, aquí tenemos una situación que indudablemente va a ser controversial y va a dificultar el inventario el cual nosotros ya tenemos pensado.

La otra cuestión que me parece o nos pareció importante —porque no es una posición personal, sino que es una posición institucional que por supuesto asumo como responsabilidad primaria— es que la definición de glaciar clásico, donde tenemos la lengua de hielo al descubierto y después la incorporación en el de Diputados de suelos congelados reguladores del recurso hídrico y saturados en hielo —que no se saben si son estratégicos o no— y la definición de este carácter estratégico que cualifica lo que es diferencial de los países de Latinoamérica, que son ricos en recursos naturales y es diferencia competitiva y estratégica a futuro para las generaciones futuras, en los tiempos que tenemos para la reglamentación y en las formas de definición del inventario, creemos y estamos convencidos —insisto, desde el origen— que esta cuestión de estos suelos congelados reguladores de recurso, la saturación en hielo y de cuánto tiempo hay que medir para que esté o no saturado sólo va a dar lugar a controversias.

Por otro lado, estamos realmente en condiciones, porque nos hemos venido preparando para este momento, de iniciar de manera inmediata a la sanción de la norma las acciones que tiene que ver con —en ese sentido, ambas normas lo dicen— el inventario, que es una tarea que se nos asigna con el soporte técnico del Ianigla, y la cuestión de que el Ianigla al definir una metodología realmente única —más allá de las ejecuciones descentralizadas—, va permitir tener un panorama totalizador homogéneo que permita un sistema de seguimiento. De esto es de lo que se trata, de tener homogeneidad y no criterios diversos para un mismo objeto motivo de tutela ambiental.

Finalmente, creemos que la participación dentro de los plazos establecidos tendrá que tener la posibilidad de que todos los sectores ambientales, y cuando digo todos son todos, el sector público, el sector del trabajo, el sector de la producción, el sector de la sociedad civil, los individuos y el sistema científico, puedan dar sus aportes en este debate.

Como lo expresó la gobernadora, estamos hablando de esto, no estamos hablando ni de agricultura, ni de turismo, ni de minería, porque si quisiéramos hablar de esto, tendríamos

que hablar sobre los paquetes y plexos normativos que regulan estas actividades sustantivas, de las cuales yo no tengo la competencia —ni de agricultura, ni de minería, ni de turismo, ni de energía— y ciertamente con respecto a la sustantividad que se crea es que sí pueden afectar el tema ambiental, en su momento tendremos la intervención debida.

Esto es lo que quería marcar, señor presidente. Queda a disposición.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Cimadevilla.

Sr. Cimadevilla. — Tengo una pregunta, secretario. Si bien es cierto lo que dijo, que no va a hablar de minería ni de otra actividad que no sea la de su competencia, cierto es que estuvo en esta Comisión el secretario de Minería y abordó temas ambientales. Lo que no puede negar usted es la ligazón que hay en este proyecto con los intereses mineros.

Mi pregunta concreta es si usted desde la Secretaría de Medio Ambiente entiende que la explotación minera constituye un eje de desarrollo sustentable

Sr. Bibiloni. — Dos cosas. El tema de los aspectos ambientales de la minería está en el Código de Minería; por lo tanto, es una legislación y es de aplicación local. Allí está el tema del daño ambiental, de la restauración, de la recomposición; es decir, hay toda una batería normativa que desde la especificidad de las competencias naturales que tiene las atribuciones del Ejecutivo están dadas por el Código de Minería a la autoridad de aplicación.

Lo que yo siempre he sostenido —insisto, no quiero entrar en el debate— es que tiene que haber minería sustentable, agricultura sustentable, turismo sustentable, servicios sustentables y comercios sustentables. De lo contrario, no cumplo con esta idea del paradigma de equilibrio entre ambiente, producción empleo e inclusión social.

Por lo tanto, esta es nuestra posición histórica y somos respetuosos de las competencias de las otras áreas del gabinete nacional. Pero, insisto, puntualmente el tema ambiental está dentro del Código de Minería en distintos artículos y además en lo que resolvió el Consejo Federal Minero como aspectos regulatorios sobre directrices de aplicación para las provincias, que tienen que ver con el daño ambiental y las formas de resarcir, recomponer, restituir el tema ambiental.

— *Murmillos en el salón.*

Sr. Presidente. — Por favor, las preguntas las hacen solamente los senadores, este es el mecanismo de la Comisión. Por lo tanto, que se abstenga de hacer preguntas cualquier otra persona.

Sr. Cimadevilla. — Le pregunto si considera a la minería como un eje de desarrollo sustentable precisamente por lo que establece el Artículo 41 de la Constitución, que obliga al Estado a proteger al medio ambiente en función de que los proyectos sean sustentables. Por eso, mi pregunta concreta es si la Secretaría de Medio Ambiente considera a la actividad minera....

Sr. Bibiloni. — Para ser aprobado, un proyecto tiene que tener una evaluación de impacto aprobada y lo que hay que hacer es el seguimiento ulterior.

— *Murmillos en el salón.*

Sr. Presidente. — Señores, por favor.

Sr. Bibiloni. — Usted me quiere llevar... Creo haberle respondido. Todas las actividades en la Argentina tienen que ser sustentables y para ello tienen evaluaciones de impactos que han sido presentadas ante autoridades administrativas, han sido aprobadas y lo que hay que hacer es monitorear si lo que se dijo como impacto establecido se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Todas las actividades generan riqueza. Puntualmente, lo que habrá que discutir con cada actividad sectorial, con el área y los sectores sustantivos, es de qué manera se lleva a

cabo. Si nos invitan a esa discusión, gustosamente participaremos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Señor secretario: hay una diferencia muy importante entre los dos proyectos. El artículo 15 del proyecto de la Cámara de Diputados establece que los inventarios deben realizarse en un plazo máximo de 180 días de promulgada la ley, tras lo cual se someterá a una auditoría ambiental a los emprendimientos que se consideren dentro del área de los glaciares. Es decir, hay un plazo máximo de 180 días para asegurarse de que no hay ningún emprendimiento minero que estuviera ubicado en zona glaciar o periglacial.

Por el contrario, el artículo 15 del proyecto del Senado expresa que las autoridades competentes deberán someter a una auditoría ambiental a las actividades mencionadas, en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de la jurisdicción provincial. Es decir, las provincias se pueden tomar un plazo que no está especificado para hacer los inventarios y, una vez que estos estén terminados —para lo cual no hay un plazo en la versión del Senado—, se harían las auditorías ambientales. Por lo tanto, esto queda desprotegido, porque las provincias se pueden tomar diez o veinte años, cuando los glaciares estén totalmente depredados.

Como secretario de Medioambiente, ¿no le preocupa que en el proyecto del Senado las provincias no tengan ningún plazo para realizar estos inventarios y que, a pesar de la sanción de la ley, los glaciares queden desprotegidos y los emprendimientos mineros ahí ubicados puedan continuar?

Sr. Bibiloni. — En primer lugar, en la Argentina hay una legislación, la Ley General del Ambiente, en cuyo artículo 41 se mencionan los principios ambientales. Estos han tenido una receptividad judicial amplia y generosa para que esa situación de indefinición temporal, si alguien tiene voluntad de plantearla, no suceda. Con lo cual, es una hipótesis que en ningún momento se dará. Por lo tanto, los inventarios tendrán el tiempo de ejecución que técnicamente el organismo del CONICET específico determine como viabilidad técnico-científica.

Por otro lado, en la medida en que tenemos un Estado de derecho pleno, si hay alguna supuesta demora de las provincias por alguna inacción, de acuerdo a los remedios constitucionales en la legislación de presupuestos mínimos con aplicación de los principios que de alguna manera fueron mencionados, de precaución y prevención, no creo que se pueda tolerar una situación de indefinición en la ejecución del inventario. Y nosotros lo plantearemos como impulso y dinámica para que se haga de manera inmediata en una respetuosa coordinación de la política nacional con las provincias.

Así que creo que es un tema hipotético que no se ha verificado, y nosotros haremos todo lo posible con el Ianigla, con los elementos que ya tenemos y las partidas disponibles, para iniciarlo de manera inmediata en coordinación con todas las provincias. Y todos los ciudadanos de la Argentina tienen los derechos para ejercerlos con toda amplitud a nivel de Constitución y de Ley General del Ambiente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Con respecto a la preocupación de la señora senadora Estenssoro, creo que no podemos decir que las provincias no queremos cuidar el medioambiente. A lo mejor interpreté mal lo que manifestó, pero las provincias argentinas tenemos una serie de preocupaciones por cuidar el medioambiente, a la vez de garantizar el desarrollo de nuestros pueblos, como dice la Constitución Nacional.

Recientemente, la provincia de San Luis, con la presencia de importantes

personalidades, firmó un tratado de paz entre el desarrollo y el medioambiente, garantizándoles a los ciudadanos sanluiseños que cuidaremos el medioambiente, pero que también les garantizaremos el desarrollo y una mejor calidad de vida.

Lo que yo pido es que no diga que las provincias argentinas no quieren defender el desarrollo de sus pueblos. Somos parte de la Nación Argentina, queremos el desarrollo de nuestros pueblos y de toda la República, y también cuidamos el medioambiente. Si interpreté mal lo que usted dijo, le pido disculpas.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Quiero decir que no me referí a la jurisdicción de quién hace el inventario, sino a que el proyecto de la Cámara de Diputados establece un plazo de 180 días para que estén realizados. En cambio, el proyecto del Senado no le da plazo a las provincias. No digo que sea un defecto, sino que el proyecto no estipula un plazo para que esos inventarios se realicen, por lo que entrará en vigencia una vez que se terminen los inventarios. A mí me preocupa que no haya un plazo para la entrada en vigencia de esa ley.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.

Sr. Pérez Alsina. — Obviamente, es un tema de discusión en la Comisión, que quizás lo demos después de este debate. Las dos leyes, en algún aspecto, pueden ser mejorables. Quizás la crítica al proyecto de la Cámara de Diputados es que puede llegar a paralizar muchas acciones que hoy están realizándose en provincias, con una consecuencia social y ambiental bastante grande.

Coincido con la señora senadora Negre de Alonso en que se ha dado una especie de debate subliminal, donde pareciera que las provincias mineras son monstruos con gobernadores que no cuidan el medioambiente, que no están capacitados para cuidarlos, y con funcionarios que también lo son.

Hace dos años había un gran proyecto minero en mi provincia, el cual fue rechazado por cuestiones ambientales. Se convocó a la gente, intervino el gobernador, los funcionarios, y se rechazó, a pesar de ser importante desde un punto de vista económico. Sé que en otras provincias ha pasado lo mismo.

Hay una idea de que las provincias no están capacitadas. Mi provincia ya sacó una ley, entre otras, y cada uno de los diputados conoce el entorno, las zonas y lugares donde se hace minería. Le puedo asegurar que se hace un estudio. Obviamente, la Nación también tiene que actuar, y lo hace en las dos leyes. Lógicamente, hay puntos que podemos mejorar.

Creo que tenemos que tener cuidado, porque en este aspecto federal pareciera que solamente desde un sector están capacitados para evaluar los impactos ambientales. Puedo garantizar que en muchas provincias, entre ellas la que represento, hacen verdaderos estudios en estos temas.

Desde ya que también comparto el hecho de que los organismos nacionales deben actuar.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Señor presidente: deseo realizar algunas consideraciones.

En primer lugar, creí entender que la preocupación de la señora senadora Estenssoro radica en que si no existe ley de glaciares, no hay protección para los glaciares. Y quiero asegurarle que esto no es así, ya que en el Código de Minería se encuentra la exigencia de realizar, antes de iniciar la actividad minera, un informe de impacto ambiental, a través del cual se analizan todos los elementos que constituyen el proyecto y, en función de eso, se aprueba o no la actividad que se desee iniciar. Por consiguiente, obviamente, no hay ningún

emprendimiento que pueda afectar el medio ambiente. Por lo menos desde la teoría, luego, si alguien desea presentar alguna otra referencia estará bien.

En segundo término, la Ley General del Ambiente que se encuentra en plena vigencia exige, para todos los emprendimientos, la realización previa de un informe de impacto ambiental que asegura que la realización de tareas productivas no afectará el medioambiente. Desde ese punto de vista, básicamente en mi provincia, por los casos que conozco, existe una protección global, integral, efectiva que asegura que el medioambiente y los glaciares están protegidos.

Esta iniciativa le da una especificidad que mejora su condición y clarifica técnicamente el proyecto que entiendo que es viable, el del H. Senado de la Nación, asimismo, le da una respuesta adecuada, porque establece competencias concurrentes, al menos entre la provincia y la Nación, una para que se dicten los presupuestos mínimos y la otra para que se hagan las gestiones necesarias a fin de hacer cumplir la ley y establecer mecanismos que nos aseguran que nuestro hábitat no será afectado de ningún modo y por ninguna actividad productiva.

Sr. Presidente. – ¿Algún señor senador desea formular una pregunta?

Sr. Bibiloni. – Para finalizar, entiendo que no hay que tener ninguna reserva mental, quiero aclarar que he tenido diálogos con algunos senadores y ninguno de estos diálogos ha influido en la decisión tomada, porque este es el convencimiento que tenemos desde 2009. En lo personal, tengo una profunda ética en la función pública y como dijo la gobernadora, yo también duermo muy tranquilo todas las noches porque hacemos lo mejor para el ambiente en la Argentina y porque todas las noches pienso en las generaciones futuras, en mis hijos y en mis nietos. Por lo tanto, nuestra actitud y nuestra militancia ambiental están alineadas con eso y con los intereses del crecimiento de nuestro país en un marco globalizado que aparece realmente amenazante. Simplemente, quería agregar esto; muchas gracias.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.

Sra. Morandini. – Señor secretario: utilizaré la reflexión final que ha realizado y en ese sentido me gustaría conocer cuál es su opinión sobre un tema que usted bien señaló y también la señora senadora: estamos hablando de derechos y llama la atención que en un tema de estas características, hablemos del derecho al agua –derecho humano fundamental y universal–, hablemos de medioambiente, pero nunca del agua. ¿Por qué cree usted que se ha contaminado el debate con intereses? Esto lo digo metafóricamente y literalmente, porque tal comportamiento me recuerda mucho lo que hemos hecho en la década del 90 –hoy denostada– donde el signo pesos, de alguna manera, ha cancelado el debate del valor.

Sr. Bibiloni. – En relación con lo que manifiesta la señora senadora, yo personalmente lo he dicho públicamente, lo peor que podemos hacer en materia ambiental es llevar el tema a problemas transaccionales de mercado. Lo ambiental tiene valores económicos intangibles y, por consiguiente, hay que estimar también el valor de funcionamiento de los ecosistemas, el costo de los servicios ambientales y quién tiene que pagar por esos servicios. Y hay que internalizar los costos ambientales porque, de lo contrario, si no socializamos pasivos, con el conjunto de la sociedad –ya que básicamente el gran pato de la boda es el sector público e indirectamente la sociedad a través de los tributos que paga–... Entonces me parece que es un buen momento para generar un debate relativo a cómo hay que ver el tema ambiental en términos de ventajas diferenciales y competitivas que tienen los países ricos en biodiversidad, en recursos naturales y en territorios. Todas estas características se encuentran en el territorio latinoamericano, sin embargo, en la semilla que exportamos no cobramos nutrientes y agua.

Por consiguiente, entiendo que este es un debate que hay que saldarlo transversalmente desde lo ambiental y participando sustantivamente en cada debate sectorial: con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con Agricultura, etcétera.

Aproximadamente, en términos generales, el agua se utiliza un 75 por ciento en agricultura, un 20 por ciento en industria y el resto es para otros usos. Por lo tanto, me parece que aquí hay un debate del valor intangible del agua y no en términos de mercado, porque eso es lo que nos dejó el legado de los 90 a través del consenso de Washington

Sr. Presidente. – Señor secretario, muchas gracias. A continuación, invitaremos al docente de la Universidad Nacional de Catamarca, becario en investigación en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), licenciado Horacio Machado Aráoz.

Sra. Morandini. – ¿No ha llegado?

Sr. Presidente. – Entonces, convocamos al doctor Silvio H. Peralta Instituto Geológico de la Universidad Nacional de San Juan (INGEO).

Sr. Peralta. – Soy Silvio Peralta, director del Instituto de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, docente en Geología de la Universidad e investigador del CONICET.

Estoy aquí para contribuir en esta discusión sobre la elaboración de un proyecto de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y aéreas periglaciares. Por supuesto, esto no es obra de quien les habla sino también de un grupo de gente del Instituto de Geología, entre ellos, se encuentran aquí el doctor Juan Pablo Milana, un especialista en glaciología y el doctor Juan Carlos Borghi, un especialista en biología de alta montaña en zonas áridas, tema que involucra a la materia en cuestión.

Por supuesto, que mis comentarios pasarán pura y exclusivamente por carriles científicos y técnicos por los cuales habitualmente me desempeño. Mi especialidad no son los glaciares ni tampoco los aspectos biológicos en zonas áridas de alta montaña ni los hidrocarburos ni la minería, sino que, en particular, desarrollo estudios de geología regional en el territorio argentino y en Sudamérica. Esto me ha llevado a tener un conocimiento de la totalidad de los recursos naturales existentes, fundamentalmente –y esto lo puedo decir por vocación– de aquellos que se encuentran en la zona andina.

Respecto de los proyectos de ley, deseo señalar que es muy difícil pensar que hay un ciudadano argentino que está en contra de una ley de protección de los glaciares y áreas periglaciares. Pero cabe pensar en este contexto, como lo han señalado bien, pero con otras palabras, algunas personas que me han precedido en esta sesión, pensar en un armónico equilibrio entre las necesidades socioeconómicas y la preservación del recurso que se quiera proteger. Esta no es una tarea sencilla, lo sabemos quienes nos dedicamos a trabajar, principalmente, en las áreas montañosas de la Cordillera de los Andes, considerando la multiplicidad de conceptos que se introducen y utilizan a los fines de generar una legislación adecuada al tema objeto, y muchas veces la disparidad de criterios con que estos conceptos son definidos o precisados a partir de especialistas en la materia.

En el caso de la implementación de una ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, queremos hacer notar lo siguiente: en el proyecto del Senado se expresa: “La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y las actividades industriales...”. En el párrafo final de este mismo artículo se explicita: “Los glaciares constituyen bienes de carácter público y su dominio corresponde a las provincias o

al Estado nacional, según sea el lugar en que se ubiquen.”

En el proyecto de la Cámara de Diputados se ha eliminado el concepto de “y las actividades industriales”, y en el párrafo de cierre de este artículo se expresa: “Los glaciales constituyen bienes de carácter público...”, eliminando en esta parte del texto “...y su dominio corresponde a las provincias o al Estado nacional, según sea el lugar en que se ubiquen.”.

Sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista, estas omisiones por parte del proyecto de Diputados ya están marcando fuertes diferencias entre los dos proyectos de ley. Es evidente que las diferencias marcadas en el texto del artículo 1º de ambos proyectos indica claramente la exclusión de las actividades industriales en el uso de tales recursos hídricos, como así también por parte de las provincias en el dominio de los glaciares como bienes de carácter público.

El artículo 2º alude a las definiciones. En el proyecto del Senado, en el párrafo inicial, se expresa: “A los efectos de la presente ley, la protección se extiende, dentro del ambiente glacial, a los glaciares descubiertos, cubiertos, y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros.” Además de ello, se hace una clara y precisa definición de cada uno de los tipos de glaciares mencionados.

En el proyecto de Diputados, si bien se hace una clara definición de glaciar, no se introducen los diferentes tipos reconocidos. Se explicita que “se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña al área de suelos congelados que actúan como regulador del recurso hídrico, en la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”. La mayor diferencia respecto del proyecto del Senado en este artículo se encuentra en la ausencia del concepto de “glacial de escombros”, a nuestro entender “litoglacial”, componente fundamental del ambiente periglacial y en el cual desde el punto de vista científico-técnico podemos reconocer dos tipos de glaciares, características sobre las cuales no voy a introducir concepto alguno porque entiendo que se hace innecesario; pero sí remarcar que los mismos constituyen el elemento fundamental como recurso hídrico a proteger dentro del ambiente periglacial.

En el proyecto de Diputados no se aclara conceptualmente qué se entiende por “alta, media y baja montaña”, quedando ello sujeto a diferentes tipos de interpretaciones, sea con relación a suelos congelados permanentes o no permanentes; suelos saturados en hielo estacionalmente o no. Esta claro que el ambiente periglacial es un ambiente frío y criogénico, pero no glaciario, que forma parte de un paisaje de mayores dimensiones que se corresponde, por ejemplo, con el concepto de la tundra andina.

Formas que destacan en el ambiente periglacial son el permafrost, que alude a suelo o roca, incluyendo hielo y material orgánico que pueden permanecer en esas condiciones naturales por debajo de cero grado centígrado por más de dos años consecutivos. Puede tratarse de permafrost seco —situación criótica que indica muy escaso o nada de hielo—, hasta una sobresaturación en hielo o con capas de hielo masivo.

Finalmente, deseo agregar que un glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que, si es activa, se mueve pendiente abajo por gravedad y reptación y deformación de permafrost. Hay distintos tipos de glaciares de escombros; dos de ellos son fundamentales: los glaciares criogénicos y glaciogénicos. No entraré en detalle sobre este tema en el día de la fecha.

En el artículo 3º, el proyecto del Senado expresa “Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros que actúan como reservas hídricas.” El proyecto de Diputados expresa “Créase el

Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas." A partir de este momento, hago notar que en el articulado del proyecto de ley de Diputados empieza a introducirse en forma insistente el concepto de "ambiente periglacial", como aquí se hace notar.

Respecto del tema de si el elemento a proteger son todos aquellos cuerpos de hielo con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos —véase el artículo 1°—, deseo señalar lo siguiente: de acuerdo con lo ya puntualizado por otros especialistas en la materia, como el doctor Villalba —director del IANIGLA— y el doctor Juan Pablo Milana -especialista en glaciología, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de San Juan-, en coincidencia con quién habla, esto significaría dejar claramente establecido que en el ambiente periglacial el único elemento válido a proteger como reserva estratégica de recursos hídricos es el glaciar de escombros y no los suelos de congelamiento estacional, por no constituir verdaderas fuentes de recursos hídricos, ya que están sujetos a marcados procesos de sublimación.

El artículo 4° se refiere a la información registrada. En el proyecto del Senado, la información incluye a todas las formas glaciares, pero también considera dicha información para la prevención de riesgos. En el proyecto de Diputados, además de las formas glaciares, se incluye en sentido amplio al ambiente periglacial, pero no considera llamativamente el empleo de la información registrada para la prevención de riesgos. Se llama la atención en cuanto a no considerar la prevención de riesgos, teniendo en cuenta que los procesos de endamicamiento natural, principalmente por la acción de glaciares de escombros, de cualquiera de sus tipos, son frecuentes en los cordones de Los Andes, tal como ocurrió años atrás con la ruptura de este tipo de estructura que generó una laguna de gran volumen, liberando instantáneamente con los consecuentes perjuicios para las poblaciones aguas abajo, como así también en el Dique Caracoles que estaba en construcción. Pero la situación de riesgo también se extiende a zona de tránsito vehicular en caminos de alta montaña de influencia glaciar, en los cuales las avalanchas, derrumbes, etcétera son fenómenos frecuentes.

Entendemos que es importante considerar el tema de la prevención de riesgos, que no está contemplado en el proyecto de Diputados.

En el artículo 5° se hace referencia a la realización de inventario. El proyecto de la Cámara de Senadores alude al Inventario Nacional de Glaciares por el IANIGLA, en coordinación con la autoridad nacional de aplicación de la presente ley y con otras instituciones nacionales y provinciales competentes.

El proyecto de Diputados expresa que el inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del IANIGLA con la coordinación..."

Se observa una mayor flexibilidad en la tarea del Inventario Nacional de Glaciares en el proyecto del Senado al hablar de coordinación, en contraposición con el proyecto de Diputados donde se expresa taxativamente que tal inventario será realizado y de responsabilidad del IANIGLA, quitando toda posibilidad de participación a otras instituciones nacionales que también cuentan con los recursos humanos adecuados para llevar adelante tal tarea.

En este contexto, deseo mencionar que hay una serie de institutos a lo largo de la zona andina, emplazado en las provincias de Salta, San Juan o Tierra del Fuego, donde perfectamente se pueden realizar este tipo de actividades, como bien dice el doctor Villalba, en coordinación con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y de Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Artículo 6, actividades prohibidas. En el proyecto del Senado se expresa: "Se prohíben, en particular las siguientes actividades..." Menciona en un escalonamiento "a)", "b)" y "c)" la exploración y explotación minera o hidrocarburífera. El proyecto de Diputados expresa en el aludido inciso c) "La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollan en el ambiente periglacial.", cuestión que no está mencionada en absoluto en el proyecto del Senado.

Considerando la ambigüedad con que el concepto de "periglacial" ha sido introducido en el artículo 2º del proyecto de Diputados, esto bien puede interpretarse como una prohibición generalizada de las actividades de exploración y explotación minera e hidrocarburífera en todo el ambiente periglacial, lo cual significaría afectar la totalidad de las actividades industriales y obras civiles que se realizan en el ámbito andino. Por cierto, lo puntualizado aquí marca una de las diferencias más fuertes entre ambos proyectos en discusión.

Artículo 7: evaluación del impacto ambiental. El proyecto de Diputados incluye "ambiente periglacial", mientras que el proyecto del Senado alude explícitamente "...a los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2".

Artículo 17, reglamentación. El doctor Villalba ya ha expresado en la reunión anterior de esta Comisión la aspiración del IANIGLA de coordinar el Inventario por un lado, cosa que compartimos, como así también la imposibilidad por parte de la mencionada institución de llevar adelante en los plazos señalados en el artículo 15 de ambos proyectos esta tarea. De ello se desprende la necesidad de la integración de instituciones que realizan tareas similares en las distintas provincias de la zona andina, no sólo con el propósito de favorecer la ejecución del relevamiento y monitoreo, sino también del establecimiento y adopción de criterios comunes para el desarrollo de tal actividad, que propendan a la obtención de los mejores resultados en la tarea de la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.

Desde mi punto de vista, deseo expresar —al como lo hice al introducir esta alocución— que está en el interés de todos, pero sin lugar a dudas con mayor arraigo en quienes habitan y conviven con el paisaje de la criósfera de Los Andes, el promover la existencia de una ley de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, pero ello teniendo en cuenta qué se quiere proteger, cómo y por qué.

Por cierto, en este contexto resulta de relevancia considerar la existencia de un justo equilibrio entre el recurso que se quiere proteger y las necesidades socioeconómicas de la generación presente. De mi parte está claro que no podremos garantizar el mejor de los futuros para las generaciones por venir si no miramos por el bienestar de la generación presente.

Asimismo, deseo expresar claramente que en gran parte del articulado del proyecto de Diputados se introduce el concepto de "ambiente periglacial", siendo ello de notar cuando se trata de actividades prohibidas, o de "ambiente protegido", en forma generalizada y ambigua. Sin embargo, el proyecto del Senado muestra mayor claridad en estos aspectos, ya que destaca claramente que la única forma periglacial susceptible de ser protegida por sus características de reserva estratégica como recurso hídrico es el glacial de escombros, concepto ampliamente compartido por investigadores del tema como el doctor Darío Trombotto, investigador del IANIGLA; el doctor Villalba, conocido por ustedes como el director del IANIGLA; el doctor Juan Pablo Milana, un especialista en glaciología, quien está a punto de sacar un libro sobre los glaciares áridos de Los Andes, y además por quien les habla.

Si bien en ambos proyectos se explicita la definición de “glacial” en forma adecuada, en ningún punto se deja planteado cuándo un cuerpo de hielo por sus dimensiones, a pesar de ser conceptualmente un glacial, podrá ser considerado como un recurso hídrico. Basta con comparar cuerpos de hielo que tengan una superficie de 100 metros cuadrados con otros de superficies mayores, por ejemplo de 1 hectárea, esto significa 10.000 metros cuadrados, considerados como tamaño estándar en las tareas de relevamiento de glaciares en la criósfera andina de San Juan en un proyecto que se está llevando adelante en la actualidad. Este aspecto resultará relevante al momento de discutir el valor de estos recursos hídricos frente a las necesidades socio-económicas de la gente que convive con la cordillera.

El gran desafío de las provincias andinas es combinar la conservación del recurso del agua en la alta montaña —representado por los distintos tipos de glaciares— con el desarrollo sustentable para dar bienestar a nuestra población. Por eso, es fundamental una clara definición del recurso a conservar.

El doctor Villalba ya ha expresado en esta Comisión con anterioridad lo siguiente: el énfasis ha sido preservar los glaciares o los cuerpos de hielo como reservas estratégicas de agua. Fundamentalmente, se encuentran en dos formas: los clásicos, cubiertos o descubiertos y los glaciares que están cubiertos por una capa de detritos, encontrándose el hielo abajo, desde donde sale el agua. Son términos técnicos que el doctor Villalba ya ha expresado.

También, el doctor Villalba en este caso especifica claramente el concepto de “glaciar de escombros”. Estos cuerpos están claramente definidos en el proyecto de ley propuesto por el Senado, pero confusamente definidos en el proyecto de Diputados, especialmente no está definido el glaciar de escombros, litoglaciar, y en su lugar se nombra el término “periglacial”, que incluye geoformas que no son fuentes de agua, como el caso de los suelos estacionalmente congelados.

Justamente, los problemas de definición están relacionados con el concepto de “periglacial”. Con respecto a este concepto, el doctor Villalba, refiriéndose al ambiente periglacial, se expuso así ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable: “El ambiente periglacial, donde tengo un suelo congelado estacional, no tiene importancia hidrológica. Eso no hay que protegerlo, sino a aquellos cuerpos que tienen un alto contenido de hielo y desde donde sale el agua en la cordillera.” Estos cuerpos con alto contenido de hielo desde donde sale el agua, se corresponden a los glaciares de escombros, no definidos claramente en el proyecto de ley de Diputados, pero si en la ley del Senado.

Coincidimos también con lo expresado por el doctor Trombottto —presidente de la Sociedad Argentina de Ciencias Criológicas— en una nota editorial publicada por el diario *Los Andes* el 26 de septiembre de 2010, quien expresó recientemente en una entrevista lo siguiente: “La intención de la Subcomisión Argentina de Ciencias de la Criósfera es apoyar el espíritu de la ley para preservar glaciares descubiertos y cubiertos en el ambiente glaciar y los glaciares de escombros, dentro del ambiente periglacial, como reservas de agua dulce”.

Al igual que un párrafo citado de una carta del investigador por el diario *Los Andes*, aludo al doctor Trombottto, creemos que “la ley —según él—, sin embargo, debe tratar de explicar debidamente con definiciones claras los conceptos sobre glaciares y glaciares de escombros (crioformas periglaciares), es decir lo que se quiere proteger...”. Y eso es lo que creemos que resuelve mal la ley de Diputados. Sin una legislación clara, donde los términos no estén claramente definidos, no creemos posible que se pueda conservar el recurso que pretendemos proteger, los glaciares, y a través de los mismos, el

agua. Es, en este caso, en donde el proyecto de Diputados no es claro y no define claramente el objeto de protección, a diferencia del proyecto del Senado, en donde se definen claramente los tres cuerpos de hielo a proteger: glaciares descubiertos, glaciares cubiertos y glaciares de escombros.

Finalmente, deseo agregar que en esta discusión es importante haber considerado a especialistas en el tema de glaciología, pero también creo que a esta mesa le han faltado otras patas. Por propia iniciativa y con gente del Instituto de Geología hemos creído necesario introducir la participación de especialistas en biología de alta montaña en zonas áridas y especialistas en recursos hídricos a fin de poder tener una correcta apreciación de los caudales de fusión que surgen de los procesos de ablación en los glaciares. También, de acuerdo a mi experiencia, considerar la participación de especialistas en temas sociales porque, sin lugar a dudas, debemos mirar de qué manera se resolverán los problemas de la gente que se afecta cuando queremos proteger el ambiente.

Insisto en que el hecho de establecer un correcto equilibrio entre las necesidades socioeconómicas —lo puntalicé al final— y el recurso o el medio ambiente es un trabajo muy difícil de hacer. No es una tarea fácil. Asumo que esto requiere mucho tiempo y la participación de mucha gente.

Deseo dejar claramente manifestado que estamos de acuerdo absolutamente con los términos del doctor Villalba en cuanto a su intención de coordinar el inventario de glaciar a lo largo de la criósfera andina. Nosotros, con todo el respeto que nos merecen, estamos dispuestos a participar en este tema y colaborar en todo lo que sea posible.

Asimismo, queremos dejar en claro que, desde nuestro punto de vista, el proyecto del Senado muestra mayor solidez en cuanto a ser proyectado como una ley para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, a diferencia del proyecto de Diputados que muestra muchas debilidades y ambigüedades, especialmente al haber excluido en el articulado el concepto de “glaciar de escombros, litoglaciar” como una forma periglacial y no definir en términos correctos la zona periglacial.

Señor presidente, de ser posible, quisiera dejar lo que aquí hemos expresado como documentación agregada. Encontrarán algo importante respecto de la participación de los biólogos en el tema del estudio de la criósfera andina, o sea, de todos los cuerpos de hielo que se encuentran en la zona de la cordillera de Los Andes y la importancia de estudios biológicos porque allí encontramos organismos extremófilos, que viven a temperaturas por debajo de los cero grados. Hay ejemplos notables de esto, principalmente en la Antártica argentina y en los glaciares de nuestra cordillera. Procedo a dejar la información respectiva a los señores senadores.

Asimismo, deseo señalar que en nuestro instituto hay un programa de estudio de la criósfera de Los Andes; está a cargo el doctor Milana y hay un amplio grupo de trabajo, gente joven que está en proceso de formación de recursos humanos y esto es para que el Senado tenga conocimiento de que hay otras instituciones en el país que también se dedican al estudio de la criósfera.

Finalmente, dejar una copia del informe de avance que se elevó al gobierno de San Juan sobre el relevamiento preliminar de los glaciares de dicha provincia. Este ha sido un primer informe, que fue realizado hace aproximadamente tres meses. Actualmente, está en vías de ejecución la entrega de un segundo informe.

Para concluir, algo que desde el Instituto de Geología elevamos en octubre del año

próximo pasado, señor presidente, fue un documento al Congreso de la Nación, cuyo título es: “Observaciones al proyecto de ley sobre protección de los glaciares presentado por el diputado nacional Miguel Bonasso. Aportes para la elaboración de un nuevo proyecto de ley”. Sus aspectos fundamentales eran, por un lado, federalizar la discusión en cuanto a una ley de protección de glaciares y ambientes periglaciales para que se diera participación no sólo a instituciones gubernamentales sino también a académicas a lo largo de la zona andina; y, por otro lado, considerar aspectos biocriogénicos, que no están contemplados actualmente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Morandini.

Sra. Morandini. — Me gustaría pedirle una precisión, ya que ha hecho una comparación entre los dos proyectos. ¿Qué tiene para decirnos en relación con los plazos: el que establece Diputados, de 180 días; y a partir de los 60 días?

Sr. Peralta. — Esta pregunta se puede responder de la siguiente manera.

El doctor Villalba, en la reunión anterior, dejó claramente explicitada la imposibilidad de llevar adelante la tarea de relevamiento y monitoreo de glaciares con los plazos establecidos en ambos proyectos, cosa que yo comparto ampliamente. Nosotros estamos llevando actualmente el monitoreo y relevamiento de glaciares en la provincia de San Juan y sabemos que no es una tarea fácil; es mucho más compleja de lo que uno se puede imaginar. Y los plazos establecidos allá, tal cual lo ha dicho el doctor Villalba, son muy difíciles de cumplir.

Yo, en todo caso, sugiero que se remitan a la versión taquigráfica, donde están perfectamente establecidas las manifestaciones vertidas por el doctor Villalba.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Filmus.

Sr. Filmus. — Buenos días y muchas gracias por su participación.

Quisiera hacerle algunas preguntas, artículo por artículo.

Con respecto al artículo 1º, en uno de los proyectos decía: los glaciares constituyen bienes de carácter público y su dominio corresponde a las provincias o al Estado nacional según el lugar en que se ubiquen. Y dice: los glaciares constituyen bienes carácter público. Si la Constitución es muy clara respecto de que los glaciares y todos los recursos naturales corresponden a las provincias... ¿Está claro?

Sr. Peralta. — No.

Sr. Filmus. — ¿No dice eso la Constitución?

Sr. Peralta. — No, porque, desde nuestro punto de vista, eso queda librado a una interpretación, tal cual está en el artículo 1º.

Sr. Filmus. — ¿Qué es lo que se interpreta? ¿La Constitución?

Sr. Peralta. — No, el artículo 1º de los proyectos.

Sr. Filmus. — Al revés, yo creo que el artículo 1º, al quitar que corresponde al Estado nacional, a quien en última instancia le está sacando es al Estado nacional y no a las provincias. Esto está establecido por la Constitución. Si la Constitución dice que los recursos son de las provincias, no veo cómo una ley podría decir que no lo son. Simplemente —esto con buena redundancia—, se sacó porque posteriormente se aclara que el único caso en que no corresponde a las provincias —y se aclara— es en el de parques nacionales, porque éstos tienen jurisdicción nacional. A tal punto, teniendo en cuenta la presencia de la gobernadora de Tierra del Fuego, pongo en claro que se le devolvió... en el proyecto del Senado no se había tenido en cuenta, había sido un error —el cual me corresponde a mí—, el hecho de que la provincia de Tierra del Fuego tiene la potestad sobre la Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y se la daba al instituto del antártico, mientras que acá hemos votado hace poco tiempo los

límites de la provincia de Tierra del Fuego, que incluyen a la Antártida.

Entonces, con respecto al artículo 1°, no veo cómo la ley puede pasar por encima de la Constitución. Está claro. Le voy a dar un ejemplo. La ley de educación fija que la educación, el conocimiento, son de carácter público. A nadie se le ocurriría pensar que la educación es de la Nación. La educación, por la Constitución, desde 1853, es de las provincias. Así que el hecho de que sea de carácter público, no estatal sino de carácter público, no implica que nadie le saque nada a las provincias. Eso me parece que es una interpretación al revés, antifederal, porque la Constitución está por encima de las leyes.

La verdad es que yo participé en este sentido. Se sacó, justamente, para dejar en claro que no depende del lugar en donde se ubique, sino que la única excepción es la de parques nacionales. En cuanto al resto, uno podría discutir por qué nosotros tenemos solamente cerca del 2 por ciento de nuestra tierra en parques nacionales, y Chile, por ejemplo, tiene el 14 por ciento preservado de ese modo. Pero esa es otra discusión. Acá está claro que, si no es parque nacional, le corresponde a las provincias, porque lo dice la Constitución, que está por encima de la ley.

Sr. Peralta. — Si quiere que le conteste, le puedo decir lo siguiente.

Lo que usted está diciendo, que me parece correcto, no está escrito en el artículo 1°.

Sr. Filmus. — No tiene que estar escrito, porque está escrito en la Constitución. Porque si no tendría que decir...

Sr. Presidente. — Continuemos con las preguntas y no dialoguemos, por favor.

Sr. Filmus. — La segunda cuestión, ya para el artículo 2°.

Leemos desgrabaciones totalmente distintas respecto de la opinión de Villalba. Yo tengo acá la desgrabación de Villalba de cuando estuvo acá. Además, quiero decir que Villalba fue consultado en reiteradas ocasiones y fue corredactor de algunos de los artículos, entre otros, del artículo 2°; así que sería difícil que él opine en contra, porque él aportó elementos para la redacción. Y dice: “Por lo tanto, técnicamente con distintos nombres, ambos proyectos están protegiendo el mismo área de la montaña. Si Ianigla tuviera que definir cuál es el área a proteger usando uno u otro proyecto, debemos decir que las áreas son idénticas. Y me parece importante destacar y mantener el espíritu que figura en el primer artículo, donde claramente se expresa que se protegerá un ambiente periglacial porque allí se encuentra una reserva de agua en forma de hielo, que es estratégica como recurso hídrico”.

Entonces, lo que está diciendo Villalba es, primero, que el artículo 2° está vinculado con el artículo 1°. Dice, textualmente: el suelo periglacial que se congela estacionalmente no es reserva estratégica de recursos hídricos. Por lo tanto, no es la preocupación de esta ley. Esta ley no protege eso.

Más aún, yo he charlado con algunos geólogos que han planteado que es al revés, que en el proyecto del Senado dice, tanto cuando se refiere a glaciario como a periglacial: son parte constituyente del ambiente glaciario y periglacial, además del hielo, el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Nos decían que eso era bastante híbrido, cuando se habla de periglacial, y que era peligroso. Por eso en el de Diputados está restringido: se quita y es sólo para glaciario. En el caso de periglacial, no se incorpora ni el material detrítico rocoso ni los cursos internos de agua ni los cursos superficiales de agua, que, según nos habían dicho, era muy difícil de limitar, porque éstos sí cambiaban en las distintas épocas del año. Entonces, lo que nos decían era que íbamos a proteger una cosa en el verano y otra en el invierno.

Así que para este punto leo lo de Villalba e invito a todo el mundo a que lo vea —está

en las páginas 6 y 7 de la desgrabación—, donde defiende fuertemente lo que hicimos acá.

Sr. Gioja. — Solicito una interrupción, senador.

Sr. Filmus. — Adelante.

Sr. Gioja. — Yo entendí que la diferencia —la planteé y el doctor Villalba me dio la razón— está en calificar la calidad de hielos que componen el periglacial. El proyecto del Senado dice: “hielos congelados permanentes”; y el de Diputados dice: “suelos congelados”. El hecho de eliminar la palabra “permanente”, teniendo en cuenta que, según la explicación de Villalba, tienen que ser permanentes para ser glaciares o periglaciares, me parece que genera ese nivel de confusiones. Y Villalba me dijo: usted tiene razón en relación con ese tema.

Entonces, la diferencia fundamental está en que los periglaciales corresponden a hielos permanentes. Es mi única objeción: que hielos permanentes son periglaciales. Los que no son permanentes pueden ser motivo de otra consideración, de otra temática. Pero si son periglaciales, tienen que ser... Y en esto coincidieron todos los que han hablado acá y, especialmente, el doctor Villalba, que fue preciso.

Por lo tanto, la omisión en el proyecto de Diputados de la calificación de “permanente” me parece, al menos, confusa.

Gracias, senador.

Sr. Filmus. — De nada.

Leo de vuelta lo de Villalba, porque quizá no lo entendimos. Dice, claramente, que si no es permanente no es... Porque está puesto en el artículo 1°...

Sr. Presidente. — Por favor, no dialoguen. El debate entre los senadores lo dejamos para después.

Sr. Filmus. — Me parece bien, señor presidente.

Vuelvo a la cuestión de cómo lo define. Pero vamos de nuevo a ver si está definido como permanente en el proyecto del Senado. Lo leo: “Glaciares de escombros: aquellos cuerpos de detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado”. El origen está asociado con los cuerpos criogénicos, no es suelo permanentemente congelado. Si fuera permanentemente congelados, según me dicen los geólogos y los glaciólogos —estuve con varios estos días—, tampoco estaríamos hablando de suelos permanentes congelados porque pueden estar abajo y puede ser que arriba tengamos piedras que no estén descongeladas, etcétera. Me llama la atención que nadie se preocupe por la imprecisión que tiene para el caso el proyecto del Senado al hablar del ambiente periglacial, de además de hielo el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.

Otra cuestión que me parece que está mal interpretada... El Artículo 6°, a diferencia... Y me llama la atención por los sectores productivos porque yo he visto, por ejemplo, y he recibido, y he escuchado aquí el primer día, y no escuché ninguna respuesta, a la Cámara de la Construcción... mientras que en el Artículo 6° de la Cámara de Senadores se prohibía en todos los lugares definidos en el Artículo 2, es decir las zonas glaciares y las zonas periglaciales, en la zona de glaciar, en los glaciares de escombros y también en todo lo incluido allí, entonces, también en los cursos de agua, etcétera, que leímos recién.

En el Artículo 6° de Diputados, justamente contemplando demandas que nos decían respecto de las obras de construcción camino a Chile y varias obras más que nos pedían, se discutió y solamente quedó, porque entonces ahí centramos el tema de la minería y la liberación de dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, en la zona de glaciar y periglacial. Todo lo que se discutió el otro día o todo lo que se está diciendo hoy

respecto de que, insisto, las obras de arquitectura o infraestructura y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales no está incluida en la zona periglacial porque no remite al Artículo 2º, sino que especifica en el Inciso a) y en el Inciso c) también el ambiente periglacial.

He leído que esta semana en Chile acaban de poner una multa a la Barrick Gold justamente no sé cuantos millones de dólares porque los camiones levantaban polvo a 15 kilómetros de donde estaban los glaciares y ese polvo se asentaba sobre los glaciares, y eso reducía y hacía retroceder los glaciares. Esto es reciente, lo pueden leer por Internet.

Entonces, quiero decir que en este punto es al revés. La que permitiría, porque sólo incorpora a los glaciares, más industrias, más obras, más arquitectura, infraestructura, incluso las necesarias para prevenciones de riesgo e investigación científica, es la de Diputados y no la de Senadores. El tema que sí está más restringido es el tema de la minería o de la dispersión y liberación de disposiciones y sustancias o elementos contaminantes, que eso debería ser en todo el país y no solamente allí. Así podría seguir, me parece que hay distintas interpretaciones al respecto. Yo los invito a leer la desgrabación del doctor Villalba.

Déjeme decir más, porque usted dice que usted está en el grupo y que vino aquí nuevamente porque estuvo la vez pasada y me llamó la atención que está en el grupo el doctor Milana. En estos días no paré de leer todo el libro, la verdad es que al final lo consumí todo el libro donde escribe el doctor Milana y le hacen reportajes, donde dice que jamás viviría en Jachal y explica por qué está totalmente contaminado Jachal. Dice por qué no le daría de comer a sus hijos las manzanas de allí. No sólo eso, también dice que es un genocidio lo que está ocurriendo allí. No quiero decir todo lo que dice de las algunas empresas porque no me consta así como no me consta lo que dice de alguna gente que está allí, y lo que se ha hecho, y la imposibilidad de entrar y de investigar, y por qué él denuncia todo eso.

Entonces, me llama la atención que justamente el que está diciendo que está pasando, no dice que va a pasar. Él lo que diría con todo esto es que hace falta urgente una ley para evitar todo esto. Y cuando habla, habla no sólo de los glaciares, sino de las zonas periglaciales, etcétera, etcétera.

Entonces, me parece extraño que la persona que estuvo la vez pasada acá y no pudo defender estas ideas ahora diga que es parte del equipo y que ahora está del otro lado.

Sr. Presidente. — Perdón, con todo respeto, aprecio al amigo senador Filmus...

Sr. Filmus. — No hablo más en todo el día.

Sr. Presidente. — Lo que digo es lo siguiente. Hagamos preguntas a los invitados, pero no tratemos de convencerlos porque cada uno viene con su postura. Entonces, limitémonos a hacer las preguntas porque si no, esto será interminable.

Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Dos cuestiones. Usted dijo que le faltaban dos patas a estas audiencias. Una, la opinión de biólogos, si mal entendí.

Sr. Peralta. — Correcto.

Sra. Negre de Alonso. — Entonces, lo que quería saber es si en esa documentación que usted dejó, dejó algún documento de biólogos. En caso contrario, quisiera que nos deje dicho quiénes podrían ser los biólogos que podríamos escuchar.

En segundo lugar, usted dijo que la otra pata eran los especialistas en...

Sr. Peralta. — recursos hídricos

Sra. Negre de Alonso. — Recursos hídricos, efectivamente. Y después hizo alusión a sociólogos que estudien el impacto sobre el desarrollo de las zonas donde se implementaría

esta ley.

Al respecto, nos deja documentos o es simplemente una iniciativa o una preocupación que usted está volcando.

Sr. Paralta. — Puedo dejar documentos como lo he hecho respecto del tema de los biólogos, principalmente porque me acompaña un especialista, que es el doctor Borgui. El doctor Borghi es un especialista en sistemas o ecosistemas de alta montaña y zonas áridas, que es algo muy específico.

En el caso de recursos hídricos, también he dejado una documentación, pero si es necesario más documentación, la Secretaría de esta Comisión tiene mi correo electrónico y no hay ningún problema en hacer llegar más información.

En cuanto al tema del impacto social de estas actividades y la cuestión de la regulación, si bien las he vivido escapan a mis quehaceres.

Sr. Presidente. — Agradecemos al doctor Peralta.

A continuación, tiene la palabra el señor Machado Aráoz, de la Universidad de Catamarca.

Sr. Machado Aráoz. — Buen día, pido disculpas por la demora; tengo entendido que ya me habían llamado.

Sr. Presidente. — Le agradecemos mucho el esfuerzo.

Sr. Machado Aráoz. — Brevemente, me voy a presentar. Soy docente de la Universidad Nacional de Catamarca, soy catamarqueño, sociólogo, politólogo, investigador del grupo de ecología política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

La exposición breve que voy a plantear aquí tiene que ver obviamente con una mirada que generalmente se plantea como una mirada técnica sobre los —entre comillas— recursos naturales porque supuestamente hay una diferenciación entre lo técnico, que serían aquellos especialistas que vienen de las ciencias naturales, y el campo más embarrado o borroso de lo político y desde lo ideológico, que vienen presuntamente de las áreas sociales. Y resulta que, en definitiva, hablar de la protección de determinados ecosistemas, permitir, prohibir o regular determinadas actividades en los mismos, decidir no solamente sobre los usos de los bienes y servicios ambientales de determinado territorio, sino el sólo acto de denominar los espacios no es una cuestión exclusivamente técnica, no es una cuestión de geólogos, glaciólogos, biólogos. De hecho, mucha de la toponimia de nuestros lugares tiene que ver básicamente con una forma cultural que se ha ido construyendo a partir de una relación extensa de la población con su territorio y que ha ido generado saberes y conocimientos que nacen de las urgencias pragmáticas por la gestión y la reproducción de la vida.

De manera tal que una legislación debe tender a proteger determinados recursos naturales.

Hago un pequeño paréntesis para decir que nosotros habitualmente naturalizamos determinadas denominaciones sobre las cosas, sin ver que están cargadas de ideologías —entendiendo por “ideologías” a las visiones políticas sobre el mundo— que incidirán sobre los modos de uso de determinados bienes o servicios ambientales. Legislar sobre determinados bienes y servicios ambientales, recursos naturales o bienes comunes, no es solamente una cuestión técnica, sino política, biopolítica y geopolítica.

Debemos plantear por qué políticamente este proyecto de ley ha recibido una evidente, manifiesta e inobjetable oposición, principalmente, del sector corporativo de la gran minería. Si bien no estamos discutiendo la minería —a pesar de que creo que lo deberíamos hacer—, lo cierto es que este proyecto de ley apunta a proteger las fuentes y nacientes de agua en las

reservas, particularmente en las zonas críticas, áridas y semiáridas, como es la provincia de Catamarca, de donde yo provengo. Allí tenemos regiones donde solamente llueven 50 milímetros al año.

Acá se han invertido los términos, en el sentido de que se pretende plantear que este proyecto de ley ataca a la minería, cuando en realidad se trata de que una determinada tecnología extractiva, asociada a la gran minería a gran escala, que es la que está detrás del ataque a este proyecto de ley, y es la que es incompatible, lisa y llanamente, con la protección de los glaciares. Esto hay que decirlo sencilla y claramente en esos términos. Entonces, estamos defendiendo nuestras fuentes de agua, que se tornan críticas en poblaciones, en regiones áridas y semiáridas, como son las del noroeste argentino y también las del centro cordillerano de nuestro país.

En ese sentido, me parece importante decir qué es lo que está detrás desde el punto de vista geopolítico. Porque cuando se otorga una concesión minera hay que preguntarse qué es lo que se otorga. Tenemos que referirnos a metodologías extractivas específicas, porque hay muy diferentes formas de hacer agricultura, como lo hay de desarrollar la minería.

Lo que es directamente incompatible con la protección de las reservas de agua dulce de nuestras regiones áridas y semiáridas es la minería metalífera a gran escala, porque su método extractivo necesariamente implica la destrucción de vastos ecosistemas enteros. Solamente para hablar en términos concretos, minera La Alumbrera tiene un *open pit* de alrededor de un kilómetro de extensión por 600 metros de profundidad; 53 mil hectáreas perimetradas del campo del arenal, donde extrae reserva de agua fósil de 1.200 litros por segundo, de una región donde llueven 150 milímetros. Tiene una tecnología extractiva que implica 220 kilómetros de líneas de alta tensión para el uso exclusivo de la minera; 220 kilómetros de un mineraloducto, que va desde la zona de mina hasta Tucumán, y de ahí otros 800 kilómetros de ferrocarril de Tucumán al puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, por donde se va prácticamente la totalidad de la extracción que hace La Alumbrera. Entonces, estamos hablando de un proyecto que tiene una envergadura de intervención sobre ecosistemas que atraviesa las jurisdicciones de cuatro provincias y afecta a más de dos cuencas hídricas. Es de esto de lo que estamos hablando, de este tipo de minería. Es una minería que precisa usar 100 mil kilos de explosivos por día y que vuela más de 180 mil toneladas de montañas rocosas por día para extraer el 0,3 o 0,4 de mineral por tonelada.

Hablando de una cuestión geopolítica, también hay que decir que cuando nosotros estamos exportando el mineral, también exportamos agua y energía. Y quiero decir por qué exportamos mineral. El 97 por ciento de los concentrados minerales metalíferos que se extraen en el país, se exportan. En toda América latina, los países mineros son exportadores intensivos de estos recursos. Y somos importadores de productos mineralizados refinados.

A mi criterio, la reforma de los '90 empezó en los '70, porque el primer proyecto de ley que antecedió a la Ley 24196 data de la dictadura de Martínez de Hoz. Cuando se exportan estos tipos de minerales, estamos haciendo referencia al hecho de unas geografías de las desigualdades ecológicas, donde hay regiones que son las zonas donde estos minerales se procesan y se consumen.

América latina, después de los '90, provee al mundo el 47 por ciento de todo el cobre que se consume, el 40 por ciento de toda la plata, el 30 por ciento de la bauxita y el 25 por ciento del oro. América latina solamente consume entre el 3 y el 6 por ciento de los minerales que se extraen. Entonces, se están poniendo en vilo ecosistemas enteros para proveer la dinámica consumista de los países centrales. Por eso es que nosotros hablamos de

neocolonialismo. Quizás a los geólogos les suene bastante extraña esta palabra o quizás suene que se trata de una palabra fuertemente ideologizada. Sin embargo, tenemos que decir que en el ámbito de las ciencias sociales, quienes venimos investigando las profundas transformaciones neoeconómicas, ecológicas y políticas que significó el neoliberalismo para América latina, estamos hablando claramente de esto, porque hoy son las empresas transnacionales las que disponen, hacen uso y abuso de los territorios de nuestros Estados, aun en contra de los intereses de nuestras poblaciones.

También quiero decir que estas desigualdades ecológicas en el espacio-tiempo del mundo de la globalización puede verse, por ejemplo, teniendo en cuenta el consumo desigual de metales *per cápita*. En el caso del cobre, un norteamericano consume 17 kilos de cobre por año. En el caso de América latina, se consume 4,5 kilos de cobre por año, por persona. En el caso del aluminio, hablamos de 21 kilos de mineral por año, por persona; contra 6 kilos por año, por persona.

Entonces, la pregunta es para quiénes dispondrán de estos recursos. Lo que se ve claramente es que el consumo de minerales nos marca una geografía donde hay pueblos que se definen como zonas de sacrificio para extraer los minerales y, por el otro lado, una geografía completamente distinta, que tiene que ver con los países que procesan y consumen estos minerales.

Otro aspecto de esta geopolítica de las desigualdades tiene que ver con el hecho de quiénes son los principales actores del negocio minero. Lo cierto es que en el caso del aluminio, del cobre, del oro, del hierro, diez grandes conglomerados empresarios mineros concentran el 70 por ciento de la producción, mejor dicho, la extracción y la comercialización de estos minerales. Con lo cual, se trata de grandes empresas transnacionales las que manejan la cadena global total de este tipo de actividades. Desde la exploración hasta la explotación, pasando por el enriquecimiento, el procesamiento y el refinamiento de estos minerales, nosotros somos, simplemente, para estas grandes empresas, un pequeño eslabón –y no el más importante– de una cadena de valor que ellos manejan a nivel mundial. Considero que es importante que tengamos en cuenta esto. Estamos en el primer eslabón, en el más débil, porque no hay ningún tipo de impacto en términos de innovación tecnológica, no hay impacto en términos de efecto multiplicador sobre el empleo y, por el contrario, hay un proceso de destrucción sobre las economías regionales. Es decir que todo esto produce un mayor impacto ecológico negativo y, reitero, se da en este primer eslabón de la cadena de valor de la minería global, es decir, en la fase netamente extractiva, que es la que se ha instalado en nuestro país.

Por otro lado, les manifesté que, aparte del uso que se hace para los minerales, hay un consumo asimétrico del agua y de la energía. Esto es absolutamente crítico porque, por ejemplo, yo provengo de una provincia en la que todos los días se ha hecho normal que los diarios publiquen información sobre las zonas a las que les corresponden los cortes de agua y de luz. Somos una población que tiene el agua y la luz racionada. Esto no casual, ya que Minera Alumbrera –sólo una explotación– utiliza el 170 por ciento del consumo energético de toda la provincia. Mientras que en los valores de 2007, Alumbrera consumía 833 mil megavatios de energía por año, la provincia de Catamarca consumía, 460 mil megavatios por año. Por lo tanto, esta es una empresa que tiene el permiso de explotación de 1200 litros de agua por segundo de una región donde llueve 150 milímetros por año. De este tipo de irracionalidades estamos hablando, ya que cada tonelada de concentrado de cobre que sale de Catamarca se lleva consigo 220 mil litros de agua.

Veamos el caso de Chile. A diferencia de nuestro país, Chile tiene una larga historia

de espoliación minera y tiene una base estadística mucho más completa y confiable que la que la nuestra. El consumo energético de las empresas mineras chilenas asciende al 36 por ciento de toda la energía local y, por consiguiente, también ellos se encuentran con un problema energético crítico.

– El señor senador Pérez Alsina realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pérez Alsina. – Comenzó criticando a Catamarca, continuó criticando a América latina, ahora sigue con Chile.

Como senadores, queremos saber cuál ley es mejor y porqué, ya que las dos tienden a proteger lo que usted está manifestando, pero hay discusiones sobre cuál protege en mejores términos. Por lo tanto, le solicito que sea concreto, porque tenemos en lista a4 muchos expositores y aún debemos debatir.

Sra. Morandini. – Sobre la persona que ha venido a hablar, no vamos a decirle lo que tiene que opinar. Luego, cada uno realizará su interpretación subjetiva, relativa a la decisión que tendremos que tomar en relación a uno u otro proyecto.

Sr. Presidente. – Sí les solicito que tomen un tiempo prudencial en su exposición, es decir, diez o quince minutos por expositor. Pero entiendo que deben exponer lo que deseen.

A continuación, tiene la palabra el señor senador Cano.

Sr. Cano. – No quiero que se me mal interprete. En realidad, comparto la mayoría de los conceptos que está planteando, y nadie pretende decirle qué tiene que opinar o no. En el marco de lo que estamos tratando, en relación con los dos proyectos que se debaten, le pregunto cuál es su opinión sobre la iniciativa en general y en particular. Pero no me refiero a los contenidos, sobre los que comparto el análisis que está realizando, en los términos que usted lo está planteando, en relación con el impacto que tiene la minería. Por lo tanto, aclaro que no es mi intención restringir la línea argumental que el invitado está presentando.

Sr. Machado Aráoz. – Lo que estoy diciendo es absolutamente pertinente con lo que se está discutiendo, porque los argumentos que se han esbozado a fin de atacar el proyecto que ha sido aprobado por Diputados apuntan a manifestar que se trata de una iniciativa que atenta contra las economías provinciales y que no resguarda sus intereses en relación con el dominio que tienen sobre los recursos naturales. Y toda la argumentación que estoy presentando es precisamente para señalar que hay muchas falacias que se han dicho y también para explicar por qué motivo el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados atentaría contra las potestades de las provincias y contra determinados sectores. Sectores que, a su vez, han sido presentados como motores de desarrollo, como generadores de empleo y como única alternativa económica para las provincias pobres.

Lo que estoy tratando de decir es que quienes hablan en esos términos, no están viendo desde los ojos de nuestras poblaciones sino desde las grandes empresas transnacionales, que son las principales usufructuarias de este modelo.

Por otro lado, sobre la ley, lo único que trata de hacer es poner un límite de racionalidad mínima a un extractivismo que parece de una voracidad incontenida. Se está tratando de defender las reservas críticas de agua dulce en sus cuencas hídricas de las regiones áridas. Y, entonces, entiendo que es absolutamente sintomático que el sector corporativo de la gran minería transnacional sea el que más furibundamente se oponga al proyecto que viene desde la Cámara de Diputados. Sencillamente estaba tratando de poner de manifiesto los aspectos de las desigualdades ecológicas que hay detrás de estas cuestiones.

Asimismo, me gustaría decir que hay un discurso falaz asentado en la idea de que se

puede hacer uso de estos recursos de una manera sustentable y que las provincias pueden y tienen el derecho de hacer un uso sustentable de esos recursos. Vengo de Catamarca y allí se está discutiendo la ley provincial de protección de glaciares, entonces, ¿por qué estas provincias están a contra reloj, tratando de imponer estos proyectos? Porque la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados pone límites mínimos a la extracción en zonas críticas; y estas provincias no están ni siquiera dispuestas a aceptar estos límites de racionalidad mínima.

El proyecto que se está discutiendo en la provincia de Catamarca, que es muy similar, una copia de los que ya han sido aprobados en La Rioja, en San Juan, en Jujuy y en Salta, deja completamente descubierta la cuestión de las áreas glaciares y periglaciares para impulsar el extractivismo de actividades como la minería a gran escala. Por ese motivo, entiendo que es urgente y crítica la sanción de este tipo de ley. Lo repito: como un límite de racionalidad mínima a un extracvitismo que merecería también ser discutido.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Quería saber la información que usted maneja respecto de la creación de empleo de estos emprendimientos mineros porque el secretario de Minería estuvo la semana pasada y dijo que la minería generaba 500 mil puestos de trabajo en la Argentina. Las cifras que nosotros manejamos del INDEC del año 2009 hablan de que los minerales metalíferos generan 6.533 puestos de trabajo. Si uno suma otras minas y canteras se llega a 12 mil. En cuanto a la Alumbreira, que es la mina que está hace más tiempo en funcionamiento, en el año 93 se decía que iba a crear 10 mil puestos de trabajo, pero la obra —según el CAEM— generó 4 mil puestos de trabajo y el año pasado había 1800 empleados, 800 de planta permanente y 1000 contratados. O sea que no son los 10 mil puestos que se habían prometido. ¿Cuál es la información que usted maneja en cuanto a la creación de trabajo de este tipo de proyecto?

Sr. Presidente. — Senadora, yo le pido que mantengamos la unidad del debate. La cantidad de gente que trabaja en la minería y la conservación de glaciares hoy creo que...

Sra. Estenssoro. — Como van a venir las cámaras mineras a hablar del rol que ellos cumplen, me parecía que era importante...

Sr. Presidente. — La opinión respecto de esta ley, no la cantidad de gente que está trabajando.

Sra. Estenssoro. — En ese sentido, entonces, las cámaras mineras no tendrían que venir porque no son expertos en glaciares.

Sr. Presidente. — No, sobre el efecto justamente que tienen sobre la ley de glaciares, la conservación de los glaciares y el ambiente periglacial.

Sra. Estenssoro. — Lo estoy preguntando porque el argumento justamente de quienes apoyan la ley del Senado es que la minería genera mucho trabajo y que no es necesario darle una protección tan firme, como hace el proyecto de Diputados. Entonces, me gustaría saber cuál es la información que manejan ustedes en Catamarca respecto de la creación de trabajo de estos emprendimientos.

Sr. Aráoz. — Con relación a ese punto, me parece importante plantear que es uno de los argumentos absolutamente insostenibles. La minería a gran escala es una actividad intensiva en capital y en ambiente y el impacto que genera en términos de empleo es absolutamente nulo, es absolutamente insignificante.

En el caso de la provincia de Catamarca, estamos hablando del 0,8 por ciento de la población ocupada.

Sr. Presidente. — ¿Cuánta población tiene Catamarca?

Sr. Aráoz. — La provincia de Catamarca tiene una población económicamente activa aproximadamente de 17 mil personas.

Sr. Presidente. — Bueno, entonces...

Sr. Aráoz. — Perdón... Me estaba refiriendo a la cantidad de empleos concretos que hay solamente en...

Sr. Presidente. — Por eso, le digo que el señor es un sociólogo. Me parece que hasta se lo está poniendo en un aprieto cuando se le pregunta al señor sobre un tema de estadísticas. Considero que podemos discutirlo en otro ámbito.

Sr. Aráoz. — No sé exactamente cuál es la cantidad absoluta, pero sí sé que es el 0,8 por ciento de la población económicamente activa. Tengo la cifra aquí. Los números no los tengo de memoria, pero eso no significa que no sepa algo de estadística.

Por otro lado, tengo los números de Chile. Eso sí me los acuerdo de memoria porque es un país eminentemente minero y podemos ver qué es lo que ha pasado. Las exportaciones mineras de Chile representan el 63 por ciento del total de las exportaciones de ese país. Sin embargo, el sector ocupado en minería es del 0,8 por ciento del total de trabajadores en Chile. Estas son las relaciones que tenemos que ver. Lo mismo pasa en el caso de Perú. El 60 por ciento de las exportaciones de Perú son de minerales y solamente el 0,9 por ciento del sector, del total de ocupados de Perú, trabaja en la minería a gran escala. Más todavía, en el año 1990 Chile extraía aproximadamente 1.500.000 toneladas de concentrados de cobre y ocupaba aproximadamente a 59 mil trabajadores en la industria del cobre. En el año 2004 pasó a exportar 5.400 millones de toneladas de cobre y el empleo cayó a 39 mil y pico de personas ocupadas. Estamos hablando de una actividad cuyo impacto en la generación de empleo es absolutamente insignificante; más todavía si estamos pensando en la generación de empleo como un efecto compensatorio de la devastación ambiental, que es de lo que estamos hablando acá y que genera este tipo de actividad.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.

Sr. Pérez Alsina. — Se hizo referencia a algunas provincias, entre ellas a la mía, creo que sin conocer algunos aspectos. Entonces, le quiero informar al señor lo siguiente: hay una ley que fue aprobada por diputados y senadores, que creo que son bastante responsables, no son personas que se dejen apurar en el tratamiento de leyes. Quiero informar que hay dos leyes más, muy estrictas, que creo que usted no las conoce: una ley de medio ambiente provincial y una ley de agua tremendamente exigente en lo que se refiere a las prioridades del agua. En cualquier proyecto industrial o de lo que sea se tienen en cuenta las tres leyes, no sólo la ley de protección de glaciares y ambiente periglacial.

Sr. Presidente. — Deseo realizar una aclaración. Las cámaras y todos los invitados no los invité yo, sino que fueron sugeridos por distintos sectores. O sea que aquí cada uno tiene derecho a invitar; como usted invitó al señor Adolfo Pérez Esquivel, otros sectores invitaron a la cámara. Y todos tienen derecho a opinar. No es una cuestión de que yo dije que este sí o no.

Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Escuché una última referencia del expositor respecto de la relación entre la actividad minera, el empleo y, consecuentemente, la incidencia en función de lo económico y social. Quiero decirle que en los últimos tiempos en San Juan se incorporaron a la actividad minera 45 mil nuevos puestos de trabajo entre directos e indirectos y que hoy la provincia de San Juan, que es cuatro veces más chica desde el punto de vista geográfico, poblacional y de

desarrollo industrial, exporta más que la provincia de Mendoza. Entonces, la incidencia en mi provincia —para su información— es altamente significativa; en función del desarrollo industrial, el hecho de las cifras de la exportación —no toda minera porque tiene actividades que son efectos de ese proceso— realmente son significativas. Se han incorporado en San Juan alrededor de 600 ó 700 pymes nuevas en los últimos cinco o seis años que están vinculadas directa o indirectamente con la actividad minera. Esos datos son para que se tengan en cuenta con relación a la vinculación de ese tipo de actividad con el desarrollo económico y social en el caso concreto de mi provincia.

Sr. Aráoz. — Nos ponemos en una cuestión estadísticamente complicada que tiene que ver con la estimación de los puestos indirectos, ya que nadie sabe a ciencia cierta cómo es que se calculan esos puestos indirectos. De todas maneras, estudios del Instituto Canadiense para la Promoción del Desarrollo y la propia CEPAL vienen haciendo investigaciones desde el año 2000, marcando la escasa incidencia que, en términos de encadenamientos productivos hacia delante y hacia atrás, genera este tipo de minería. Se trata básicamente de una actividad primario extractiva que no genera encadenamientos productivos, que no genera innovación tecnológica. Esto no lo digo yo, sino que está reconocido por la propia CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Los invito a que lean los últimos estudios hechos, por ejemplo, por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de esta comisión, que es Fernando Sánchez Albavera. Fernando Sánchez Albavera es peruano y en el año 91 fue ministro del Ministerio de Energía y Minas de Perú; también impulsó la reforma en ese país y hoy está planteando la necesidad de revertir todo este tipo de legislación que se sancionó en los '90.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor Manuel Benítez de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.

Sr. Benítez. — En primer lugar, deseo agradecer al señor presidente y a los señores senadores que nos dan la posibilidad, desde la actividad productiva de la minería argentina, de expresar nuestra opinión respecto de los dos proyectos de ley que están en tratamiento en la Comisión y de poder expresar también, desde nuestro sector, un noble sector, las cosas que expresamos, atento a que en varios artículos se habla de la actividad en la que nosotros trabajamos.

La verdad es que la primera sensación después de estas dos jornadas es que es una ley de glaciares, sin lugar a dudas, en el título. Pero también sentimos que se está hablando y se está, de alguna manera, tratando de poner en el tapete y juzgar la minería como actividad total.

Quiero decirles que represento y soy presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Represento al litio, al cobre, a la sal — la que todos usamos—, a todos los minerales metalíferos de la Argentina, a lo largo y ancho del país; pero también a la piedra, al cemento, a la arena de toda la zona Este, Oeste, Norte y Sur de la Argentina. Represento a una actividad que genera puestos de trabajo, esto es cierto. He escuchado muchos mitos y cosas que no son ciertas. Debo decirlo con convicción y mucha vehemencia porque la minería argentina va de la mano con la ciencia porque de lo contrario no podríamos hacer minería en Argentina, ni se podría hacer minería en el mundo. La minería ha caminado con el hombre y le ha generado el progreso. La sociedad en la cual hoy estamos es producto del matrimonio entre el hombre, los metales y la generación de inteligencia.

Represento a una actividad que genera puestos de trabajo para 256 mil argentinos entre empleos directos e indirectos. Estos son los números oficiales que se encuentran en cualquier archivo provincial, nacional o municipal. Represento a 150 empresas mineras a lo

largo y a lo ancho del país. Somos pocos todavía. Represento a 1260 pymes argentinas que colaboran día y noche a lo largo y a lo ancho del país. Represento a 17 minas en operaciones, que son pocas, esperemos que sean muchas más. Represento a 12.400 millones de pesos en exportaciones, solamente en el año 2008; 16.600 millones en producción y 7.350 millones de pesos en inversiones también durante el año 2008. En fin, esta Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), pequeños, medianos, grandes, nacionales, extranjeros, mixtos, es la minería argentina, la que está trabajando desde hace muy pocos años en generar inversiones y trabajo en los lugares más alejados de la Argentina, en los lugares donde los argentinos más necesitan de la cobertura para sus necesidades más inmediatas y para tener un futuro, un desarrollo y un porvenir para ellos y para sus hijos. Nosotros podemos decir que trabajamos en las zonas más alejadas para extender las fronteras de la Argentina en sentido concreto, sin falacias, con trabajo diario de argentinos, hombres y mujeres, desde el hombre que alcanza un balde de agua, el hombre que cuida el medio ambiente hasta el hombre o la mujer que maneja una máquina importada de alta tecnología.

Asimismo, deseo señalar claramente y de manera muy concreta que la minería está absolutamente de acuerdo con la protección de los glaciares, del ambiente periglacial y del ambiente en general. Nada mejor que los geólogos, los ingenieros de mina que han trabajado la tierra. La minería argentina es el tiempo, es la tierra. Nosotros también somos la vida y el ambiente. No hay otra forma de entender esta concepción porque estamos de acuerdo en proteger el agua porque protegemos también sus cuencas hídricas a lo largo y a lo ancho del país.

Quiero decir que aun antes de que surgieran estos dos proyectos de ley, la minería ha trabajado firmemente en estudios ambientales para cada proyecto, para que en cada proyecto minero podamos proteger el agua, el aire y el suelo donde se desarrollan nuestras tareas. Como prueba de ello, fehaciente y concreta, no existe en el territorio argentino un solo caso de contaminación constatado de la minería moderna. Los proyectos mineros en Argentina tienen varios controles: antes, durante y después de las operaciones. Es lo que nosotros definimos como “estudio de impacto ambiental”. Me he dado la licencia de traer, para que lo puedan observar los señores miembros de esta Comisión, un resumen del estudio de impacto ambiental de Veladero y Pascua-Lama, que está a disposición no sólo de los miembros de la Comisión, sino de todos los ciudadanos de la Argentina. Todos los estudios de impacto ambiental de la minería argentina no solamente deben estar a disposición de los ciudadanos, sino también deben estar a disposición de todas las organizaciones políticas, sociales y de todo tipo que tengan que ver con el medio ambiente y con la vida en general. Hemos traído siete cajas y este es uno de los biblioratos (*se lo alcanza al señor presidente de la Comisión*), que pongo a disposición de la presidencia y de los señores senadores para que puedan observar y constatar todas las cosas que hacemos y el tiempo que lleva. Son estudios que llevan de uno a dos años de trabajo de científicos argentinos. También está en Internet y, además, está a disposición de la gente, que es como debe ser.

En lo que se refiere al estudio de impacto ambiental de Pascua-Lama, deseo señalar que estamos hablando de 5 mil fojas resumidas sobre lo que significó durante mucho tiempo no sólo el estudio del agua, sino de los glaciares. En todos los proyectos que están en zonas cercanas a la cordillera, uno de los primeros pasos que se hace tiene que ver con el agua básicamente. Tengamos en cuenta que uno de los últimos proyectos en una de las provincias argentinas, antes de tener una definición o una resolución, pasó por catorce instituciones oficiales, públicas, semipúblicas y organizaciones ambientales, razón por la cual quiero dejar

firmemente planteado que nuestra actividad entiende que deben protegerse los glaciares claramente. Nosotros ya lo estamos haciendo y celebramos que haya leyes que protejan el medio ambiente. Una de las cuestiones que nos llama la atención es que mientras en el mundo la preocupación por los glaciares se asocia con el fenómeno del cambio climático —esta es una cuestión científica muy profunda y que los glaciólogos la conocen muy bien, que hay un retiro de los glaciares por causas internas y externas—, en Argentina el eje del debate se ha corrido hacia la prohibición de actividades lícitas como la minería, el petróleo y el gas.

En segundo término, paso a analizar puntualmente el proyecto de Diputados. Ya en esta segunda sesión, los señores senadores han tenido la oportunidad de escuchar distintas posiciones, razón por la cual no me voy a detener en cada artículo en particular, pero sí les voy a decir que este proyecto claramente genera una falsa dicotomía entre glaciares o agua y la actividad minera. Realmente, todavía nosotros estamos perplejos frente a eso.

Por ejemplo, vemos que el artículo 1° elimina la potestad de las provincias, que constitucionalmente son las que detentan el dominio de los recursos. El vecino, el hombre de las comunidades aledañas a cada proyecto, es el que mira y el que mejor puede controlar estos resultados.

Vemos en el artículo 2° del proyecto que viene de Diputados un defecto, al realizar una definición vaga e imprecisa de lo que es el ambiente periglacial. Porque habla de “área periglacial”. Un escrito de Darío Trombotto, un científico que conocemos, dice que si nosotros hiciéramos operativa esta ley podríamos llegar a decir que el área periglacial en la Argentina, además de toda la zona norte y central del país, tomaría Neuquén, Río Negro y toda la Patagonia. Esta definición vaga e imprecisa de lo que es el ambiente periglacial sin lugar a dudas va a traer inconvenientes no sólo a las actividades productivas sino también en cuanto a la entelequia jurídica que se produzca respecto de entender qué es un cuerpo glaciar y qué es un cuerpo periglacial.

También existen defectos en la conformación del inventario, ya que el proyecto plantea términos que son imposibles de cumplir en la práctica. Nosotros hemos leído desgrabaciones de sesiones anteriores y fue reconocido por algunas organizaciones que han hablado previamente que el concepto de ambiente periglacial era vago; sin embargo, consideraban que había que sacarlo igual y que, si bien el inventario había que hacerlo previo a hacer operativa la ley, había que ponerla en funcionamiento como está y hacer el inventario después. Los científicos nos han dicho que los términos para efectuar un inventario son bastante más de los que figuran en la ley. Tenemos infinidad de cuerpos helados en la cordillera, tenemos infinidad de zonas científicamente destinadas a enlistar, y eso va a llevar mucho tiempo.

Lo que nosotros decimos es que nuestra actividad minera, previo a iniciar, a caminar por la zona a trabajar, está obligada, muy vehementemente, a realizar los trabajos de control de impacto ambiental que pueda tener ese proyecto. Estamos obligados a rendir examen, antes, incluso, de comenzar a recorrer el área donde se van a hacer las inversiones. Por lo tanto, nosotros, desde la minería, le podemos decir al pueblo argentino que se quede tranquilo, que lo primero que se hace antes de comenzar a trabajar y romper la tierra para generar recursos para la gente es hacer estudios de impacto ambiental, con los mejores parámetros en el orden internacional, parámetros desde los Estados Unidos, parámetros europeos, parámetros argentinos; lo mejor que tiene la tecnología a nivel mundial para resguardar al medio ambiente.

Esto genera confusión, ya que prohíbe proyectos de minería y de infraestructura

mucho antes de que sepamos dónde están las áreas periglaciales. Prohibimos los trabajos en áreas periglaciales, prohibimos que la minería pueda rendir examen; pero no sabemos dónde lo pueden hacer. Sabemos nosotros que son muchos los lugares donde podemos definir glaciares y también son muchos los lugares donde podemos definir áreas periglaciales. Y no se pueden prohibir actividades previamente a saber sobre qué se está trabajando y de qué manera lo van a hacer.

Si este proyecto hubiera sido ley en nuestro país décadas atrás, seguramente la Ruta 40 no existiría en muchos tramos, porque transcurre por lo que a partir de esta ley entendemos como ambientes periglaciales.

La otra cuestión que nos parece compleja en el artículo de las actividades prohibidas es que se nos equipara a la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, que es una actividad ilícita y que ya la legislación Argentina prohíbe y castiga muy duramente. Y la minería es una actividad lícita, acá y en todo el mundo. Claramente, podemos observar que no hay comparación entre esparcir elementos contaminantes y la actividad nuestra, que, como dije antes, es una actividad lícita. Porque cuando hablamos de prohibir la minería estamos hablando de prohibir el desarrollo y la exploración sobre el potasio, el cobre, el litio, la arena, la cal y todos los elementos que tienen que ver con el desarrollo de las naciones que el mundo nos está mostrando.

Estamos viendo la minería argentina con el diario del lunes. Los principales países, las principales democracias del mundo, han generado su desarrollo y su capital crítico para una distribución a sus ciudadanos a partir de la minería. Pensemos en Estados Unidos; pensemos en Canadá; pensemos en Australia; pensemos en Europa; pensemos en el sur de África; pensemos en África; pensemos en nuestros vecinos de Chile, que el 60 por ciento de sus exportaciones es mineral; pensemos en Perú, que hoy está teniendo un *boom* con respecto a la minería; pensemos en Bolivia; pensemos en Brasil.

Hoy se hablaba de las empresas. La segunda empresa más importante metalífera del mundo es una empresa brasileña; es una empresa de coparticipación estatal. Se trata de la antigua Vale do Río Doce, que hoy se denomina Vale. Es una de las empresas que más está creciendo en el mundo. Es una empresa que hoy aporta en la Argentina, en un yacimiento de sales de potasio del río Colorado que transcurre por tres provincias y con una inversión de 3500 millones de dólares iniciales. Es una empresa latinoamericana.

Claramente, estas contradicciones perjudican y generan una falta de armonía entre lo que es una protección debida de los glaciares y el agua y lo que tiene que ver con el desarrollo. Los argentinos necesitamos puentes, necesitamos armonía, necesitamos dar respuestas a la gente. Todos tenemos un rol, todos tenemos un lugar debajo del paraguas de la Argentina. No pueden generarse antinomias que solamente retrasan el desarrollo para miles y millones de argentinos.

Tenemos otras diferencias que tienen que ver con las autoridades de aplicación respecto del proyecto en general. Pero me parece que lo sustancial es esto. Es decir que la vaguedad en la definición del concepto de periglacial genera un grave retroceso en lo que tiene que ver con el desarrollo y la inversión en las principales y más postergadas provincias de la Argentina.

Tampoco entendemos por qué se ha eliminado a las provincias, que son las titulares del dominio de sus recursos naturales.

Un tema sustancial que se observa en el proyecto de ley es que las actividades que han sido prohibidas en su artículo 6° no podrán presentar su estudio de impacto ambiental. Es

decir, a nosotros, que lo venimos haciendo siempre obligadamente, con la participación más igualitaria que conocemos, no nos van a permitir demostrar si lo que hacemos lo hacemos bien o lo hacemos mal. Estamos de acuerdo con que se prohíba lo malo, pero no podemos saber qué prohibir hasta no saber qué es lo que se va a hacer. No podemos saber si un proyecto en tal o cual provincia debe ser prohibido porque está haciendo una mala práctica o está haciendo un mal uso del ambiente si no sabemos qué es lo que piensa hacer. Esto no es lo que pasa en el mundo. Argentina tiene que tener esta mirada al mundo. La Argentina tiene que mirar al futuro; tiene que tener una posición inclusiva, claramente.

Hoy hablábamos del trabajo. Escuchaba hablar del desarrollo. La minería, históricamente, ha sido un motor del desarrollo. Esto no puede ser desmentido. Entonces, mejoremos la minería, pero no la matemos.

Nos comparan con el diseminar sustancias tóxicas. La verdad que no es un buen comienzo.

Pareciera que claramente hay una inversión de la carga de la prueba de una actividad lícita, importante hoy día en el mundo, que ya no discute su importancia. Y que en la Argentina tiene que ver con la puerta grande al desarrollo, una puerta grande a la riqueza de los sectores que realmente están más necesitados. Nosotros llegamos a donde ninguna otra actividad llega. Lo que estamos condenando hace expulsar a nuestros comprovincianos a los centros urbanos.

En este punto, en este lugar donde la historia se junta, yo no puedo dejar de recordar a un senador, prohombre en la historia argentina, que dijo, ya en el siglo XIX, lo siguiente: las minas son hoy el fuego que conduce a los pueblos al desierto para poblarlo; y, como requieren de inteligencia, civilizan a la par que pueblan; como piden máquinas y dan productos pesados y valiosos, señalan la dirección de ferrocarriles y del comercio. Esto lo dijo Domingo Faustino Sarmiento, el mismo hombre que generó una visión de una Argentina con educación para todos, una Argentina igualitaria y democrática. Porque la educación fue el fundamento que hizo que este país pudiera crecer y llegar a donde estamos. Esta frase sigue vigente hoy a más que nunca.

Esto tiene que ver con un concepto central, que ya he escuchado en exposiciones que hicieron en esta Comisión representantes de distintas organizaciones, que hablaban de defender la minería, pero, finalmente, en su fundamentación, lo que exponían era un claro sentimiento “antiminero”, un ataque, velado o no velado, a la actividad minera en su totalidad.

La minería no es solamente el cobre. La minería es el litio. Sabemos nosotros que en el norte de la Argentina compartimos con Bolivia y con parte de Chile entre el 70 y el 80 por ciento del litio del mundo, el mineral del futuro, el de los automotores eléctricos, el de los celulares. Esto va a generar un desarrollo tal en la Argentina que hoy se habla del “oro blanco”, porque es una sal, y que va a permitir que el norte argentino postergado pueda tener distintas formas de desarrollo. Tenemos que discutirlo y hacerlo entre todos; pero juntos, como una forma de entender el país, una forma de entender a partir del desarrollo para la gente, de generar riqueza. Mejorémoslo, cambiémoslo, veámoslo; pero pensemos en eso.

Esto tiene que ver con un concepto central y es muy difícil aceptar. ¿Por qué? Porque lleva a estigmatizar la minería. He escuchado en estas dos sesiones y la verdad es que me he sentido muy mal y también los mineros del interior que trabajan las veinticuatro horas del día y que dicen: “Pero, nosotros lo hacemos conforme a la ley y conforme a lo que nos enseñan las universidades argentinas”. Hay geólogos y chicos que mientras estamos aquí están

aprendiendo de profesores argentinos la mejor tecnología, la mejor forma de entender las cosas para generar riquezas en sus provincias.

Fíjense que a pesar de todos estos pocos años, hemos pasado en términos económicos del 0,3 del PBI en la Argentina —estoy hablando de quince o dieciocho años atrás— a un 4 por ciento en esta época y creciendo. La verdad es que hoy la minería argentina está pasando un momento de transición importante, porque durante muchos años los argentinos, todos, estuvimos saliendo al exterior para tratar de convencer al mundo de que invirtiera en la Argentina, que tenía reglas claras, que era un país generoso donde podíamos construir juntos, tratando otras inclusiones, que genera trabajo y desarrollo en las provincias más alejadas.

Sin lugar a dudas —repito— la minería expande las fronteras internas en el país. La minería permite integración económica y de población, permite que cada hombre y cada mujer pueda quedarse en su provincia, pueda quedarse en la Puna Salteña, en Catamarca, en Mendoza, en todo lo que tienen que ver con áreas donde el cuerpo ciudadano de la Argentina necesita establecerse porque tiene que ver también con la soberanía.

Esto debe ser política de Estado, la minería no tiene lazos cortos. Nosotros venimos por muchos años, los proyectos duran mucho tiempo. Entender y explorar un proyecto puede durar cinco, seis, siete años. Hoy escuchaba a un compatriota de Catamarca que mencionaba a Alumbreira. Alumbreira empezó a explorarse en el año 1930, 1940, empezó como proyecto en 1997 y todavía tiene para diez años más. Los tiempos son largos, los tiempos tienen que ver con la vida del hombre.

La minería permite una integración económica. El hombre en su historia migra hacia donde puede sobrevivir —eso nos muestra la historia del mundo— y generar desarrollo y futuro. El no tener fuentes de trabajo es lo que genera esta inmigración. La minería es la que permite el anclaje población de nuestros hermanos y hermanas argentinas. Piensen ustedes que cuando hablamos de cordilleras o de lugares desérticos, si no hay minería no hay absolutamente nada.

Lo que tenemos que hacer es proteger —proteger no significa siempre prohibir— y controlar, pero por supuesto esto que hay que hacer es la función del Estado. Son las dos herramientas que tiene el hombre cuando desarrolla su mejor relación con el medio ambiente. Claramente, con la minería pasa algo muy similar y más aun si tenemos en cuenta que la Argentina no registra desde el advenimiento de la minería moderna accidentes en el medio ambiente, contaminación en el medio ambiente; muchas otras suposiciones de las que se hablan claramente son parte de decisiones. Como se ha dicho anteriormente, no vinimos a hablar de minería, pero algunas cosas se han dicho.

Señores senadores, ya que hablamos de medio ambiente no quiero terminar esta locución sin recordar una conocida y hermosa frase de una personalidad indiscutida para todos nosotros que en el año 72 y en Naciones Unidas dijo aquella famosa frase que aún hoy retumba y que decía que “la peor contaminación es la pobreza”; me refiero a Gandhi. Desde la minería, nosotros, que estamos a favor del agua, que estamos a favor de los glaciares, que estamos a favor de la tierra y del aire y estamos a favor de la gente, creo que tenemos mucho por hacer, mucho más por decir y mucho más por aportar. Este es nuestro compromiso todos los días. Sin lugar a dudas y con la humildad de que la Argentina está comenzando a transitar este camino, estamos dispuestos a aprender y a mejorar la faena de todos los días. Somos muchos los argentinos en esto y esperamos que el futuro así lo demuestre.

Sr. Presidente. — Sugiero lo siguiente. Tenemos tres oradores vinculados con la actividad minera. Entonces, escuchemos a los tres oradores primero y luego abrimos el espacio para las

preguntas.

— *Asentimiento.*

Sr. Presidente. — A continuación, expondrá el grupo de empresas mineras exploradoras de la República Argentina y en primer lugar tendrá el uso de la palabra el señor Julio Ríos Gómez.

Sr. Ríos Gómez. — La verdad es que para nosotros es un honor estar en este recinto histórico del Senado. Es un honor y lo voy a decir con todas las letras porque amen de ser absolutamente democráticos argentinos de toda la vida, creemos que es acá donde se deben debatir todos los puntos que atañan al manejo no sólo de los recursos naturales de nuestro país, sino también de la Argentina en cuanto a factores de producción, en cuanto a cuidado al medio ambiente y en cuanto a generación de políticas sociales y económicas.

Ahora, la verdad, señor presidente de la Comisión de Medio Ambiente, es que venía dispuesto a contestarle a usted la pregunta que hizo la vez pasada sobre cuál era mejor o peor. Usted pidió que aquellos que estemos en el tema lo dijéramos y la verdad es que no pensaba que me iba a encontrar con un debate de la minería, aunque a mi juego me llamaron porque ese es mi ítem. Y ya que aquí se trataron algunos temas, no quiero dejar pasar por alto algunas cosas.

La senadora Estenssoro que estuvo presente el martes, al igual que yo, dijo que dejaran hablar en algún momento a los miembros de las comunidades. Yo le voy a pedir que me escuche también. Yo soy un profesional argentino que me recibí en una universidad argentina, la Universidad Nacional de Córdoba, en la prestigiosa Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba. Además, quiero decirle que hice mi especialización de doctorado de postgrado en otra universidad estatal fuera de este país, que es la Escuela de Ingenieros de Minas, Universidad de Oviedo, Asturias, España; en ninguna universidad anglosajona trabajé.

Conozco la cordillera desde hace treinta y dos años, recorrí todos los pasos y los puestos habidos y por haber que a usted se le pueda ocurrir hasta el Río Barrancas, separando a Neuquén de Mendoza. Lo anduve a pie, en mula, a caballo; anduve en las viejas T80 —no sé si usted las conoció—, las T1000; hoy, con las Toyota nuevas, con los cuatriciclos y con las motos. Entonces, también creo que podemos hablar con seriedad del tema. Puedo decirle que así como su partido, que responde al Ari, dijo muchas veces —y lo escuché— que el INDEC mentía en las estadísticas, hoy usted y los otros días los ambientalistas o sociólogos hablaron también del INDEC y dijeron cifras del INDEC que traía la Minería y también, no digo que no mientan, sino que está tomado de un rubro que no corresponde.

Yo la invito a que juntos repasemos las estadísticas que genera el INDEC y los sistemas de estructura de los datos del INDEC y le puedo asegurar que sólo aparecen minas y canteras. Es decir, nuestros trabajadores —ahí lo veo al senador Juez— de las canteras de Córdoba, de las canteras de Albardón, de las canteras de Caucete y algunas de las zonas que trabajamos a cielo abierto pero del frente, del taller de trabajo y no de lo que es el proceso manufacturero, están dentro del proceso industrial todos esos números. Con respecto a las provincias petroleras, como lo veo al senador Cimadevilla, le pido que me acompañe y que veamos cuánto es realmente la producción de petróleo, de petróleo de alta densidad, de baja densidad y gas, y no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque todo en este país está enmarañado.

Entonces, creo que tenemos la voz y la seriedad de poder decir que cuando decimos la cantidad de empleos, por lo menos en el caso de San Juan, como dijo el senador Gioja, son ciertos. Sólo en ocho de los proyectos mineros argentinos, tenemos 11.000 trabajos directos; 8 de los 12 que están hoy en marcha, 11.000. Con una tasa de multiplicación indirecta de 1,7

a 2,7. Acá hubo un señor que dijo temerariamente que no había forma de saber el cálculo de cómo hacíamos...

Sr. Presidente. — Discúlpeme...

Sr. Ríos Gómez. — Discúlpeme, quiero terminar...

Sr. Presidente. — No, yo soy el presidente y conduzco el debate. No se remita a otras personas.

Sr. Ríos Gómez. — Está bien. Tiene razón. Hay un sistema de cálculos indirectos que es 1,7 a 2,7. Se multiplica cada empleo de trabajo, dependiendo la densidad de la población y en la zona que está. Y eso está en un trabajo argentino, hecho por la Universidad de General San Martín, que lo puede leer tranquilamente. Ese es el factor nuestro de multiplicación. Entonces, cuando hablamos, debemos hacerlo con criterio y ciertos rasgos de seriedad. Por lo menos, así lo consideramos nosotros.

En el Departamento Sarmiento de San Juan, las cales tienen 12.500 empleos directos. ¿Sabe cuánto es el desempleo en las cales? Cero por ciento; no tenemos desempleo. Si a los 12.500 le sumamos los 11.000, estamos en 23.500. Si lo multiplicamos por 1,7, estamos en aproximadamente 50.000, sin contar a lo largo y a lo ancho provincias como Chubut o Río Negro, que tienen muchísima producción de pórfidos, ventolitas y calizas. Entonces, los números que se han tirado sobre la mesa son aproximados. Necesitamos un mejor cierre del tema de los números.

La señora senadora Morandini dijo muy bien que en la década del '90 se priorizaba a veces el valor sobre el cuidado del recurso natural. Por eso dije lo de recién. Y no es para alabarme, pero soy un profesional argentino, estudié en Córdoba y trabajé toda mi vida acá, habiendo recorrido la Cordillera de cabo a rabo. No hay nadie en este salón —lo puedo asegurar y no es soberbia— que conozca más la Cordillera que yo, porque lo hice en todas las formas habidas y por haber. Y por eso también mis padres me han elegido para presidir esta asociación; no porque soy bonito, tengo título de afuera o buena relación con las empresas extranjeras.

Le quiero decir, senadora, que en la provincia de la que habló el señor anterior me cansé de ver ranchos cuyas paredes eran arpilleras laqueadas o caleadas. Esas eran las paredes que tenía esa gente cuando hace treinta años exploraba para la Secretaría de Minería de la Nación. ¿Se imaginan ustedes el frío y la pobreza de esa zona? Hoy tienen caminos, casas construidas. Hoy sus hijos trabajan con nuestras empresas. Cambió la historia. Tienen dignidad. ¿Eso no es valor agregado?

Ahora bien, no lo haremos a un costo tremendo. Somos los primeros que queremos defender lo nuestro, porque somos los primeros que lo cuidamos. Ustedes se olvidan que nosotros, en nuestro accionar, tenemos muy claro el tema del costo, de lo que significa el costo para nosotros. Tenemos un costo alto, por lo que no podemos vilipendiar el agua —generalmente, no es potable la que usamos— ni algún tipo de insumo; no lo podemos tirar ni verter, porque sabemos lo que nos corresponde y tenemos prácticas ya hechas en otros lugares.

No me quiero ir del tema, pero quiero comentar algunas cosas. Cuando hablamos de glaciares, la prensa porteña nos suele presentar esto (*Exhibe fotografías del glaciar Perito Moreno*). Nos muestran esto, como si todos los glaciares fueran así. Esto es el sur. Esto es lo que a veces confunde también, porque no es —como se dijo acá en algún momento— que solamente por la altura se tienen los glaciares y, por eso, en Tierra del Fuego no hay zonas periglaciares. Los glaciares se tienen por altitud y latitud. Y esto es latitud sur; no necesita

altura. Estamos cerca de los casquetes polares —en este caso, Antártida— y por eso tenemos casi a la misma altura del mar, el frío y el hielo.

Fíjense cómo disminuye el hielo y la nieve a partir del centro de nuestro país (*Exhibe fotografías.*). Una de las imágenes está tomada en una época de invierno y, la otra, en una época de verano. Fíjense que el hielo está solamente en la parte sur, y en la parte centro y norte no hay nada.

Los geólogos trabajamos en estas áreas (*Exhibe fotografías.*). Ésta es la cordillera central y norte de la Argentina; no son los Upsala, Viedma o Perito Moreno, como los muestra la prensa porteña. Esto es el verdadero relieve y topografía de los glaciares en la zona donde trabajamos.

Fíjense este otro (*Exhibe una fotografía.*). Esta puntita de hielo que se ve ahí es el glaciar El Potro, que está en La Rioja —aunque los sanjuaninos digan que es de ellos—, y la otra es la parte de la Sierra de Guayaos en Olacapatós, Salta. Allí estuvo este señor, hace veinte días, trabajando en esta zona.

No quiero abundarlos con fotos, sino que lo hago para mostrarles un poco la realidad que yo veo, que desde el Puerto de Buenos Aires, y más concretamente desde la historia que tiene la Argentina, seis provincias se han beneficiado con eso. Nuestras provincias del interior cordillerano no se favorecieron con la historia de la Pampa húmeda. Nosotros no tuvimos la posibilidad de desarrollar los bolsones cordilleranos, porque estamos muy lejos del Puerto de Buenos Aires.

Coincido con las señoras senadoras Morandini y Estenssoro, que tal vez debemos discutir mejores controles para todo tipo de actividad productiva, pero nunca olvidarnos que tenemos la posibilidad de desarrollar nuestros recursos naturales y ser gente, porque nosotros también en el interior del país somos gente, y dejar de llenar el conurbano de Buenos Aires y el de Rosario y Córdoba, con cabecitas negras. Porque antes no tenían trabajo y hoy está volviendo a nuestros pueblos. Está volviendo a trabajar porque tiene una posibilidad y sabe que está en su lugar.

Quiero comentar algunos datos, señor presidente. Hay un índice que refleja la cantidad de agua superficial potencialmente disponible en un país. Es la cantidad de agua, escorrentía y superficial, dividido por la superficie y luego utilizada para dividirlas por los habitantes. ¿Sabe qué significa ese número para la Argentina? Que el índice de disponibilidad hídrica es de 25 millones de litros por ambiente por año. Ese dato no es mío, sino que pertenece a los hidrogeólogos de cualquier universidad del país. ¿Sabe qué significa eso? Que con las fuentes que tenemos, podemos darle agua a cada argentino durante doscientos años, con las fuentes que tenemos actualmente. Nosotros consumimos —o tal vez no porque la gente del interior del país consume mucho menos que lo que se consume en Capital Federal o en las grandes ciudades—, haciendo un promedio, alrededor de 50 litros por día, 1500 litros mes, es decir, 180 mil litros de agua por habitante por año. Nuestro índice es de 25 millones de litros habitante año. Y las cifras que se mencionan son más que elocuentes para demostrar que la Argentina no debería tener problemas de provisión de agua. Esa tan mentada manifestación: ¡Cuidemos ya todo, porque estamos sin agua, no tenemos agua y no les podemos dar agua! Es cierto que la Argentina tiene —y lo sabemos y está comprobado— un 30 por ciento del país con buena provisión de agua y el resto del territorio se considera perteneciente a las regiones áridas y semiáridas. No obstante, a continuación, les daré otro ejemplo clarificador.

No sé si se encuentra aquí algún senador por el Chaco, pero usted que es misionero suele tener en su provincia problemas de grandes sequías como las que padece el interior del

Chaco, donde ni siquiera tienen agua potable en muchos pueblos, en efecto, quiero que escuchen claramente lo siguiente: El caudal del río Paraná lleva históricamente 15 mil metros cúbicos por segundo y en el momento de creciente lleva 70 mil metros cúbicos, es decir que, cinco segundos de sus 15 mil metros cúbicos servirían para dar agua potable a todas las localidades de la provincia del Chaco, pero con una red de canales y diques niveladores tecnológicamente bien diseñados. Por consiguiente, en relación al contenido y reserva de agua en nuestro país, estas estarían muy bien cubiertas pero si se hubieran hecho o se hicieran las obras correspondientes.

Por otro lado, en relación con otro tema que trató uno de los expositores que me precedieron manifestó: “el agua virtual que se va con los concentrados nuestros...” Él habló del agua que se va con la producción de minerales, en realidad, con el agua que usa la minería, porque no se va con los minerales, pero se llama agua virtual. Este un concepto inglés y quien lo utilizó por primera vez se llama Abraham. El agua virtual es la que está incorporada en todo producto o materia prima que sale –de cualquier sector y va a otro lado–, que se está exportando. Es decir que es la que se va al exterior y se encuentra contenida en nuestras materias primas de origen animal o vegetal; por lo tanto, son aguas y nutrientes que se sacan de nuestros suelos y que no se reponen. Y quiero darles un ejemplo, un litro de vino tiene 75 por ciento de agua, por consiguiente, una tonelada de fruta que sale de nuestro país lleva 940 litros de agua; una tonelada de carne tiene un 65 por ciento de agua que se exporta. Esa agua entró a los suelos, se fue con la materia prima y no retornó.

El agua que utiliza la minería se recicla en un 80 por ciento. Una sola vez cargamos el agua en el circuito, el resto es agua fresca que se evapora en ese circuito.

Sr. Filmus. – Estoy tranquilo...

– El señores senador Filmus realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Ríos Gómez. – Tiene razón.

Nadie en su sano juicio puede pretender impedir proteger el agua, el recurso natural, y, asimismo, impedir la protección de los glaciares. En eso estamos totalmente de acuerdo con el espíritu de la ley que pretenden aprobar. Alguna de las dos opciones o tal vez, como algún señor senador de la provincia de San Juan manifestó, presentar una tercera opción. En este sentido, no conozco el reglamento interno y no puedo decir si esto es posible o no. Pero si observamos la redacción de Diputados adolece de una serie de irregularidades, entre ellas, no respeta las autonomías provinciales. Creemos que el IANIGLA es un instituto importante, con gente muy capacitada, pero que estructural y físicamente no está en condiciones de poder hacer todo el relevamiento que se necesita para la creación del inventario, sobre todo, si se tienen en cuenta los plazos que marca la iniciativa. Ya que se necesitarían sí o sí otros organismos provinciales que trabajen con él, pero que no figuran en la redacción del proyecto.

Vemos también la manifestación de impedir el desarrollo y la continuación de actividades ligadas a la producción, como la minería, la actividad petrolera, la industria e, incluso, el turismo. Nos han querido demostrar que lo que decimos no es cierto, que no se llegará a tal extremo, sin embargo, si aplicáramos así como figura el término periglacial –con “r”, y no en “l”– de la iniciativa abarcaría suelos congelados que, incluso, pueden estarlo sólo algunos meses al año. El señor senador Filmus realizó una aclaración perteneciente al doctor Ricardo Villalba con respecto a los suelos que no son permanentes, estos no serían periglaciares, pero eso no figura en el espíritu del proyecto. Eso es la interpretación de un profesional, entonces, llegado el caso de una presentación ante un juez, éste no contará con

esa aclaración.

Fíjense, entonces, lo que resultaría si utilizáramos, así como está, la ley que viene de diputados. Esta es la Argentina...

– El señor Ríos Gómez muestra un mapa.

Sr. Ríos Gómez. – En amarillo, pueden observar lo que corresponde –dicho por profesionales– al ambiente periglacial en general con suelos congelados, no establecidos ni aclarados permanentes o parcialmente, es decir que la previsión sería muy gravosa.

Por otro lado, como podemos apreciar, medio país quedaría merced de una ley ambigua y sin poder de definición. Y, además, quiero decir otra cosa, ya que acá se ha hablado mucho del doctor Villalba que, como bien manifestó el señor senador Filmus, ha contribuido en muchos de los conceptos aquí vertidos, yo tuve la posibilidad de presenciar una charla suya el 10 de septiembre en la Universidad de Congreso y él aclaró lo siguiente: “El ambiente periglacial no es un recurso hídrico. No constituye, por lo tanto, una reserva hídrica actual”, lo sería para el futuro, pero, reitero, no actual, entonces hoy no constituye una recarga de las aguas, será a futuro, pero hoy no lo constituye, eso dice el espíritu de la ley, por ende, estamos aprobando algo que no está claro y el mismo propio Villalba lo está desmintiendo y creo que también se podría ver en las transcripciones taquigráficas, porque también lo mencionó una de las veces que estuvo acá. Yo he hablado con él de esto.

Por lo tanto, al colocarse en la iniciativa el término “ambiente perigracial” se estaría contradiciendo el mismo espíritu de la iniciativa que pretende proteger las áreas que sean reguladoras de los cursos de agua y por ende no sería correcto. El ambiente periglacial no es un regulador de los cursos de agua en la naciente de los ríos y solamente en el proyecto del Senado, al que hizo referencia el señor senador Filmus, cuando se utiliza “glaciares de roca” o “litoglaciares”, se hace uso del término correspondiente dentro del ambiente periglacial, pero eso no es todo, está circunscripto a una geoforma determinada y habrá que hacerlo.

Quisiera realizar indicaciones. Quiero marcar dos cosas y dejarle para que finalice el vicepresidente de GEMERA, si me permite usted, porque él el que finalizará, es decir, es quien presentará las conclusiones.

– El señor presidente realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Ríos Gómez. – Pero repasamos algunos números estadísticos.

– Varios señores senadores realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Ríos Gómez. – Solamente quería repasar algunos números antes de llegar a las conclusiones que para mí son importantes. Se ha repetido hasta el cansancio que los glaciares y periglaciares constituyen una reserva hídrica que alcanza el 70 por ciento de la provisión de agua dulce de nuestro país. No hay nada más falaz que esto, ya que no hay ningún sustento técnico ni científico para realizar dicha afirmación. Se ha hablado de “reserva” pero no de “recurso hídrico”. Una reserva que quizás la podamos conseguir. Los estudios hidrogeológicos hechos por profesionales del CRAS (Centro Regional Argentino de Aguas Subterráneas, formado por expertos de los años 70) de San Juan han hecho varios estudios de las cuencas del Río San Juan y del Río Jáchal, tomados de las nacientes donde se encuentran los glaciares, y han demostrado que el aporte de los glaciares —la ablación de esos glaciares en algunas cuencas o nacientes de ríos cordilleranos— no llega a más del 8 por ciento; están entre el 4 y el 8 por ciento. Ese realmente es el aporte de un glaciar, el resto lo produce la nieve.

Los productores agrícolas de nuestra provincia de San Juan saben claramente que en un año no nevador el agua baja a condiciones ínfimas y realmente el glaciar no aporta nada. Los hechos así lo demuestran: durante los años 68 a 72 hubo una sequía muy grande en San Juan y de 60 mil litros por segundo que trae el río San Juan, sólo llegó a traer 18 mil metros cúbicos durante cuatro años; ¿dónde estuvo el aporte de los glaciares?

Entonces, hay que ser muy cuidadoso y debemos manejarnos con datos científicos. Esto es (*mostrando un gráfico a los presentes*) el aporte que recibe el río Jáchal y el río San Juan, claramente estudiados por hidrogeólogos. Lo verde, el derrame de los ríos. Lo azul, el derrame de los acuíferos cordilleranos en la zona de Calingasta-Iglesia y el aporte exclusivo de los glaciares.

Se ha hablado de la Barrick Gold; se ha hablado de la Banelco Gold en algún programa televisivo; esto nos afecta a todos los mineros. Queremos decir lo siguiente: en San Juan, en la zona que exploramos, la mina Veladero y el proyecto binacional Pascua Lama son realmente concesiones de la empresa Barrick Gold. Pero Barrick Gold es una de las 45 empresas que exploran la Cordillera de los Andes. De hecho, el proyecto más importante que tiene San Juan hoy en día no es Pascua Lama, que divide con Chile, sino el proyecto Pachón, de cobre, de capitales suizos, Xstrata Copper, que supera ampliamente la inversión de Pascua Lama y es toda en territorio argentino. Esto también llevaría a la prohibición de proyectos en vías de ejecución que están en la Cordillera de los Andes, como minera Quevar y Lindero en la Puna salteña. Está a muy pocos kilómetros de la frontera con Chile. Uno de ellos es de Apex Silver y el otro de Minera Mansfield, capitales nacionales y canadienses.

Lo más grave es que si también aprobamos las condiciones como están, sin definiciones, con la definición de “periglacial” que trae la iniciativa de Diputados —ya lo manifestó el señor gobernador de Santa Cruz— se impediría la continuidad de explotación del yacimiento de carbón de Río Turbio en Santa Cruz y la posibilidad de finalizar la usina que se alimentará con combustible fósil y se integrará al sistema interconectado nacional. Todos los cuales verían peligrar su ejecución si se mantiene la ley como viene de Diputados.

Finalmente, señor presidente, los glaciares no son reserva de agua, en sequía no compensa los caudales como lo hacen los acuíferos. La reserva de agua son los acuíferos que aportan el agua que las nevadas en épocas de sequía no aportan. Los ambientes periglaciales sólo pueden aportar agua subterránea, pero si son cuerpos congelados no son reservas que equilibren caudales en los ríos. Hemos dado muchas muestras de que somos sustentables en nuestras acciones; por eso, creemos que la actividad minera ha mejorado mucho la calidad de vida de las comunidades adyacentes.

Estamos totalmente de acuerdo en que los glaciares necesitan un reglamento permanente, ya que en los últimos 50 años se han reducido notablemente y en zonas donde no hubo actividad.

Recuerdo la pregunta realizaba por el señor presidente la vez pasada respecto del calentamiento climático. La minería aporta datos en tiempo real y hacemos un uso racional del agua, recirculamos más del 80 por ciento del agua que se usa.

Solamente les quiero decir, señores senadores de la Nación, que tienen ustedes la palabra y el tiempo para lograr corregir los desvíos y errores que se han consagrado en el texto de la ley que fuera aprobado por Diputados. Les solicitamos que prime vuestro criterio federal en la votación. Esto será muy importante para que todas las actividades productivas puedan seguir desarrollándose y evitar la emigración de los pobladores de los valles cordilleranos o de las zonas de la meseta central patagónica. Buscamos recuperar la dignidad

como personas y lograr trabajos estables y continuos en el tiempo.

Sr. Presidente. — Convocamos al señor Héctor Laplace de la Asociación Obrera Minera Argentina.

Sr. Laplace. — En nombre de la Asociación Obrera Minera Argentina, en definitiva de los trabajadores mineros que represento, quiero agradecerle al señor senador Eduardo Torres, como presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por la invitación. También se ha hablado de que es la primera y única vez que invitaron a los trabajadores mineros para expresar qué pensamos con relación a este tema.

Quiero ser cuidadoso con el tiempo porque creo que el tema que nos convoca y que particularmente convoca a los señores senadores no permite malgastarlo; venir acá, agarrar la guitarra y tenerlos una hora hablando para sacar muy pocas conclusiones. Por eso, en gran medida, voy a leer qué piensa la Organización Sindical con relación al tema de esta famosa ley de glaciares o ambas en su defecto.

Los trabajadores observamos con suma preocupación que se mezclan en el debate intereses ideológicos, políticos y corporativos sin profundizar la búsqueda de certezas que clarifiquen a toda la sociedad. El uso racional de los recursos naturales no sólo genera riqueza para un país como Argentina, sino que genera fuentes de trabajo y desarrollo en zonas inhóspitas. Pero no se confundan, querer más fuentes de trabajo no es aniquilar la naturaleza. Los trabajadores mineros sabemos de montaña y cuánto sabremos de agua, porque no solamente nosotros, sino también nuestras familias viven en ellas.

Es nuestro deber denunciar este tipo de proyecto que no sólo quiere detener a una industria, sino que quiere impedir que se lleven a cabo políticas de Estado, las que son desafiadas desde miopías y egoísmos, con posturas centralistas y desconocedoras del país real, ese que vivimos los trabajadores mineros.

Quieren dirimir diferencias electorales con el gobierno nacional y usan a la minería como campo de batalla. Acá se quiere prohibir desde una legislación que no asumió este tema desde la concreción de políticas de Estado, sino de intereses mezquinos, como simple ejemplo.

Después de llevar más de 20 meses debatiendo y sancionando proyectos, es la primera vez que llaman a los trabajadores para ser escuchados. El sector del trabajo es el primer defensor del uso racional de los recursos naturales. Por eso, exigimos que los recursos hídricos deben ser estudiados en su totalidad. Para sentirnos plenamente soberanos de estos, necesitamos saber cuáles son nuestros recursos y después establecer normas que protejan el bien social. A no confundirse, el obrero minero no hace lobby para empresas, sino que defiende la fuente de trabajo, la inclusión social y las nuevas oportunidades. Por estar aquí no claudicamos derechos ni luchas reivindicativas, tampoco queremos ser presa fácil de un legislador errado y una empresa afectada. Debaten de cara al pueblo. Si hay que prohibir, avancen, pero sin menoscabar la capacidad de conocimiento de nuestros científicos y trabajadores. Hoy les estamos advirtiendo que algo huele mal si actuamos de esta forma.

Pocos son los medios periodísticos que nos han consultado la opinión, como si no tuviera valor. De la misma forma, pocos son los legisladores nacionales que buscan esclarecerse con la experiencia e historia de una organización como la Asociación Obrera Minera Argentina, que lleva 57 años ya de existencia.

Los exhortamos a romper con este modelo miope y poco creíble; hablen con nuestra gente que no puede expresarse frente al Congreso de la Nación porque mientras debatimos en este recinto, ellos están trabajando a miles de kilómetros en sus piques y preguntándose: “¿de

qué están hablando estos señores que desconocen la actividad minera?”.

Aquí se han escuchado muchas voces, tanto el martes próximo pasado como ahora. Entonces, nos preguntamos: ¿quiénes son, a quiénes representan, conocen algún proyecto hoy en explotación?

La Asociación Obrera Minera Argentina representa a más de 40 mil trabajadores convencionales a lo largo y ancho de nuestra querida República Argentina, a los que deberían agregarse los más de 200 mil trabajadores que lo hacen de manera indirecta. En nuestra actividad, por cada puesto directo que se genera se estiman hasta siete puestos de manera indirecta. Por ello, estamos en condiciones de manifestar que más de 300 mil hogares en la República Argentina dependen de nuestra actividad minera. Queremos destacar que desde la mina de Turbio en la provincia de Santa Cruz, hasta la mina de El Aguilar en la provincia de Jujuy, a lo largo de toda nuestra cordillera, varios proyectos quedan incluidos dentro de los límites de las prohibiciones. ¿Hay consciencia de esto?

Aquí, el martes próximo pasado, se mostró un mapeo de lo que implicaría el hecho de sancionarse el proyecto consensuado, entre comillas, en Diputados, las prohibiciones para con nuestra actividad; el que se pretendió luego menoscabar incluso tildándolo de terrorismo y poco serio. Queremos resaltar que el mencionado no es ni más ni menos que una publicación del IANIGLA, en la persona del geólogo, uno de sus fundadores, Arturo Corte. Si nos detenemos en lo investigado por el mencionado profesional hasta en la provincia de Buenos Aires tendríamos ambiente periglacial.

Señores, nos preguntamos lo siguiente: ¿quieren cambiar una larga lista de trabajadores afectados por legislaciones basadas en presunciones? ¿Quieren canjear sueldos dignos por subsidios? ¿Quieren aumentar el clientelismo ante la falta de trabajo? Hablan de seguridad jurídica y antes de analizar, estudiar y profundizar, hablan de prohibir. Si quieren sumar en el campo electoral, los mentores de estas iniciativas, ¿saben algo o son solamente slogans mediáticos? ¿Por qué no miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos cómo hacen en Bolivia, Brasil, Chile, Perú, por citar algunos casos? ¿Por qué ellos sí pueden administrar el uso racional de los recursos naturales y nosotros no? Desde que llegó la nueva minería a Argentina y se puso en funcionamiento otro importante enclave del desarrollo nacional, atacan al sector hablando de contaminación, saqueo y responsabilidad con total liviandad; y ello por no aplicar otros calificativos.

Surge de las apreciaciones de nuestros científicos e investigadores que el objetivo de la ley vetada y de la reciente sanción de la Cámara de Diputados, que hoy los senadores estudian, distorsiona el concepto de “recurso hídrico” para extender a casi toda la cordillera las áreas donde impedir la actividad minera. Sin pretender entrar en cuestiones técnicas — donde entendemos que muchos profesionales del sector pueden realizar aportes desde sus conocimientos— y mucho se ha debatido sobre distintos artículos —en particular sobre el proyecto girado por Diputados—, sólo nos detendremos en lo establecido en el artículo 6: nuestra actividad minera quedará prohibida. No podemos, no debemos, no queremos; en definitiva, no es posible la actividad minera en un glaciar. ¿Pero por qué? Una vez más se nos discrimina incluyéndonos lisa y llanamente entre las prohibiciones. ¿Por qué? Si hay actividades que pueden desarrollarse en ambientes periglaciales a partir de una evaluación de impacto ambiental, ¿no se solicita ya mismo a todas las actividades productivas esta posibilidad?

En otro orden, nótese que la definición de “periglacial” incluye, en todos los estudios hasta aquí realizados, procesos y características asociadas a glaciares anteriores o actuales,

involucra a casi todas las áreas de montaña aunque estén a baja altura y lejos, incluso, de cualquier glaciar actual. En consecuencia, asimilar las áreas periglaciales y los suelos congelados al concepto de recurso hídrico no tiene ningún rigor ni justificativo científico ni técnico. Este término de “periglacial” fue utilizado por primera vez en 1909 por el polaco Lozinski y hacía referencia a zonas periféricas de los glaciares que quedaron de las últimas glaciaciones, que terminaron hace unos 10 mil años. Luego, Gutiérrez Elorza aclara que, con posterioridad, este término se ha extendido para designar procesos y características de climas fríos, sin tener en cuenta su proximidad temporal o espacial con los glaciares. Esta extensión del término hace que lo periglacial se convierta en algo ambiguo. Por eso, señores, las discusiones se terminan cuando se define a las cosas por su nombre.

Los conceptos glaciares, en cambio, cubiertos o descubiertos, y glaciares de rocas o de escombros, son perfectamente claros porque se trata de masas con mayor o menor cantidad de hielo, cuyos límites pueden determinarse en el terreno sin ninguna dificultad. Estos glaciares, efectivamente, son recursos hídricos y es imprescindible que sean objeto de estudios y monitoreos. Y deben protegerse de cualquier acción antrópica que los ponga en peligro.

Pero, en definitiva, ¿aquí se defiende a los glaciares o se va en contra de la minería? La respuesta, a nuestro criterio, es muy sencilla y más grave aún. No se trata de defender los glaciares, sino de atacar a nuestra industria, agitando banderas que resultan atractivas para muchos habitantes de las grandes ciudades del país, que no conocen nada de minería y que no han visto nunca las condiciones en que se realizan las explotaciones ni, mucho menos, las reglas que la rigen.

Por eso deseamos hablar con certezas. Por eso la fuerza de trabajo que represento pide a todos los senadores que no se pongan fechas ni se sometan a presiones; que busquen la verdad, esa que los hará sabios y libres. La llegada de la nueva minería trajo aparejada mejores condiciones de trabajo y salarios dignos, que nos posibilitan una mejor condición de vida a los trabajadores mineros y, por supuesto, a nuestras familias. Quienes provienen de los lugares más recónditos de nuestra Patria y que lo que saben hacer, y muy bien, es este digno trabajo, están orgullosos de ser mineros. Piensen en ellos, pues no desean formar parte de los cordones de las grandes urbes en busca de migajas.

Ya que hablaba de salarios —esta es una publicación del día de hoy—, creo que a nadie escapa que, de acuerdo con datos oficiales, las mejoras salariales del sector minero fueron las más importantes en el año 2009. Si nos detenemos en la publicación de hoy, se evalúa el primer trimestre de 2010 en contraste con el mismo periodo del año 2009. La actividad minera es la que más aumentó, en salarios, con el 32,1 por ciento de incremento.

Pero otra cuestión que también tenemos la obligación de preguntarnos, y lamentablemente debo mencionar que la respuesta no la vamos a tener nosotros, es qué pasa de sancionarse este proyecto. ¿Va a haber despidos, acaso? Los trabajadores mineros, a lo largo y a lo ancho de nuestra Patria y de nuestra cordillera, ¿nos vamos a quedar sin trabajo? Me gustaría que alguien nos dé de ello una explicación.

En definitiva, adherimos a la idea de primero estudiar efectivamente los glaciares para, después, aplicar una protección sin impedir actividades económicas en zonas de montaña. Sugerimos que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales del CONICET haga el estudio junto con el resto de las instituciones, técnicos, investigadores y científicos que se dedican a estos temas. Para ello, dotarlos de presupuesto. Y así poder debatir desde la certeza, y no desde la presunción y el desconocimiento.

Si esto no fuera posible, la Asociación Obrera Minera Argentina considera que el

proyecto de este Honorable Senado de la Nación es una alternativa válida, seguramente perfectible en el tiempo, pero que admitirá, en el presente, que los trabajadores mineros argentinos sigan apostando a que esta actividad les va a permitir conquistar la tan anhelada justicia social que sin dudas ellos merecen.

Sr. Presidente. — A continuación, hará uso de la palabra el señor Javier Melcer, de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos

Sr. Melcer. — Antes de comenzar, quisiera agradecer a esta Comisión, en el nombre de su presidente, por haber invitado a la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos a participar de este rico e intenso debate.

Principalmente, queremos destacar que la industria hidrocarburífera valora y respeta la protección del medio ambiente, los glaciares y el ambiente periglacial. Esto no sólo queda demostrado con el cumplimiento de las normas legales aplicables que regula la industria en nuestro país sino también con los altos estándares en materia de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente que las empresas se imponen per se.

La actividad hidrocarburífera ha desarrollado avanzadas tecnologías para minimizar su impacto. Las empresas que esta Cámara representa ven con preocupación que ambos proyectos de ley de protección del glaciar y ambientes periglaciales, principalmente el proyecto de Diputados, adolecen de una difusa, amplia y vaga definición del concepto de ambiente periglacial. Esto quedó demostrado en la reunión de comisión anterior, el martes 21 de septiembre, y también lo estamos notando en el debate que se está generando en el día de la fecha.

Este punto no impide un rico debate y las distintas posturas que cada una de las instituciones y organizaciones invitadas han presentado. Pero ninguno de los representantes demostró tener el mismo conocimiento o entendimiento respecto de esta definición: ambiente periglacial. En atención a lo expuesto es que consideramos la necesidad de realizar una redacción precisa y clara del concepto de ambiente periglacial.

Por último, queremos destacar que la protección del ambiente no puede ser considerada en forma aislada, sino como parte integrante del proceso de desarrollo. Este concepto exige que el ambiente, además de ser sano y equilibrado, también deba ser apto para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras.

Sr. Presidente. — Queda abierta la ronda de preguntas para este sector.

Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.

Sr. Martínez (A. A.). — Más que preguntas, quería hacer dos pequeñas declaraciones, porque el debate lo vamos a realizar después nosotros.

Se afirmó, por ejemplo, que la Ruta 40, en caso de aplicarse la ley de Diputados, no podría haber sido realizada. En realidad, sí: la Ruta 40, con la ley de Diputados, podría haberse realizado. Es más, no solamente la 40, sino también la 41, que en mi provincia, Santa Cruz, va a ser entre la 40 y la zona cordillerana. Porque en el artículo 6° del proyecto que viene de la Cámara de Diputados no se prohíben obras de arquitectura e ingeniería, que sí se prohíben en la ley que va del Senado.

Por otro lado, también escuché algo que tiene que ver con mi provincia, que es un tema que por supuesto me preocupé mucho en estudiar, y tiene que ver con la mina de Río Turbio. Si yo me voy al inventario de recursos naturales de la Secretaría de Minería, documento existente que tiene que ver con el plano de **geología AZRP3GE1**, de lo que es la definición de la fisiogeografía de la zona, habla que en las partes más elevadas de la región,

por encima de los 700 metros, se encuentra comprendida en un ambiente periglacial. Por debajo de los 700, por ende, no es periglacial, no solamente la mina de Río Turbio sino el emprendimiento turístico Valdelén, que está a los 680 metros. Ambos estarían excluidos de cualquier tipo de prohibición en este caso para un desarrollo puntual y concreto.

Por eso, independientemente de respetar todas las posiciones, algunas con exceso porque se aludió a los “cabecitas negras” que van y que vienen porque realmente creo que los empleados que trabajan en las minas pueden ser rubios o negros como yo. No me gustó la expresión, voy a ser absolutamente honesto y quisiera dejarlo sentado. Entonces, creo que debemos hacer un debate con sumo respeto independientemente de las distintas posiciones que tenemos. Quiero volver a repetir que aquellas cosas que se han dicho que no son ciertas quisiera aclararlas porque creo que debemos balancearnos en la verdad.

En este caso, como en otras leyes que hemos discutido, ni quien les habla ni la gran parte del bloque al que pertenezco tenemos ni los ojos de la Barrick Gold ni los ojos de los fundamentalistas ambientales. Queremos avanzar en una ley que tenga un criterio sostenido y sustentable, primero y fundamental, porque no es una ley contra la minería; esto quiero dejarlo totalmente claro. Habrá algunos que lo habrán querido interpretar de esa manera, pero lo que estamos haciendo, por lo menos algunos —absolutamente convencidos—, es una ley de protección de los glaciares y de aquellas cuestiones que tienen que ver con los recursos hídricos y estratégicos y punto.

Simplemente eso lo quería dejar sentado, señor presidente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Morandini.

Sra. Morandini. — Quería decirle al señor Benítez, de la Cámara Minera, que efectivamente tiene razón porque este es un problema de desarrollo de los glaciares que se están derritiendo por causa del modelo de desarrollo que tomaron los países ricos y que ahora padecemos nosotros. Entonces, tendríamos que evitar tomar lo que los otros países ya han puesto en la basura.

Me gustaría concretamente saber cuáles son las ventajas que nuestro país ofrece para que la minería se haya desarrollado como ustedes describieron en términos de dinero. Me gustaría preguntarle también qué tiene para decir sobre la prohibición de la minería a cielo abierto en la Comunidad Económica Europea y, a su vez, me gustaría saber su opinión acerca del juicio que llevó adelante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que procesó a Julián Rooney, vicepresidente de la Minera Alumbrera. Rooney sería el primer juicio ambiental en nuestro país y en América Latina.

Sr. Benítez. — La primera pregunta la contesto de la siguiente manera. La República Argentina, como la mayoría de los países de esta zona del mundo, tiene riquezas mineras, pero la Argentina siempre ha estado retrasada. Nosotros podemos decir que el tiempo de desarrollo no tiene más de quince o dieciocho años. ¿Por qué? Porque tenemos muchas riquezas geológicas. Pensemos por ejemplo que compartimos con Chile la Cordillera en un espacio mayor con una territorialidad mayor y nuestro territorio nos permite —y lo hemos venido haciendo a partir de la exploración— encontrar distintos minerales en todo el país no solamente metalíferos, sino también sales. Hoy cité que el tema del litio en Norte Argentino, que es un mineral cuya importancia económica hace muy poco la hemos descubierto. También tenemos sales como el potasio, tenemos cal, tenemos cobre, tenemos níquel, tenemos plomo. Es decir, la riqueza de la Argentina en términos geológicos es fantástica y todavía falta mucho por encontrar.

Lo que nosotros decíamos, tal como lo habían dicho líderes políticos de la Argentina

de siempre, es que estamos sentados en una silla de valor con harapos. La Argentina necesita descubrir su riqueza para que esas riquezas que nacen con los recursos naturales puedan dar capital crítico y puedan dar una posibilidad de desarrollo sustentable para todos los argentinos y para las generaciones posteriores. El mundo lo ha hecho así, la Argentina tiene recursos. La ventaja de la Argentina de llegar tarde a esto del desarrollo minero en esta parte del mundo tiene que ver con que estamos utilizando la mejor tecnología. Lo mejor que se conoce en maquinaria, en procedimientos y en controles de medio ambiente está hoy en el país.

El otro día hablábamos de un hecho que sucedió en la República hermana de Chile. Las máquinas que ellos tuvieron que importar, la Argentina las tiene; la tecnología que vemos en cualquier país desarrollado del mundo, como Australia o Canadá, la Argentina la tiene; los protocolos; las obligaciones ambientales, no solamente las argentinas sino las internacionales, las tenemos en el país. La verdad es que hoy la Argentina puede llegar a ser, como otros países del mundo, una frontera de crecimiento que necesariamente tiene que ser en beneficio de todos los habitantes del pueblo. Esto me parece que es indiscutible porque, además, el mundo lo ha sabido. El mundo y la historia del mundo llama a la minería como un elemento fundamental de desarrollo hecho de manera sustentable y cumpliendo las reglas del sano oficio.

La Argentina necesita una puerta para el desarrollo, una puerta para el bienestar de la gente, como lo es el agro, como es la piscicultura y todas las ramas de la producción. La Argentina está a la vanguardia de esto y, además, tiene los recursos humanos para llegar a ese punto.

Le doy un solo dato. El milagro, el bum de la minería peruana tiene entre sus principales responsables de control técnico en una de las principales minas a un argentino, un sanjuanino, que se educó en universidades públicas argentinas y que hizo sus primeros pasos en la Argentina y que hoy está siendo respetado en un país externo que recibe mucha inversión de todo el mundo.

La segunda pregunta...

Sr. Presidente. — Doctor, discúlpeme, le pido por favor que sintetice las respuestas porque si no...

Sr. Benítez. — Le pido disculpas, pero es muy importante la pregunta de la señora senadora.

Sr. Presidente. — Para colmo, nos anticiparon que Labor Parlamentaria decidió que este tema se trate mañana y no pasado.

Sr. Benítez. — ¿Podría volver a formular la segunda pregunta, por favor?

Sra. Morandini. — Sí. ¿Por qué Europa prohíbe la minería a cielo abierto?

Sr. Benítez. — No es cierto.

Hay un consejo de una comisión de la Comunidad Económica Europea que después el órgano ejecutivo lo retira. Eso fue una inquietud de una comisión de la Comunidad Europea que tiene sus órganos institucionales. Cuando estamos hablando de minería a cielo abierto, estamos hablando del cianuro, que es el tema que se trató. La verdad es que en Europa hoy no está prohibida la utilización de cianuro. Es más, esto lo podemos corroborar entrando a la Comunidad Económica Europea en el sitio donde están las normativas de su órganos ejecutivos.

Sra. Morandini. — En tercer lugar, quería saber su opinión respecto del juicio al vicepresidente de Minera Alumbra.

Sr. Benítez. — Como usted sabe, la persona que usted cita no está procesada hoy en día. Los

mecanismos de la justicia argentina, que son complejos y largos, en un profundo proceso de investigación de lo que tenemos conocimiento en la comunidad minera no ha comprobado ningún elemento que lleve a procesarlo. Es más, se ha levantado su procesamiento, que tuvo que ver con un proceso judicial con muchas etapas y que tiene que ver con el mecanismo de la justicia argentina. Hoy no tenemos ningún ejecutivo de las empresas mineras argentinas que esté procesado.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Filmus. Sea breve, por favor.

Sr. Filmus. — Será un poco difícil porque acumulamos todas las intervenciones.

La primera cuestión es para coincidir con el senador Martínez. Estamos discutiendo dos cosas distintas y creo que algunas cuestiones que se están diciendo aquí, se apruebe uno u otro proyecto, van a ser contraproducentes para quienes están argumentando.

Argumentar que es zona periglacial la mitad de la provincia de Buenos Aires, en todo Córdoba y todo la Patagonia... Tengo aquí muchos escritos, por ejemplo, a pedido de la gobernadora de Tierra del Fuego, que se analizó cuánto es la zona periglacial de Tierra del Fuego y se habla que eso representa una ínfima parte de la superficie total de la isla, probablemente menos del 1 por ciento. Estamos hablando de Tierra del Fuego, la zona más austral, estamos hablando del 1 por ciento. Villalba acá mismo dijo que hicieron estudios para Mendoza y que era el 1 por ciento de la cordillera.

Lo que estamos discutiendo no es la minería, que cuanto más moderna y cuanto más cuide las condiciones ambientales y las condiciones de los trabajadores —como se planteó aquí—, y cuanto más trabajadores y cuanto más riqueza, mejor, lo que estamos hablando es del 1 ó 1,5 por ciento de la cordillera. ¿Por qué la preocupación si, aparte como se señaló acá una y otra vez, no hay algún glaciar o alguna zona periglacial que esté intervenida actualmente?

Nosotros lo único que estamos queriendo hacer es defender las zonas glaciares y periglaciales. Y no es un tema de Buenos Aires. No me interesa la Comunidad Europea. ¿Córdoba, San Luis, Tucumán, Río Negro, Chubut, La Pampa, Mendoza, La Rioja son Buenos Aires? En sus legislaturas, los representantes del pueblo prohibieron la minería a cielo abierto. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no prohibió nada, porque no lo tiene...

— *La señora senadora Riofrío se manifiesta sin uso del micrófono.*

Sr. Filmus. — Estoy hablando de lo que hicieron estas jurisdicciones. Ahí sí uno podría hacer una discusión respecto de la minería a cielo abierto. Nosotros estamos discutiendo el tema de los glaciares.

Yo veo la ley de Chubut, que incluso trae otros elementos que no tiene la ley nacional respecto a las prohibiciones. Lo decidió Chubut, no alguien de Buenos Aires. Este Congreso ya votó seis veces prohibiciones; diputados y senadores de todas las provincias lo han votado respecto de este tema.

— *La señora senadora Riofrío se manifiesta sin uso del micrófono.*

Sr. Filmus. — Senadora: estoy hablando...

Sr. Presidente. — Por favor, el debate entre los senadores lo hacemos después. Me parece que tenemos que discutir con los invitados y hacer preguntas concretas. Cada uno vino a exponer y no estaremos convenciéndonos unos a otros acá. Lo que nos informaran servirá para que nosotros debatamos.

Sr. Filmus. — Yo pregunto en base a los argumentos.

Sr. Presidente. — Mañana se debate todo eso y se aclara. Me parece que el debate entre nosotros será muy largo, por lo que preferiría que nos ahorremos las preguntas obvias con las que no nos pondremos de acuerdo.

Sr. Filmus. — Vuelvo con la cuestión del artículo 2°, que me parece central. El proyecto es muy claro: es el suelo saturado en hielo que regula recursos hídricos. Lo que no regula recursos hídricos...

— *La señora senadora Riofrío se manifiesta sin uso del micrófono.*

Sr. Presidente. — Por favor, senadora. Déjelo que termine de hablar.

Sr. Filmus. — ¿Quiere hablar, senadora? Tome el micrófono (*El señor senador le entrega el micrófono a la señora senadora Riofrío.*).

Sra. Riofrío. — Aunque parezca una ironía, lo primero que quiero decir es que estamos defendiendo el proyecto del señor senador Filmus, que es el verdadero proyecto del consenso. Porque este Senado lo votó por unanimidad, no así la Cámara de Diputados. Se denomina “proyecto de consenso” al de Filmus y Bonasso, porque seguramente el nombre de este último da mayores ideas de cuidados y garantías. En realidad, no fue acompañado por el bloque del oficialismo. Por lo tanto, su proyecto del Senado, senador Filmus, es el proyecto del consenso. Y tuvo usted muchísimo mérito porque se logró con la votación de todos los que hoy estamos discutiendo.

De pronto, parece que venimos a aclarar que esta ley es de medioambiente y no de minería. Lo conozco personalmente y sé que lo hace desde la honestidad intelectual que lo caracteriza y que es su verdadera intención, pero no así la de otros, incluido usted, senador Filmus.

Sr. Presidente. — Querida amiga y senadora...

Sra. Riofrío. — Por favor, presidente. Quiero aclarar esto, porque estamos todos...

Sr. Presidente. — ... este debate no lo hagamos ante los invitados, sino después.

Sra. Riofrío. — ... discutiendo la precisión terminológica de un proyecto, que los que tenemos un proyecto económico en vías de desarrollo, tenemos derecho a tener. Precisión terminológica en la ley que nos garantice que no será un tema judicial cada día después del dictado de esta ley. Es eso simplemente lo que estamos pidiendo. No pedimos una ley más flexible o mayor área para explotar, como tampoco impunidad.

Aparte, estamos reiterando, no lo dicho por nosotros, sino por la autoridad máxima del Ianigla: a los efectos protectivos, los dos proyectos son iguales. Sobre la cuestión terminológica, él no pudo expresarse. Y acá también el glaciólogo Troncoso dijo que para hablar de glaciares, hay que saber.

Sr. Presidente. — Yo pediría que el debate entre los senadores lo dejemos pendiente para el momento adecuado. Terminemos con la lista de invitados, porque hay gente que está esperando. No debatamos tampoco con los invitados; hagamos preguntas.

Sr. Filmus. — Voy a dejar de lado lo que dijo la senadora recién, porque tampoco voy a entrar a explicar qué intereses hay detrás de cada uno cuando manifiesta su posición.

La señora senadora tiene la mejor buena voluntad...

— *Se realizan manifestaciones sin uso del micrófono.*

Sr. Presidente. — Senadores, les pido que colaboren a que terminemos el debate...

Sr. Filmus. — No hay ninguna insinuación de ningún tipo, senadora. Le pido disculpas si lo malinterpretó. Se ha votado por unanimidad. Y han votado los senadores y diputados de San Juan la ley original de Marta Maffei. Después, hemos vuelto con varios proyectos, que no

obstaculicen la minería y que defiendan los glaciares. Si he vuelto una y otra vez es para tratar de trabajar en esa dirección. Uno puede estar de acuerdo o no.

Cada esfuerzo, debate y discusión fue para tratar de acercarnos a un mejor proyecto. Usted puede pensar que el mío no es el mejor proyecto, pero no que hay alguna intención detrás. Por eso dije que no es una situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que fueron varias provincias cuyas legislaturas votaron en contra de la minería a cielo abierto.

— *La señora senadora Riofrío se manifiesta sin uso del micrófono.*

Sr. Filmus. — Senadora: ya la escuché y le di la palabra.

No tiene sentido alertar o colocar en extremos que alarmen diciendo que llegaremos a Misiones o a la provincia de Buenos Aires con el área periglacial, cuando la definición es que regula recursos hídricos y que estamos hablando de piedra saturada en hielo. Cuando esto está definido y, como dijo Villalba, complementado con el artículo 1º, ahí está el tema central. Y ésta me parece que es la cuestión fundamental.

Como lo ha dicho recién el señor senador Martínez, no tiene sentido hablar de una usina o de una obra, porque es al revés. Uno puede leer la ley de San Juan y por algo hay partes que han sido quitadas en el proyecto del Senado porque se consideraban que daban lugar todavía a mayor discusión que lo que decía el proyecto de Diputados, como era el tema de los cauces de agua y de la piedra.

Quiero terminar con una reflexión. No siempre la minería significó riqueza y crecimiento de los países. Podría decir lo que decía el general Perón o lo que dice Evo Morales respecto a los mecanismos que tuvo la minería, no sólo desde la colonización en adelante, para esquilar y explotar a nuestros pueblos, llevándose la riqueza fuera del país.

No estamos discutiendo la historia de la minería, sino cómo en la Argentina pueden ser complementarias las explotaciones mineras con el cuidado del medioambiente. Si, efectivamente, esto es así, esta discusión, sea cual fuere la resolución que tome el Senado estos días, llegará a buen término. De lo contrario, no lo sancionaremos hoy y mañana vendrá por las leyes que se aplicaron en los '90, pasado mañana por la de cielo abierto, etcétera; es decir, será un tema permanente, porque está en la conciencia de la gente.

Insisto en que hace tres meses las Naciones Unidas declararon al agua como un derecho humano. Estamos hablando del 1 o 1,5 por ciento de la cordillera.

— *Varios oradores hablan a la vez y fuera del micrófono.*

Sr. Filmus. — Ajustemos ahí porque ni el alarmismo de un lado ni del otro nos va a llevar a poder tener una buena ley que regule la minería y que al mismo tiempo defienda el medio ambiente.

Sr. Gioja. — Sigo insistiendo en que la diferencia entre los dos proyectos está en la terminología técnica. Lo que es periglacial y no es periglacial.

Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.

Sr. Cimadevilla. — Si alguna conclusión podemos sacar es que aquí todos estamos de acuerdo en cuidar el medio ambiente. Lo que es cierto es que no todos tenemos la misma concepción de hasta dónde deben llegar esos cuidados del medio ambiente. Y si bien esta es una Ley de Glaciares, ciertamente la discusión más caliente estuvo sobre el desarrollo o no de la minería y de la actividad hidrocarburífera.

Quiero aprovechar la visita de los representantes de las cámaras y asociaciones de trabajadores que nos dijeron que miráramos alrededor. Yo miro alrededor de mi provincia. De mi provincia se han sacado, desde que se empezó a sacar petróleo hasta ahora, más de 140 mil

millones de dólares en petróleo, yo los invito a que miren alrededor en mi provincia y vean la pobreza estructural que hay allí.

En mi provincia la regalía minera en boca de mina es del 2 por ciento. Cualquier exportación minera por puertos patagónicos que tenga reintegro va a ser de más del 2 por ciento. No sólo no nos van a pagar, si no que están pretendiendo que les paguemos. Quiero que sepan, señores, que por lo menos algunos de nosotros estamos dispuestos a rediscutir la ecuación económica de la minería. Y ojalá que cuando la discutamos estén dispuestos a entender que la riqueza es de los argentinos y no de grupos concentrados económicamente. No pretendemos que pierdan plata, no somos antiminereros, pero sí creemos que no hay equidad en la distribución de la rentabilidad. Y esa es la discusión que estamos dispuestos a dar.

Sr. Presidente. – Sigo insistiendo en que dejemos los discursos para el pleno.

Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. – Muchas gracias.

Quiero agradecer a los representantes de las cámaras mineras, de hidrocarburos y a los representantes de los trabajadores mineros por estar aquí.

Como se hizo referencia a algunas de las cosas que yo pregunté quiero señalar que soy bisnieta, nieta e hija de industriales mineros y petroleros; esa es la historia de mi familia.

Bolivia, es un país riquísimo en minería y en petróleo y unos de los países más pobres del planeta, por eso no siempre el modelo de extracción y producción minera y petrolífera generan riquezas; muchas veces genera pobreza y devastación.

No estamos discutiendo si glaciares sí e industria petrolera y minera no, sino qué modelo de desarrollo queremos para el país. Tiene que ser un modelo de desarrollo a mi entender y eso es lo que estamos discutiendo en el tiempo, que preserve nuestros recursos ambientales, que garantice el derecho al agua en esas zonas que no tienen los 25 millones de litros de agua por año que se dijo por ahí, sino las zonas más áridas del país y donde hoy, los emprendimientos mineros consume más de lo que consumen los habitantes y las otras industrias juntas. Entonces, queremos un desarrollo equilibrado. No estamos hablando de minería, petróleo y gas, no. No nos pongan en ese lugar.

Teniendo en cuenta el área periglacial que nosotros entendemos que es sólo el 1 por ciento del territorio nacional y, sobre todo, la Cordillera de Los Andes. ¿Qué emprendimientos mineros en ejecución tendrían que suspenderse si se aprobara el proyecto que tiene sanción de Diputados y si nos pueden explicar por qué?

Sr. Benítez. – Coincido con la señora senadora en que la minería, como cualquier actividad productiva, debe ser sustentable.

En el segundo tema, cuando hablamos del área periglacial, tomamos la tesis del IANIGLA que, con un cuadro que hemos exhibido, llega –interpretando la letra fría de la ley– al sector que nosotros hemos elaborado que es bastante amplio y que llega a cubrir la mayor parte de la Patagonia, si leemos exactamente lo que dice el artículo de Diputados.

Aún pensando que hay otras posiciones, usted puede ver la confusión que conceptualmente genera el proyecto de Diputados. La ley tiene que ser muy clara porque cuanto más clara es menos conflictos tenemos y más cuando estamos hablando de una actividad económica en ciernes, que está comenzando a expresarse y que, seguramente, se seguirá hablando. He escuchado lo que usted decía y lo que decían otros colegas suyos me parece que es bueno que hablemos de minería. Lo que me parece es que nosotros también coincidimos en el cuidado del agua. La definición impide una certeza sobre las áreas y esto,

como dicen los científicos, va a generar conflictos desde el punto de vista legal y eso sí va a perjudicar muchos más de los proyectos que hoy tenemos en línea.

Esto es por lo que yo planteaba que necesitamos una política de Estado, porque la minería es de todos, cruza a todos los sectores de la sociedad porque los impuestos que paga la minería también tienen que ver con lo que sufraga a toda la nación. Me parece que es un tema de todos y no solamente de nosotros los mineros.

Mire: si nosotros tomamos lo del área periglacial podría caer Río Turbio o cualquiera. Por eso es que lo tenemos que definir con precisión para dar tranquilidad.

Sr. Presidente. – Por favor, no dialoguen.

Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. – Todos estamos discutiendo a partir de que hay un consenso generalizado de defender el medio ambiente y los glaciares, como decía el senador por Chubut. Y estamos diferenciándonos en una cuestión técnica. La cuestión técnica se aclara con una sola palabra, reconocida por todos los técnicos que vinieron a esta mesa y es darle el carácter de hielos permanentes a los glaciares que ya lo tienen. De suyo los glaciares y periglaciares son permanentes. En Diputados le sacaron la palabra “permanente”, que la tenía desde el Senado. Eso genera interpretaciones que van en dirección a la discusión que se plantea acá. Creo que tenemos que ser conscientes de que estas definiciones que ponemos en la ley son analizadas en eventuales recursos judiciales que plantean medidas de no innovar que no terminan nunca y van a ser factor de interferencias permanentes en las actividades, fundamentalmente, las de exploración.

Por eso, yo pido precisión. Donde dice suelo congelado, agregar la palabra “permanente”. Entonces, terminamos con interpretaciones que no son las correctas.

Asimismo, coincido con la historia de la minería en que tiene muy mala imagen. Esto es real y cierto. Potosí no es ejemplo de desarrollo ni mucho menos, pero nosotros planteamos la necesidad de una nueva minería, es decir, que sea sustentable con el medio ambiente, que sea factor de desarrollo. Por lo tanto, que no sirva para que cuatro o cinco se lleven la riqueza, sino que sea de alguna manera un modo de hacer crecer a sectores que no tienen en la Argentina otro tipo de posibilidades que utilizar ese recurso para mejorar su calidad de vida.

La minería es generadora de sociedades industriales. Entonces, muchas sociedades conservadoras de distintas regiones la ven como una usurpadora que altera los mecanismos y se niegan a aceptar que haya transformaciones, porque ellos —los sectores conservadores— son los que manejan los resortes de ese tipo de sociedades. En Mendoza, los que plantean la prohibición de la minería es el partido Demócrata, los conservadores, que no quieren que le usen el agua, que mejoren los salarios para los mendocinos, y no dicen que le van a quitar la herramienta, sino que la minería contamina.

Yo también creo —porque lo dijo recién el senador— que hay que replantearse muchas cosas. Una cosa es minería y medio ambiente, y le doy la razón al medio ambiente. Ninguna actividad productiva puede afectarlo, ni la minería, ni el turismo, ni el petróleo. Esto está absolutamente claro. Hay que discutir minería y renta minera. Hay que replantearla, porque hicimos una promoción que tenía que ver con la falta de desarrollo minero en la Argentina, y, entonces, esa promoción ha dado sus frutos, una experiencia para plantear ahora un análisis inteligente de todo lo que significa el recurso minero.

En el Senado de la Nación, hay un proyecto en la Comisión de Minería modificando el esquema de regalía, haciéndolos móviles que tengan que ver con una visión mucho más clara de cuánto genera la minería y cuánto hay que distribuir.

Por otra parte, la minería y los modos en que tenemos que desarrollarla, pero separándolo. Entonces, tenemos que tener claridad en este tipo de cosas. Hay que ser precisos, porque si no hacemos el juego a los que decimos que criticamos. Todo este mecanismo de prohibiciones, discusiones, inseguridades, vistos por los inversores internacionales, generan una negativa de asentarse en la Argentina. ¿Saben a quién benefician? A la única empresa que está asentada, desarrollada y que tiene derecho adquirido, la Barrick.

Entonces, todo este esquema de los que critican y ponen objeciones son funcionales a los intereses de esa empresa, a la cual algunos irresponsablemente tratan de vincular con la actividad de los senadores. Por eso, seamos precisos y clarifiquemos las cosas. No le hagamos el juego a nadie. Aquí no hay intereses distintos, por lo menos en mi caso, a los de mi provincia que están identificados con un proyecto nacional y con los intereses del país.

Por consiguiente, admito que haya otra consideración de otro tipo, pero básicamente centrémonos en precisar y aclarar, desde el punto de vista jurídico, que las provincias son las dueñas de los recursos. Clarifiquemos el sistema del Ianigla, porque aquí hemos hablado mucho. Es una organización creada por un convenio...

Sr. Presidente. — Senador, por favor.

Sr. Gioja. — Es que tiene que ver con esto.

Sr. Presidente. — Ya sé, pero estamos haciendo el discurso para el pleno.

Sr. Gioja. — Es cierto, señor presidente.

Ianigla es una organización creada por Mendoza, San Juan, el Conicet y la Universidad de Cuyo, y se puede cambiar. El día de mañana se levanta el gobernador de Mendoza, porque considera que no es necesario, renuncia al Ianigla, y no existe más. Y estamos montando toda la estructura en función del Ianigla para darle una tarea, que tiene a lo mejor técnicamente responsabilidades.

Por eso, hay que repensar, replantearse y mirar en profundidad un análisis de desarrollos técnicos, administrativos y jurídicos.

Sr. Presidente. — Si me permiten, con la anuencia de los senadores, daría por terminado el debate sobre este tema, y le doy la palabra al señor Adolfo Esquivel.

Sr. Pérez Esquivel. — Buenas tardes.

Agradezco la invitación. Vengo en representación del Servicio Paz y Justicia en América Latina, pero también de muchas organizaciones sociales que venimos trabajando por los Derechos Humanos. En primer lugar, el agua es un derecho humano, y si se viola, se está violando el derecho del pueblo. Esto es fundamental.

En segundo lugar, venimos trabajando desde hace muchísimos años sobre los problemas ambientales y nos preocupa no solo en la Argentina, sino en el mundo. Además, quiero señalar que soy el presidente de la Academia de Ciencias del Ambiente de Venecia, donde venimos impulsando también el Tribunal Penal Internacional sobre el Ambiente.

Creo que de lo que se señaló hay algunos ejes que hay que retomar. Primero se habló mucho de desarrollo, porque muchas veces se confunde con explotación, y no lo es. La senadora lo señaló en un momento: desarrollo es reestablecer el equilibrio.

Con el problema del agua, hay muchísima preocupación. No solo con el problema de la minería, sino también con la industria sojera, con los monocultivos, con la destrucción del medio ambiente. Esto se hace con total y absoluta impunidad. Lamentablemente, esto lo vemos en todo el país, provocando gravísimos daños a la vida del pueblo.

Ustedes saben que la contaminación es acumulativa en el tiempo. Nosotros hemos contribuido con la cuestión de Botnia en un estudio, con la Academia de Ciencias de Venecia

y la Universidad de La Sapienza de Roma, que hemos entregado al gobierno para que lo sume a la presentación de la Corte en La Haya. Señalo esto porque no hay hechos aislados en el país. La minería y la gran minería lógicamente que contaminan, y esto los industriales que estaban aquí —algunos se fueron— lo tienen que reconocer.

Por otra parte, con el uso del agua, donde a los pobladores les cobran multas si usan el agua fuera de horario, a las empresas mineras no les cobran nada, y pueden usar miles de millones de litros de agua con total libertad. Es esto lo que está pasando, y esto lo comprobamos en muchas provincias. Ustedes habrán leído también que enviamos una carta a todos los rectores de las universidades sobre la empresa Minera Alumbra, cuyo vicepresidente sí que está procesado.

Entonces, por más que le demos vueltas aquí, espero que se apruebe una ley de los glaciares porque eso protege la vida del pueblo argentino. Hoy se privilegia mucho el capital financiero sobre la vida del pueblo. Y aquí no vi tratar ese tema, no sé si lo van a tratar en los debates, pero si el pueblo no es escuchado en sus reclamos quiere decir muy claramente que algo no funciona, que se están privilegiando los intereses financieros sobre la vida del pueblo. Y las consecuencias —y hay estudios sobre esto— lógicamente impactan a la vida del pueblo.

Tengo que volver a insistir, la contaminación es acumulativa. No estoy en contra de la minería, estoy a favor de una minería responsable, que logre un equilibrio y la necesidad del pueblo. Estando en la provincia de San Juan, cuando nos reunimos con la UAD a hablar con los pequeños y medianos productores, ellos mismos decían que no pueden seguir cultivando y que están con muchísimas dificultades por el problema del agua y por la contaminación ambiental. Estos son los hechos que hay que investigar, que hay que ver, que hay que profundizar, pero fundamentalmente hay que escuchar a los sectores del pueblo. Lo que están haciendo es represión y no es escucharlos; lo mismo pasa en La Rioja.

Quiero decir algo más y lo digo profundamente como ciudadano. Me preocupa muchísimo que los gobernadores digan: “Porque los glaciares son nuestros”. Los glaciares no son de las provincias, son del pueblo argentino, señores. No confundamos esto. Dicen: “Son de los señores gobernadores”, y no son de los señores gobernadores y tienen el derecho de respetar al pueblo argentino. No son los dueños de las provincias, son los servidores del pueblo argentino, eso es lo que deben ser. Y esto lo tengo que decir porque me indignó, realmente me indignó que los señores gobernadores digan: “Porque los glaciares son nuestros”. No son de ellos. Respeten al pueblo argentino. No es posible actuar de esta forma que es denigrante realmente para el pueblo. Yo me sentí muy ofendido como se han sentido sumamente ofendido muchísimos sectores del pueblo argentino. Si no, aquí estamos en feudos y no estamos en un Estado de una Nación. Esta es la diferencia.

Entonces, la ley de minería debe ser al servicio del pueblo. Se debe respetar el agua para el pueblo argentino. No podemos llegar a esta situación en la que únicamente la situación es economicista. Vuelvo a insistir, Naciones Unidas viene reclamando y viene señalando que el agua es un derecho humano. Cuando uno ve la devastación enorme que se está haciendo en el país —con esto quiero terminar—, me pregunto permanentemente ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos?

Yo conozco África, Asia, he recorrido el mundo por todos lados y pude ver cómo lo han devastado. El senador por Chubut, no recuerdo su nombre —perdónenme pero a muchos de ustedes no los conozco personalmente— hablaba acerca de cómo se ha incrementado la pobreza, la miseria, la marginalidad. ¿Cuánto se llevan las empresas mineras de todo esto? ¿Cuáles son los recursos que se llevan? ¿Qué dejan al país? Dejan el hambre, la miseria y la

despoblación. Basta con mirar alrededor para saber cómo están aumentando las villas miserias y la marginalidad.

Entonces, es esto lo que tenemos que decir, no tengo más que agregar. Seguiremos en esta lucha porque esta es la lucha de nuestro pueblo. Gracias por escucharme. (*Aplausos*).

Sr. Presidente. — El senador Castillo, que está en camino, nos pidió que autorizáramos la participación de Eddy Lavandaio, vicepresidente de la Asociación Geológica de Mendoza. Depende de ustedes.

— *Murmullos en el salón.*

Sr. Pérez Alsina. — Teniendo en cuenta los tiempos, quería informarle, quizás ya sabe, que en Labor Parlamentaria acordaron tratar este tema mañana.

Sr. Presidente. — Por eso les estoy preguntando.

Hoy incorporamos algunos invitados a pedido de senadores, por lo tanto, me parece discriminatorio dejar hablar a algunos y a otros no. Entonces, me parece que sería justo que a continuación hiciera uso de la palabra el señor Eddy Lavandaio.

Sr. Lavandaio. — Buenas tardes. Voy a expresarles un pequeño mensaje de la Asociación Geológica de Mendoza. No vengo a traer un mensaje científico, la Asociación Geológica de Mendoza es una asociación que calificaría de cuasi gremial. Es una institución cuyos fines están directamente relacionados con el ejercicio de la profesión, su defensa y su jerarquización. Tenemos socios de muy distintas especialidades de la Geología en nuestro seno.

Vale agregar dos cosas. En primer lugar, la carrera de Geología fue declarada de interés público por resolución 1412 de 2008 por el Ministerio de Educación de la Nación. En segundo lugar, los glaciares forman parte integrante de las incumbencias específicas de la profesión del geólogo.

En el año 2008 tomamos conocimiento de que se había sancionado y que se había vetado —en realidad tomamos conocimiento de las dos cosas a la vez, a través de los medios— una ley de protección de glaciares. A partir de ese momento, publicamos varios artículos en diarios y revistas, explicando nuestra opinión profesional sobre el tema contraria a las prohibiciones que perjudican o impiden el trabajo de nuestros colegas dedicados a la prospección y exploración de minerales e hidrocarburos.

Para ser sincero, la sola lectura del texto que se había vetado nos hizo suponer que la intención de la ley era establecer prohibiciones para impedir trabajos mineros en la cordillera; esto no lo voy a ocultar y esto no fue una interpretación caprichosa. Como dice un viejo refrán: “El que se quema con leche, ve una vaca y llora”. Y nosotros en Mendoza ya veníamos soportando la sanción de varias leyes, tres leyes provinciales concretamente, que con enunciados ecologistas fueron hechas a medida para impedir ciertos y determinados proyectos mineros, leyes que dejaron sin trabajo a varios de nuestros colegas. Esto para nosotros es grave porque si bien sabemos que los profesionales son pocos, sabemos también que encabezan grupos de trabajo de diez, veinte, treinta personas que también e quedan sin trabajo y esto fue lo que ocurrió.

Por eso, cuando leímos la primera ley de glaciares, vimos de nuevo la vaca, como dije recién. De nuevo las prohibiciones para dejar sin trabajo a nuestros colegas mineros y petroleros. Esto es curioso porque en la Argentina se han hecho mapas, estudios y relevamientos de muchos tipos de recursos sin que haya sido necesario prohibir absolutamente nada.

Entre otras cosas, aquí tengo el mapa de las aguas subterráneas de Mendoza, que

también son los recursos hídricos subterráneos de la provincia, que también se hicieron sin ningún tipo de prohibición.

Con respecto al tema de los glaciares, quiero aclarar que estas presunciones, mal o buen pensamiento que tienen alguno de nuestros socios con respecto a la intención, creo que después de ver algunos diálogos, tanto hoy como el martes pasado, creo que son bien fundados.

Hasta ahora ha quedado suficientemente claro que hay tres tipos de cuerpos que contienen hielo en cantidades significativas: glaciares descubiertos, glaciares cubiertos y glaciares de escombros o de roca dentro del ambiente periglacial. Nadie duda que esos cuerpos tienen hielo —unos más, unos menos— en cantidades suficientemente significativas para considerarlos, según el caso, como recursos o reservas hídricas. Además, tienen límites perfectamente identificables —esto no es un dato menor—, porque cuando se establecen prohibiciones en los mapas del catastro de cada provincia, hay que ponerles límites precisos.

En el caso de Mendoza, estos glaciares han sido mapeados por expertos del Ianigla en casi un 50 por ciento de la superficie cordillerana. Haciendo una transpolación a toda la zona que falta, esos cuerpos representarían un 1,4 por ciento de la superficie total de la provincia.

Aquí quiero hacer una aclaración con respecto a lo que decía el señor senador Filmus, cuando dijo que “Villalba dijo que el 1 por ciento correspondía al área a proteger”. El 1 por ciento es para los glaciares y no para el ambiente periglacial.

Lógicamente, desde la Asociación Geológica de Mendoza apoyamos la idea de que se haga un relevamiento actualizado de esos glaciares en la totalidad de la provincia. Todos esos glaciares son cuerpos que están apoyados en sus valles, pero están en movimiento, deformándose lenta y continuamente. Por esta razón, los glaciares también son lugares muy peligrosos. Y esto también debe tenerse en cuenta para no permitir actividades encima de estos.

Ahora quiero salirme de los límites de los glaciares, porque el texto de la ley que se vetó en 2008 y el que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados hace *tabla rasa* con los conceptos y van más allá de los glaciares, incluyendo términos como “ambiente periglacial” y “suelos congelados”.

La extensión del ambiente periglacial ya fue puesta de manifiesto en la reunión del martes pasado y también en la de hoy, donde se mostró el mapa del libro del doctor Arturo Corte, publicado por el Ianigla unos cuantos años atrás. Abarca todas las zonas montañosas, la Patagonia y algo más.

Con respecto a la extensión del área con suelos congelados, les quiero mostrar el mapa de otro trabajo publicado por el Ianigla, cuyo autor es el doctor Darío Trombott. Creo que en una charla anterior se ha mostrado antes. Ahí podemos ver que el área con suelos congelados en forma permanente abarca la totalidad de la Cordillera. Y si la extendemos a zonas de congelamiento estacional, nos vamos a otra parte importante del país. Realmente, abarca una parte muy grande del país. Quiero decir, entonces, que estos términos de “ambiente periglacial” y “suelos congelados” no son algo indefinido, sino definido y muy grandes y extensos.

Por eso, en varias notas periodísticas hicimos notar que, de aprobarse una norma como la sancionada en la Cámara de Diputados, desde la mina Río Turbio, en el extremo sur de Santa Cruz, hasta la mina Aguilar, en Jujuy, todos los establecimientos mineros situados en la Cordillera deberían cerrarse. No hace falta que les aclare que, con eso, quedarían miles de mineros argentinos sin trabajo.

El texto aprobado en la Cámara de Diputados considera que los glaciares, el ambiente periglacial y los suelos congelados, son todas reservas estratégicas de recursos hídricos y que son los proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Así lo dice el proyecto. Esto no es así. De acuerdo a los datos del Departamento General de Irrigación de Mendoza, que es un organismo autónomo considerado modelo en el país, administrador del agua de la provincia de Mendoza. Este organismo todos los años hace el pronóstico para la temporada de riego y considera que el 85 por ciento del agua para la recarga de las cuencas hidrográficas es aportado por la fusión de las nieves y el 15 por ciento proviene de la ablación de los glaciares.

Fíjense que los únicos recursos que se mencionan son las precipitaciones y los glaciares. Es decir que para el organismo técnico encargado del agua de Mendoza solamente existen esas dos fuentes para las recargas de los ríos. Y hay que tener en cuenta que la definición de “suelo congelado” se hace de acuerdo a la temperatura, sin importar que tenga o no agua en su seno. Un suelo sin agua, a menos de cero grados, es un suelo congelado.

Conviene agregar que la mayoría de las rocas de las montañas cordilleranas no tienen la permeabilidad de los sedimentos de las llanuras y de otros terrenos. De modo que las posibilidades de que estos contengan algún porcentaje significativo de agua o de hielo son muy escasas. Por eso, comúnmente vemos que el agua de los arroyos que baja de las montañas desaparece cuando llegan a la llanura. Esto es, justamente, debido a las diferencias de permeabilidad que tienen los suelos de llanura con las rocas que tienen las montañas, que tienen muy poca capacidad para contener agua en su seno, sea en forma líquida o de hielo.

Por lo tanto, consideramos que las definiciones del texto modificado y sancionado en la Cámara de Diputados exceden y contradicen a la que utilizan los organismos técnicos idóneos en la materia para considerar a los recursos hídricos. En cambio, y a pesar que no estamos de acuerdo con las innecesarias prohibiciones, apoyamos el texto original aprobado en el Senado, que solamente incluye como objetos a proteger a los glaciares descubiertos y cubiertos, y a los glaciares de Roca del ambiente periglacial.

Sr. Presidente. — De esta manera, hemos culminado con la lista de expositores. Agradecemos a los expositores de hoy y de las jornadas anteriores, a las organizaciones y cámaras que estuvieron presentes, a los señores senadores y miembros de la Comisión. Ahora pediremos que se queden solamente los senadores con los asesores que autoriza cada senador y debatiremos los dictámenes que podamos emitir.

Tiene la palabra el señor senador Castillo.

Sr. Castillo. — ¿Cómo podemos hacer para que el material lo podamos leer antes de mañana?

Sr. Presidente. — Ya fueron entregados a la Secretaría para que hagan copias y repartan.

Pido a los señores presentes, y les agradecería que así lo hicieran, si se pueden retirar, así los senadores empezamos a debatir. Pueden permanecer en la reunión solamente los asesores de los senadores autorizados por los mismos.

— *Son las 15 y 56.*

— *Luego de unos instantes, continúa la reunión de los señores senadores en el salón Eva Perón, sin servicio de audio.*

— *Una vez restablecido el servicio de audio, siendo las 16 y 44:*

Sr. Filmus. — Por supuesto que voy a firmar la propuesta de las modificaciones hechas en Diputados. Pero voy a atender a lo que decía el senador Gioja.

En mi opinión, nosotros podemos colocar artículos enteros, uno u otro. En cuanto a aceptar reformas, yo, en particular... Yo hablaba con algunos senadores y varios

gobernadores me lo han planteado. Porque, en realidad, las firmas de los gobernadores fueron respecto de la importancia de la minería, con lo que acordamos todos. Después, algunos en particular opinaron sobre esto. La mayor parte de los gobernadores no han opinado sobre este tema o hemos tenido opiniones para uno y otro lado.

— *El señor senador Gioja realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

Sr. Filmus. — Yo creo que es inaplicable el artículo 17 del proyecto de Diputados. Dice: “En las áreas potencialmente protegidas por la presente ley, no se autorizará la realización de nuevas actividades”. Al respecto, no sabemos dónde son las áreas potencialmente protegidas y, a su vez, no dice a qué nuevas actividades se refiere. Con lo cual, me parece no podemos modificar nosotros este artículo 17, pero sí podemos no votarlo. Cuando habla de nuevas actividades, no sabemos si se refiere a las posibilidades que están planteadas en el artículo 6° o a otras actividades.

Entonces, desde esta perspectiva... Insisto, varios senadores, incluso de los que están acá, me lo han planteado. Es mi opinión y también me lo ha dicho, por ejemplo, la gobernadora de Tierra del Fuego, y algunos más. Realmente, yo no estoy de acuerdo con esa reforma, porque paraliza todo. Igual, todas las actividades, nuevas o viejas, están reguladas por el artículo 15.

— *El señor senador Gioja realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

Sr. Filmus. — Pero el artículo 15, en ese sentido, me parece que es muy claro, porque estos 60 días que da para la presentación, para las viejas o para las nuevas... Porque no dice en qué etapa del proceso estamos.

Creo que esto también ayuda bastante a que podamos tener alguna posibilidad de definición.

Sra. Morandini. — ¿Estamos hablando de la media sanción de Diputados? ¿De los plazos?

Sr. Filmus. — Sí. La de Diputados dice: “En un plazo máximo de 60 días a partir de la sanción de la presente ley, el IANIGLA presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6°, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá realizar el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de 180 días.”.

Sra. Morandini. — En cambio, en el del Senado, es después de que se haga el inventario.

Sr. Filmus. — *(Leyendo)* “Al efecto, las autoridades competentes deberán proveerle toda la información pertinente que el citado Instituto le requiera.

”Las autoridades competentes deberán, en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de la jurisdicción provincial, someter a las actividades mencionadas, a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales generados...”

Por eso, no está diciendo en qué nivel. Puede ser un proyecto. El artículo 15 lo abarca. Pero está claro en el artículo 15 que está hablando de las actividades descriptas en el artículo 6°. El 17 no lo menciona de ninguna manera, entonces no sabemos qué tipo de actividad es la que está imposibilitando. Creo que eso también es un aporte para tratar de avanzar con el proyecto.

Remarco el tema del federalismo y de la prohibición y de quiénes son... eso está todo en la Constitución y en los dos proyectos por igual. Insisto en la lectura detenida del artículo

6°, en los dos proyectos, porque eso nos va a ilustrar la naturaleza de las dos leyes.

En síntesis, mi firma sería para el proyecto de Diputados, si hay acuerdo. Si no, yo firmaría en disidencia parcial, respecto de este artículo 17, que me parece que entorpece el desarrollo y el crecimiento.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Estamos de acuerdo en que el 17 es inaplicable. Y estamos de acuerdo en que la diferencia en las definiciones —en esto parezco obsesivo— está en que el proyecto de Senadores define a los glaciares de escombros asociados con suelos permanentemente congelados; y el de Diputados dice suelos congelados, que actúan como reguladores de cursos hídricos también.

Cuando vino el doctor Villalba —dijo que los dos proyectos eran exactamente iguales—, definió a los periglaciares como hielos permanentes. Todos los técnicos dicen que si es glaciar o periglacial, obviamente, son hielos congelados. Trombotti, el señor que citan todos y que parece el padre de la glaciología, en un artículo que salió el domingo pasado en el diario *Los Andes* de Mendoza vuelve a ratificar el concepto de suelos congelados permanentemente.

Cuando le pregunté —estaba hablando Villalba en la sesión anterior—, hay un solo tema que plantea una sola diferencia, el proyecto original del Senado habla de suelos permanentemente congelados. En cambio, el proyecto que viene de Diputados no habla de permanentes en ningún lado, con lo cual cualquier suelo congelado puede ser interpretado como parte del sistema de glaciares. El señor Villalba me dijo: “Estoy de acuerdo con usted”. La diferencia fundamental está en el artículo 1°. Un suelo que se congela de forma temporaria no es importante, desde el punto de vista de la reserva hidrológica, con lo que no hay que protegerlo, es decir, que hay que proteger a los que son permanentes, dice Villalba.

Entonces, acercándome a las posiciones que dice Daniel Filmus, sugiero la eliminación del artículo 17 por ser inaplicable y la aceptación del artículo 2°, que dice exactamente lo mismo del proyecto del Senado, pero que marca la diferencia de permanente, con lo cual le quitamos muchísima litigiosidad a este tema. Clarificamos, no alteramos el sentido de glaciar y periglacial, y lo precisamos expresamente. Entonces, vamos de alguna manera limitando.

Otra cosa en la que estamos de acuerdo todos es que el Ianigla por sí solo no puede prescindir de la información que tienen las provincias en relación al eventual inventario de glaciares. Lo tiene la provincia de San Juan, Mendoza y Neuquén. Todas han empezado a hacer su inventario de glaciares.

Entonces, el artículo 5° nuestro dice que el Ianigla va a hacer los glaciares, pero va a coordinar con otras entidades provinciales —con la autoridad competente dice— y con otras entidades —entiéndase universidades, centros técnicos— la elaboración definitiva de glaciar. Por lo tanto, en orden a esta idea de integrar, plantearía que se acepte el 2° de senadores, el 5° de senadores, y se elimine el 17; el resto son cosas más o menos parecidas.

Sr. Filmus. — Una aclaración, ya que se repitió varias veces.

Quien hizo la definición —porque en ese momento habló conmigo— fue Villalba, en Diputados, quien fue muy claro cuando puso que se regula recursos hídricos. Como se discutía si había periglacial o no, se puso una redacción relativamente similar con la palabra periglacial.

Aclaro una cuestión más. Hay que leer el artículo 2° cuando habla de glaciares de escombros, porque la parte de arriba de los glaciares de escombros no son suelos

permanentemente congelados. Entonces, dice: “Glaciares de escombros son aquellos cuerpos de detrito congelado y hielo, cuyo origen —porque los glaciares de escombros están vinculados al glaciar— está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado”. Vuelvo a decir, no estamos hablando de un suelo que está permanentemente congelado.

Por lo tanto, “Su origen está asociado con suelos permanentemente congelados y con hielo subterráneo, o —es decir, podría ser no permanentemente— con hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos”. Está hablando del origen, no que es un suelo permanentemente congelado, porque nos han dicho muchas veces y nos han mostrado las fotos, y hoy vino uno de los mineros, y mostró fotos marrones, donde no hay hielo permanentemente congelado. Esto es un glaciar de escombros.

El otro día cuando *Telenoche* hizo una investigación en un lugar que era periglacial, mostró que era marrón. No había suelo permanentemente congelado arriba, había suelo abajo. Esta definición la hizo el Ianigla. No estamos hablando de suelo permanentemente congelado en ninguno de los dos, porque acá está hablando del origen.

Voy a decir una cuestión más que la dije recién, porque si no, no se entiende por qué el artículo 6° de Diputados es mucho más flexible en todas las otras actividades respecto a la industria, obras públicas, etcétera, ya que lo enfoca de otra manera. Por ejemplo, en el artículo 2°, yo creo que se equivocan cuando están haciendo una cuestión política de esto —entre comillas— partidaria a favor de una u otro, porque en el artículo 2° del Senado dice: “Son parte constituyente del ambiente glacial y periglacial protegido —es decir, que no se puede hacer nada—, además del hielo —lo que muestra aparte que no es solo permanente—, el material detrítico rocoso —sin hielo— y los cursos internos y superficiales de agua”. Cuando uno va a ver el de Diputados, es mucho más pulido y trabajado; cuando se llegó a este punto, se quedó con que esto solo queda para glaciar y no para periglacial, porque lo peligroso era cuando uno dice los cursos internos y superficiales de agua, ahí sí no saben dónde termina.

Voy a poner un ejemplo que no va a permitir equivocarme, que es la Ley de San Juan, que cuando llega a este punto copia textualmente todo lo otro, pero cuando llega al caso de glacial o periglacial, saca: “Además del hielo, el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua”. Entonces, esto es así. No estamos hablando de suelos permanentemente congelados en ninguno de los dos. Lo que habla es el origen en uno, y el otro le agrega —y esto va a ser un problema— también al periglacial, “el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua”.

Dejo en claro esto porque el 2° está vinculado con el 6°, y como en el 6° se liberaron un conjunto de actividades para atender a esta nueva situación del 2°, entonces, en mi modesta opinión, no hay posibilidades de modificar. Yo tuve la iniciativa de quitar el 17, que me parece que entorpece el desarrollo, porque es imposible determinar las actividades, cuáles son las zonas potencialmente y esperar al Ianigla, con lo cual paralizaría cualquier tipo de emprendimiento, y está contemplado claramente en el 15.

En este caso, insisto con el 2°. Creo que son dos posiciones que tendrán matices.

Sr. Martínez (A.A.). – Lo que he fundamentado lo voy a repetir. No estamos hablando de minería. Partamos de esa base. No estamos hablando de minería en esta discusión.

Los que tenemos el espíritu de proteger un bien como es la reserva estratégica de agua. Tan sencillo y claro como eso.

Sería mucho más cómodo decir voto la del Senado así mi gobernador, los diarios, las radios dejan de putearme un rato. Pero es una cosa aparte.

Lo repito porque una de las cosas que me llevaron a inclinarme más, aunque en su momento voté la ley del Senado convencido de hacerlo, cuando terminamos de votar la esa ley recuerdo haber regresado a mi provincia y empezado a ver un tipo de emprendimientos como el de la Ruta 41 –le han puesto ese nombre porque es paralela a la 40 pero más hacia la cordillera y se vería automáticamente imposibilitada de llevarse adelante porque en el Artículo 6 del Senado se prohibían obras de arquitectura e ingeniería en las zonas periglaciares, esto está taxativo. Cosa que no prohíbe la ley que luego viene de Diputados. Independientemente de que cualquier obra en esa zona va a tener un estudio de impacto ambiental. Recuerdo, incluso que gente de San Juan habían planteado el tema del túnel y Mendoza también había planteado cuestiones de ese calibre.

Estuve en Mendoza y tuve la oportunidad, convocados en un debate que había, generado por el Colegio de Abogados, casualmente tenía que ver con el tema ambiental del que participó el señor Carmona que participó de algunas reuniones aquí y es la voz oficial de Mendoza.

En esa oportunidad me quedó muy claro lo que se define primero que los glaciares constituyen bienes de carácter fáctico, incluso un constitucionalista que estaba ahí hacía referencia a que esto no tiene ningún tipo de discusión con respecto a que los recursos naturales corresponden a las provincias. Después de la reforma del 94 y la aplicación de algunos artículos del Código Civil que no recuerdo. Pero se garantiza con total claridad esto. Y después, siempre se habla de que...

– El señor senador Gioja hace uso de la palabra fuera del micrófono.

Sr. Gioja. – ...reconoció expresamente la reunión en la que tuvo la gentileza de ir a mi oficina y me dijo que esa había sido una decisión caprichosa de ese señor que anda por la televisión hablando de la Banelco de oro. Por eso, entonces uno dice si es un capricho o qué...

Sr. Martínez (A.A.). – No... por favor... A mí lo que me interesa es el bien protegido y que esto quede claro: que las provincias no pierdan jurisdicción sobre los recursos naturales. Y en esto me queda absolutamente claro que no se pierde jurisdicción.

Otra cosa de la que habla con mucha claridad es que actúa como regulador del recurso hídrico, siempre hace hincapié en ese tipo de definiciones y recuerdo que el amigo Villalba nos explicaba cuáles eran los lugares que realmente serían determinados como para ser protegidos. Con respecto al inventario, el señor IANIGLA va a coordinar para que haya un solo lenguaje que todos sabemos en cada uno de los lugares. En mi provincia no tendríamos demasiado problema porque el señor Villalba ha sido de los que más colaboró en el tema.

Sr. Gioja. – En la realización del inventario –estoy leyendo el Artículo 5– y monitoreo de los glaciares y del ambiente periglaciario será responsabilidad del Instituto IANIGLA con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. La presente ley la elimina con otras instituciones nacionales competentes. Eso se lo elimina expresamente.

Quiere decir que estas instituciones competentes como las universidades, provincias, organismos técnicos, no vana tener participación obligatoria en el desarrollo del inventario.

No tiene ni presupuesto, ni gente. Vamos a proponer otra cosa más seria. Un contrato firmado por la provincia de San Juan, la provincia de Mendoza, CONICET y Universidad nacional. Se levanta el gobernador de Mendoza –lo cito para que no me comprendan las generales de la ley– y dice el IANIGLA no me gusta más, rescindo el contrato y se acabo el IANIGLA y el inventario. Por eso digo que estamos trabajando en base ardid porque ni siquiera esta ley prevé que, ante la eliminación del IANIGLA podrá hacer un inventario otro organismo.

Sr. Martínez (A.A.). – Pero está la autoridad de aplicación...

Comparto con usted la idea de que debería haber mantenido la colaboración de otra institución. Pero también quiero decir...

Sr. Castillo. – Me permite una interrupción.

El domingo a la noche, de casualidad y sólo por un instante, vi un programa de televisión en el que estaba el diputado Bonasso, cuando en un momento dado se plantea este tema del Artículo 41 de la Constitución nacional a Bonasso le salió de adentro decir “en la Constitución del 49 los recursos naturales los manejaba la Nación. Y en esta, la del 94, se les ocurrió poner lo de las provincias”.

Yo respeto los conceptos pero esta es una posición claramente ideológica que todavía no se dio cuenta de que hubo una reforma constitucional en el año 1994...

Sr. Martínez (A.A.). – Repito lo que dije antes. No lo veo ni con los ojos de Bonasso ni con los ojos de alguna organización que en un determinado tuvo el honor de que pusieran un inodoro con mi nombre en la escalinata del Congreso por haber votado el tema del INVAP y Australia. No me aten ningún tipo de consideraciones y lo que diga Bonasso me importa un corno. Que Bonasso diga lo que tenga ganas.

Quiero plantear que para mí tiene la misma importancia, quizás menos, Bonasso que usted cuando discutimos estas cosas. Yo escucho a todos. Lo que a mí me molesta enormemente es que vengan representantes de las cámaras y nos mientan. Le di un inventario realizado por la Secretaría de Minería de la Nación y el hombre me lo niega.

Sr. Gioja. – *(Fuera del micrófono)* ¡Está bien!

Sr. Martínez (A.A.). – ¡No, no está bien! ¡Está mal!

Sr. Gioja. – Es el autor del proyecto.

Sr. Martínez (A.A.). – No tomo en cuenta lo que diga Bonasso...

Lo que planteo es que tenemos tres posibilidades: una que hagamos un dictamen acompañando lo que hicimos en su momento, el otro dictamen es aprobando lo que viene de diputados –estamos de acuerdo– y una tercera opción que no me parece que sea mala, pero no tengo autoridad hoy, tendría que discutirlo con mi bloque para emitir una opinión de bloque, que es analizar la posibilidad de eliminar el 17 y con alguna otra cosa que se quiera aprobar. Y el 6.

Si tuviera que optar desde lo personal, estoy de acuerdo con lo que ha venido de Diputados independientemente de que estoy de acuerdo en que el 17 haya que eliminarlo porque es inaplicable y además puede generar una litigiosidad que no es la intención hacer.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – En verdad, me siento muy, sumamente disgustada, más allá de un proyecto u otro, por el tratamiento que han tenido en esta ley las provincias argentinas, en el debate y no solamente en la televisión, ya que también allí ha sido vergonzoso. Asimismo, en la jornada de hoy hemos tenido alusiones a las provincias argentinas, y faltó poco para que nos pusieran la plumita para que nos identificaran mejor.

Lamentablemente, siento que desde Buenos Aires protegen nuestros recursos naturales, nos tienen que enseñar lo que debemos hacer, nos eliminan... Quiero manifestarles que provengo de una provincia que tiene un Ministerio de Medio Ambiente, que ha firmado un tratado de paz con importantísimas personalidades del desarrollo y del cuidado del medio ambiente, por lo tanto, quiero decirles que no nos van a enseñar qué significa cuidar el medio ambiente. En efecto, no puedo permitir que ni a mi provincia ni a mi gobernador ni a los gobernadores de ninguna de las provincias que estamos representando hoy aquí, se nos trate

como se nos está tratando.

Asimismo, deseo manifestar que esta actitud despectiva comenzó hace rato y por este tema se ha desprestigiado a nuestros ciudadanos y a la democracia de cada una de las provincias; y esto resulta intolerable, realmente intolerable. Lo que escuché en ese programa de televisión que mencionó el señor senador Castillo, es decir, esa forma que tienen de referirse a los gobernadores nacionales me resulta inaudita y es inaudito que lo toleremos en esta Casa.

Y, querido colega, esa eliminación de las provincias, por más que lo que abunde no dañe, ¿sabe lo que va a generar? Nosotros sabemos qué sucederá. Los jueces dirán que el proyecto del Senado incorpora a las provincias; que Diputados lo votó; luego, volvió nuevamente el Senado, que lo admitió y las provincias no intervienen. Entonces, ¿de qué estamos hablando?! Seguimos avasallando al Peronismo argentino. Nos avasallan en los fondos, en el tratamiento y ahora con nuestros propios recursos, ¿qué somos?! Elegimos a nuestras autoridades, somos democráticos... ¡Ah, ojo! Imaginarán ustedes que con el gobernador Peralta no tengo nada que ver, nada que ver, pero también quieren avasallar la Corte con un pedido de intervención. Es decir que, en lugar de que se tomen los recaudos para que se ejecute la medida judicial, lo mandan al Congreso de la Nación para que lo intervengamos. Entonces, reformemos la Constitución y vayamos hacia un país unitario, pero no podemos permitir, nosotros, senadores de la Nación, semejante atropello, más allá de lo que pensemos. Propongo que avancemos en un proyecto que proteja nuestros recursos naturales pero que respete nuestras autonomías provinciales, que las respete. ¡Basta de este tratamiento! ¡Basta! Lo que ha pasado en la televisión con este tema ha sido vergonzoso, ha sido vergonzoso. Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente. – Señora senadora, si usted firma...

Sra. Negre de Alonso. – Sí, voy a firmar el despacho del Senado. Si me lo da antes de retirarme, lo firmo. Si se llega a un acuerdo, luego nos lo dicen.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.

Sr. Cano. – Independientemente, de la posición que tengamos, deseo plantear una duda con respecto al artículo 15 de ambos proyectos, ya que seguro que debemos entender que estamos viviendo en un país donde se respetan las leyes provinciales, las leyes nacionales, donde la justicia tiene que ser independiente y donde hay actividades a las que hace referencia el artículo 15 que han tenido una serie de trámites y de habilitaciones para funcionar en el marco de la legalidad. Entonces, me genera la duda el artículo 15 con respecto a las actividades que se están desarrollando en la zona establecida por la presente ley. Parecería que la iniciativa manifestara que se está desconfiando de los impactos ambientales, de las autorizaciones y del cumplimiento de las normas vigentes, entonces, ¿qué ocurre si se determina que se produce impacto ambiental negativo y que no se está cumpliendo con la normativa? En primer lugar, las autorizaciones que obran en poder de estas actividades que son lícitas han sido dadas de manera irregular. Y, en segundo término, ésta está relacionada con los compromisos asumidos...

– El señor senador Gioja hace manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Cano. – Dijimos que lo plantearíamos en el bloque, pero a mí me quedan dudas. Independientemente de que no comparto que se avasallen las autonomías provinciales, en consecuencia, jamás votaría una norma que vaya en contra del federalismo. Es más, soy un defensor del federalismo y hay algunos gobernadores a los que les reconozco autoridad moral

para defender el federalismo, sin embargo, hay otros que a la hora de defender los recursos de las provincias, por ejemplo, en el marco de la coparticipación y demás, no dicen absolutamente nada de las autonomías provinciales ni del federalismo. Pero esa es una discusión para otro ámbito. Reitero, a mí me genera duda el artículo 15 de ambos proyectos en relación con las actividades que podrían estar involucradas en este artículo.

Sr. Presidente. – Una pregunta...

Sra. Negre de Alonso. – Aclaro a los colegas que me tengo que retirar...

Sr. Presidente. – Señora senadora: lamentamos que se retire.

Según lo expresado durante estas reuniones, todos los emprendimientos mineros cuentan con un estudio de impacto ambiental previo. Hoy están legalmente funcionando todas las Mineras. Lo que estamos legislando es para adelante.

Sr. Gioja. – Es una interpretación del señor presidente...

Sr. Presidente. – Sin embargo, si no se ajustan a lo que dice la ley tendrían que retroceder.

– *Varios señores senadores hablan fuera del alcance del micrófono.*

Sr. Gioja. – ¿Qué hacemos con los derechos adquiridos, porque quienes tienen aprobaciones, porque de lo contrario no podrían estar funcionando. Por ejemplo, si se decide parar una minera –por ejemplo, Veladero– hay que pagar indemnización, porque sus autoridades podrían argumentar que trabajan en función de un esquema autorizado y en forma legal.

– *Varios señores senadores hablan fuera del alcance del micrófono.*

Sr. Gioja. – Pero y quizás alguien modifique el criterio anterior.

– *Varios señores senadores hablan fuera del alcance del micrófono.*

Sr. Presidente. – Eso es discutible.

Desde mi punto de vista, la ley es inaplicable.

Sr. Gioja. – Por eso, yo coincido. ¿Quién se hará cargo? ¿La Nación, las provincias? Las provincias le otorgan la autorización, luego, la Nación les dice que no va. Esta es una hipótesis. Entonces, ¿cuánto habrá que pagar y quién lo pagará? Más allá de lo que, desde el punto de vista social, implique la paralización de una actividad de esa envergadura.

– *Varios señores senadores hablan fuera del alcance del micrófono.*

– *El señor senador Pérez Alsina solicita una interrupción.*

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Riofrío, así que es ella la que lo debe autorizar.

– *Varios señores senadores hablan fuera del alcance del micrófono.*

Sr. Pérez Alsina. – Entiendo que el problema es que tu inquietud se encuentra en lo siguiente: estoy totalmente de acuerdo con que se está produciendo un verdadero ataque al federalismo. El problema es que la combinación del artículo al cual hacés referencia con la iniciativa de Diputados es explosivo, reitero, explosivo. Cualquier juez terminará paralizando todas las entidades. En primer lugar, por la forma amplia que tiene la definición de periglaciación en el proyecto de Diputados, que es muy interpretativa. En segundo lugar, los impactos ambientales que han hecho las provincias con toda la normativa, como debe ser y aquella que no lo haya hecho en un proyecto tiene que ser sometido a juicio el organismo administrativo, la empresa... Por ese motivo no podemos dudar de que las provincias no pueden aplicarlo. Pero, de todas maneras, no es el impacto ambiental que prohíbe la actividad, como manifiesta la iniciativa de Diputados. Porque no ha hecho, por ejemplo, el impacto estratégico, que no sé que es estratégico ni lo vamos a saber, no nos preocupemos. Se van a encargar de explicarlo en los medios y en las ONG y todos aquellos intérpretes que últimamente condicionan al

Poder Legislativo.

Se los digo porque ya hemos tenido experiencia en otros temas judiciales, por ejemplo, con proyectos forestales. Pero no importa, eso es largo.... ese es el tema. Y eso me preocupa: la desconfianza de Diputados porque su iniciativa, y los tenemos que felicitar, está expresando el pensamiento del autor que hemos visto. ¿Por qué? Dice que el recurso natural es de la Nación, la provincia no existe; y que no estamos capacitados para autorizar estos proyectos. Entonces, entre la falta de definición, el impacto ambiental de esta ley que no es el que está actualmente y la prohibición, todos esos proyectos van a quedar paralizados.

A diferencia de César, les quiero aclarar que a mí me preocupa menos el derecho adquirido de una empresa que el impacto social en las diferentes zonas. Para hacer una comparación, es como si en algunas zonas de usted, José, terminaran prohibiendo la actividad cañera o nosotros la tabacalera. Es grave. Por eso, creo que estamos siendo muy claros y muy federales. Tengamos cuidado, hay un verdadero ataque al federalismo en el proyecto de Diputados. En el fondo está diciendo que las provincias no están capacitadas, sus gobernadores no saben, sus legisladores menos, que son los que han aprobado la ley, y sus autoridades que aprueban los proyectos ninguno sabe.

Sr. Presidente. — Antes de darle la palabra a la señora senadora Riofrío, les quiero comunicar que mientras dialogamos estamos haciendo circular los dictámenes.

Sra. Riofrío. — En realidad, al mencionarse este ataque a las autonomías provinciales, me viene a la memoria la exposición que hizo el gobernador de Jujuy, que no tocó en absoluto el tema productivo ni el minero. Hizo eje en su discurso en la cuestión constitucional y definió a la modificación introducida por la Cámara de Diputados como un acto de hostilidad de la Nación hacia las provincias. Realmente me pareció sumamente grave.

Deseo señalar que hoy ha venido el secretario de Medio Ambiente de la Nación, que es la autoridad máxima nacional en este tema ambiental. Ha hecho un análisis y lo expuso, creo que prácticamente lo ha leído; lamentablemente es el último día y veo que la mayoría de los senadores no lo han leído. Hizo un análisis artículo por artículo. El término dice lo siguiente: regulador de recurso hídrico, presente en el artículo 2º de Diputados, escindido del concepto de reserva estratégica será motivo de controversia técnica al momento de reglamentar la ley y hacer operativo el inventario. La definición de glaciar clásico, el descubierto donde se ve la lengua de hielo, en los dos proyectos son similares, pero el proyecto de Diputados incorpora los suelos congelados reguladores del recurso hídrico y el suelo saturado en hielo, que no tiene *a priori* el carácter de reserva estratégica. Al no estar definido el grado de saturación ni el período de congelamiento —por eso es la insistencia del término “congelados permanentes” — resultará dificultosa la implementación del inventario en los tiempos reglamentarios previstos. Porque va a tener que esperar uno, dos o tres años para saber cuánto tiempo tiene de congelado ese suelo.

Realmente existen deficiencias terminológicas en la ley modificada. Las provincias que nos vemos afectadas en esto, aunque sea potencialmente, tenemos el derecho de buscar precisión. Nosotros, insisto, no estamos pidiendo impunidad ni trabajar sobre zonas protegidas. Recuerdo que Villalba dijo —eso es una tranquilidad para todos— que no existe en el momento en Argentina ninguna explotación en zonas protegidas. No existen. No lo dije yo ni ningún defensor, sino que lo dijo Villalba. Ahora, la indefinición o las indeterminaciones terminológicas que va a traer la definición de “periglacial”, a nosotros potencialmente nos preocupa y mucho. Como defensores de nuestras provincias tenemos todo el derecho de pedir precisión.

Asimismo, deseo señalar que estoy de acuerdo con el señor presidente de la Comisión, creo que ninguna de las dos leyes es un dechado de virtudes. Pero al menos la que votó este Senado —lo dije en la Comisión— es la ley realmente del consenso. En los medios se ha insistido en denominar a la ley de Diputados como “producto del consenso”. Entonces, lo voy a reiterar todas las veces que sea necesario: el consenso del señor senador Filmus y del señor diputado Bonasso, porque el bloque oficialista no acompañó esa ley, a diferencia de la ley originaria que votamos en este Senado, que tuvo el voto de todos los bloques.

Entonces, a mi criterio, no sólo es mejor, sino que realmente es representativa de un verdadero consenso político que se dio en este Senado y por mérito del senador que hoy es el detractor número uno de su proyecto original.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Castillo.

Sr. Castillo. — Todos hemos tomado posición y estamos firmando.

Todos los que estamos aquí ya hemos hablado, pero mañana nos veremos en el recinto y allí plantearemos lo que consideremos necesario.

Solamente deseo señalar dos cuestiones. Primero, considero que el proyecto es bueno porque, más allá de las contradicciones que pueda haber, habría una ley que proteja a los glaciares, que hoy no la hay. Podemos discutir sobre las definiciones, se podrá hacer una enumeración o un trabajo y ordenar la tarea, me parece que estamos todos de acuerdo en este sentido y esto es bueno. En lo que diferimos es en los artículos que se plantean.

Lo que yo quiero decir —y para cerrar— es que me parece muy bien que se plantee sacar un artículo que se veía inviable como el 17. Ahora bien, permítanme decir que plantear esto después de todos los meses de debate, a dos o diez horas del debate, es una absoluta irresponsabilidad y una muestra de una absoluta improvisación en estos temas.

Con respeto a los señores senadores, les digo que aquí la vanidad también jugó, quienes hicieron las modificaciones no dejaron atrás su vanidad. Acá hubo organización no gubernamental, fuera de este Senado, que ha sido la promotora de esto. Por eso, advertimos estos cambios. Hay mucha irresponsabilidad. Repito, yo celebro —porque es bueno—, aunque sea sobre el último minuto, rectificar esto. Pero estoy seguro de que si hubiéramos tenido más tiempo, más debate y no hubiera habido —podríamos decir— apuros externos, quizás podríamos estar modificando en algunas cosas el 2 —que acá se planteó—, el 5 o algún otro. Es más, es algo sobre lo que —como senadores de la Nación, con el artículo 41 de la Constitución vigente— me parece no debería haber ni siquiera tema de debate. Con esto termino y les digo que mañana nos veremos.

Sr. Filmus. — Es la primera vez que se discute el artículo 17. La única oportunidad que hubo para discutir el artículo 17 ha sido ésta. El artículo 17 fue incorporado durante la sesión de Diputados. Se aprobó en Diputados. No fue producto de ningún acuerdo ni yo lo había leído antes. Lo leí cuando lo aprobó Diputados. Así que la primera vez que aparece el artículo 17 es en estas dos semanas que estuvimos discutiéndolo aquí. Por eso, creo que el artículo 17 es un artículo que es inaplicable; no así el resto.

Sr. Presidente. — No habiendo más temas para tratar, damos por finalizada la reunión del día de la fecha.

— *Son las 16 y 29.*